

Nuestra Bandera

N.º 126 septiembre/octubre
1984 200 ptas.

● **DESPUES
DEL A. E. S.**

Antonio Gutiérrez
Francisco Frutos

● **APUNTES SOBRE
LOS TRABAJADORES
INTELECTUALES
Y LA POLITICA**

Daniel Lacalle

REVISTA TEORICA Y POLITICA DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

DOSSIER

RECONVIERTEN LA INDUSTRIA



Nuestra Bandera

REVISTA TEORICA Y
POLITICA DEL PARTIDO
COMUNISTA DE ESPAÑA

Consejo de Redacción

Eulalia VINTRO - Directora
Vicente CAZCARRA } Redactores
Daniel IRIBAR } jefes
Luis ARROYO
Esther BENITEZ
Emerit BONO
José Luis BUHIGAS
María Antonia CALVO
Andreu CLARET
Ramón ESPASA
Antonio GUTIERREZ
Antonio KINDELAN
Daniel LACALLE
Armando LOPEZ SALINAS
Juan Ramón MEDINA
Adolfo PASTOR
Fernando PEREZ ROYO
Damián PRETEL
José SANDOVAL MORIS

Maqueta y confección:

Javier URBEZ

Secretaría de Redacción:

María GARCIA OSET

Distribución, suscripciones,

Redacción y Administración:

Santísima Trinidad, 5. Madrid-10.

Teléfono 446 11 00. Ext. 173.

Depósito legal: M. 20.166-1977

Imprime:

HAUSER Y MENET, S. A.

Plomo, 19. Madrid-5.

De este número se han editado
5.500 ejemplares.
Número de suscriptores: 926.

A LOS LECTORES	3
EN PORTADA, DESPUES DEL AES	
Acuerdo Económico y Social: la concertación social en el límite, por <i>Antonio Gutiérrez</i>	4
Por una política de profundas transformaciones sociales, por <i>Francisco Frutos</i>	10
ESPAÑA	
La izquierda y los comunistas hoy, por <i>Antonio Gutiérrez Díaz</i>	15
Una Ley provisional para un problema constante, por <i>Enrique Veloso</i>	21
INTERNACIONAL	
Centroamérica, filosofía de un despojo, por <i>Nelson Marra</i>	24
PROBLEMAS DE HOY, LA TEOLOGIA Y LA LIBERACION	
¿Cristianismo y liberación, por <i>Jordi López Camps</i>	27
Teólogos del dólar, por <i>Armando López Salinas</i>	30
DIALOGOS COMUNISTAS	
Adolfo Piñedo y Juan Moreno	32
DOSSIER, RECONVIERTEN LA INDUSTRIA	
Reconversión industrial y clase obrera, por <i>Andrés Bilbao</i>	36
La reestructuración industrial con el Gobierno socialista, por <i>Juan Ignacio Marín</i>	39
Reconversión industrial a la española: el caso siderúrgico. <i>Eliseo Blasco</i>	43
La renovación de nuestro sistema científico-técnico, otra ocasión perdida, por <i>Adolfo Hermida</i>	46
EN LA FRONTERA	
Controversia sobre las condiciones de la revolución socialista (II), por <i>Adam Schaff</i>	51
CULTURA	
Apuntes sobre los trabajadores intelectuales y la política, por <i>Daniel Lacalle</i>	58
Manuel Sacristán, filósofo, por <i>Francisco José Martínez</i>	64
Perspectiva marxista de Goethe, por <i>José María Lasso</i>	66
Sobre la novela africana (negra) actual, por <i>Fernando Santos Fontenla</i>	72
Patrimonio histórico e intereses colectivos, por <i>Antonio Miranda</i>	76
HISTORIA	
Cuándo entraron en combate las Brigadas Internacionales, por <i>Santiago Alvarez</i>	80

Nuestra Bandera

A LOS LECTORES

En el Dossier de este número de NUESTRA BANDERA hacemos balance de la política de reconversión industrial (págs. 36/50). Los trabajadores de los sectores en reconversión viven hoy peor que hace dos años. No son los únicos. La línea económica aplicada por el Gobierno González perjudica a la mayoría de los españoles. Es necesario defender una política distinta.

En portada se reflexiona sobre esa política distinta después del AES (págs 4/14): movilizaciones y alternativas, presión y negociación, incidirán en la línea económica en vigor para modificarla. Si no se modificara, el país se encaminaría a callejones sin salida; pero nuestro destino no está ligado a esa catástrofe; nuestro destino va ligado a que la situación mejore: somos una opción más matizada, menos unidimensional de lo que los anticomunistas propagan. Lo hemos sido siempre: hoy, cuando conmemoramos la revolución de octubre del 34, no está de más recordar cómo después de la derrota, en un momento en que todo podía empujar a ligar el destino de los comunistas a la catástrofe, José Díaz defendió que "nuestra bandera es el Frente Popular": la lucha y la alternativa. Sobre esa afirmación se fundamentó entonces el logro de la centralidad comunista (ver el artículo de Antonio Elorza, número cero de la Biblioteca de "Mundo Obrero").

La preocupación por la recuperación de la centralidad comunista está presente en otros artículos de este número de NUESTRA BANDERA: en el de Antonio Gutiérrez Díaz sobre la izquierda y los comunistas (págs. 15/20), en el debate entre Juan Moreno y Adolfo Piñedo de los Diálogos Comunistas (págs. 32/35), en los apuntes sobre los trabajadores intelectuales y la política de Daniel Lacalle (págs. 58/63). En realidad, ese es un problema que subyace a toda la actividad cotidiana de los comunistas.

Dificultan a veces su logro decisiones tomadas por algún Partido Comunista. Así ahora la, a nuestro parecer injusta, expulsión de Adam Schaff del PC Polaco por un "delito" de opinión. Una vez más tenemos que afirmar aquello tan elemental de que la libertad intelectual es uno de los elementos que configuran el perfil de una democracia moderna. Nosotros seguimos publicando de Adam Schaff su Controversia sobre las condiciones de la revolución socialista (págs. 51/57).

Terminamos con una mala noticia: a partir del próximo número, NUESTRA BANDERA se venderá a 250 pesetas. Nuestros costes se han disparado: en la actualidad, cada número de la revista nos cuesta 234 pesetas, 34 más que el precio de venta. Es evidente la necesidad de la subida, tanto más si se tienen en cuenta los descuentos a librerías y organizaciones del Partido. De todos modos, seguiremos manteniendo el precio actual a nuestros suscriptores.

La Redacción

ACUERDO ECONOMICO SOCIAL: LA CONCERTACION SOCIAL EN EL LIMITE

Antonio Gutiérrez

4



Hasta ahora, en los convenios colectivos y en los acuerdos generales, las diferencias entre las partes firmantes surgían en la aplicación de sus contenidos. En unos casos por incumplimientos, en otros por la mayor o menor progresividad con que se desarrollaban en la práctica. Los acuerdos reflejan la correlación de fuerzas en un momento dado, su síntesis puntual.

En el Acuerdo Económico Social, los firmantes han entrado en colisión durante el protocolo mismo de la firma y en el capítulo más controvertido: la flexibilidad del mercado del trabajo. Mientras CEOE interpretó lo firmado como el compromiso del Gobierno de sustituir el artículo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores por una nueva normativa que permita el despido colectivo y automático por decisión libérrima del empresario que tenga menos de 25 empleados, la UGT quiere leer justo lo contrario: la homologación de nuestro marco de relaciones laborales a las directrices más positivas de la CEE en esta materia.

Pasando por alto lo que de pintoresco tenga la diferente lectura de un asunto de capital importancia, desbloqueado en una reunión específica de los máximos representantes de

UGT y CEOE con el presidente del Gobierno, no deja de ser un dato muy revelador del estrecho margen por el que discurre la concertación social en España. Tanto es así, que el margen para acordar categorías económico-sociales se sitúa en las coordenadas de la semántica del texto firmado. En el fondo, es indicativo de la fragilidad del AES, del equilibrio tan inestable en el que se basa. El desacuerdo está en el propio acuerdo. Esto obedece a condicionantes superpuestos a la propia negociación. De tal forma que se desdibuja la correlación de fuerzas en presencia de los interlocutores sociales. De un lado, por la incidencia del contexto político sobrelorado por múltiples razones (inestabilidad política, proximidad de elecciones, etc.); de otro, por la rigidez extrema de las políticas económicas trazadas previamente por los Gobiernos, paradójicamente amparadas en el liberalismo económico.

Acuerdos y política

Si el AES es el caso límite de un acuerdo forzado, los anteriores en nuestra corta pero intensa historia de acuerdos generales han adolecido también de una excesiva justificación en base a la coyuntura política, estuviesen o no sentados a la mesa de

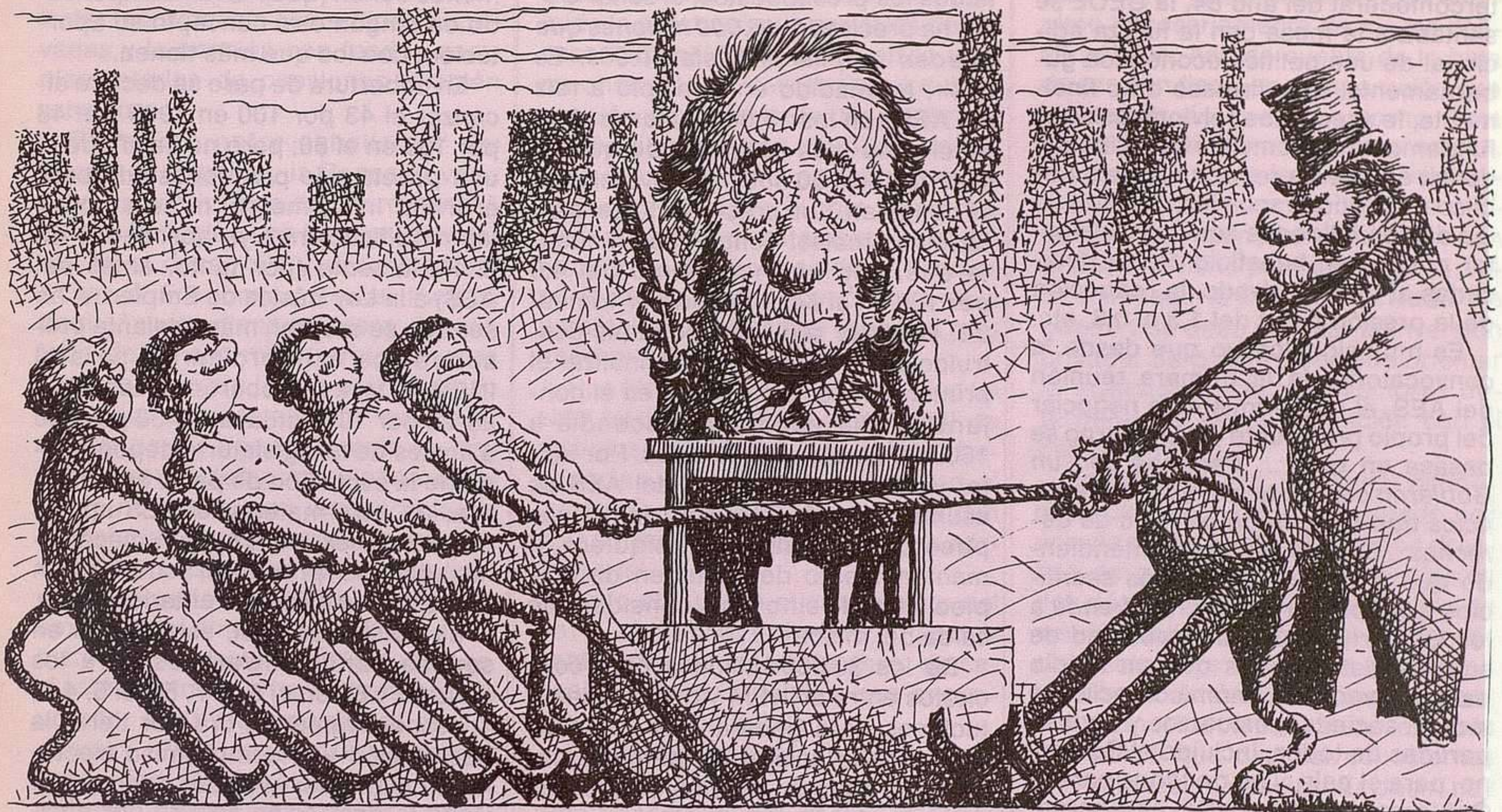
negociaciones de los sucesivos acuerdos, los Gobiernos de turno.

La simultaneidad entre transición política y agudización de la crisis económica en España ha caracterizado a la concertación social en nuestro país, dándole una fuerte componente política, de la que no podían abstraerse los agentes sociales, y aún menos el movimiento sindical de clase y representativo; habría demostrado una gran irresponsabilidad histórica.

Es una peculiaridad que hay que asumir para entender, entre otras cosas, las diferencias que nos separan de la experiencia de la negociación en otros países con regímenes democráticos ya consolidados, en los que la concertación es fruto de importantes crisis sociales, como los acuerdos de Grenelle en Francia en diciembre del 68 (tras el mayo francés), o los de Roma de enero del 70 (tras el otoño caliente del 69 en Italia).

En nuestro caso, ya los Pactos de la Moncloa vinieron precedidos de los primeros preparativos golpistas de las reuniones militares en Jávea durante el verano del 77. En este caso, los sindicatos y la patronal, imprescindibles para la ejecución práctica de gran parte de las materias acordadas, ni siquiera fueron invitadas a la negociación.

El AMI de enero del 80, firmado por la UGT-CEOE, no fue más que el com-



plemento para la negociación colectiva de un acuerdo más amplio, y previo, entre el Gobierno de UCD, el PSOE y la CEOE, que además de materializar en lo político el entierro del *consenso* de la legislatura anterior, comprendía el pacto en torno al Estatuto de los Trabajadores, pieza básica del nuevo marco de relaciones laborales y primer instrumento del programa económico diseñado por el Gobierno UCD, que apuntaba en la dirección de flexibilizar el mercado del trabajo como pedía la CEOE.

El Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) en julio del 81 nace tras el golpe frustrado del 23 de febrero.

En todos los casos, la gravedad de los problemas económico-sociales y la presión social han pesado decisivamente, pero los condicionantes políticos han sido de tal envergadura, que los propios sindicatos, al explicar y defender los acuerdos, han valorado sus contenidos al crisol de aquéllos. El ejemplo más destacable puede ser el ANE, que hizo variar algunos postulados económicos del equipo de Calvo-Sotelo, que permitió recomponer la división sindical generada en el AMI, que materializó tesis sindicales avanzadas por CC. OO. como anteponer el objetivo de creación de empleo a la contención del déficit público o a la reducción brusca de la inflación, etc. En definitiva, un acuer-

do defendible por sí mismo, fue justificado por los propios sindicatos como una secuela del 23-F, con cierto tinte defensivo. La cesión de dos puntos de poder adquisitivo para crear 350.000 empleos (no se crearon, pero tampoco se perdieron), mucho más progresista que la rebaja de la capacidad adquisitiva para la exclusiva recuperación del excedente empresarial, teoría hoy en vigor y rigurosamente aplicada, se explicó más como un sacrificio ante la inestabilidad política del sistema por parte de los trabajadores que como una conquista de éstos en la orientación de la política económica.

Cabía esperar que con la mayor consolidación del sistema político, y ocupando el primer plano de la atención pública los problemas económicos, que ciertamente son cada vez más graves, la negociación de los mismos, la concertación social fuese más nítida, menos condicionada por factores políticos, aunque éstos siempre estén presentes y deban considerarse. Sin embargo, la experiencia del AES no ha confirmado aquellas hipótesis.

Tarde y mal

La negociación de un conjunto de medidas y reformas en lo económico

y social solicitada por CC. OO. el día siguiente de las elecciones del 28 de octubre del 82, precisamente con el objetivo de materializar el proyecto de cambio necesario, arropado con la máxima participación y en consecuencia con el apoyo de los trabajadores y sectores sociales más progresistas, ha llegado tarde y mal.

Tarde porque se convoca a negociar el AES cuando el ajuste más duro se ha impuesto sin negociación, con un elevado coste social y con el diseño de una política económica que sustituye y contradice al programa electoral del Gobierno. Mal, porque desde el primer día aparece muy orientada a paliar el desgaste electoral sufrido por el Gobierno a los veinte meses de su mandato, que sondeos rigurosos (dentro del considerable margen de error de todo sondeo a dos años vista de las próximas elecciones) llegan a cifrar en una pérdida de casi 15 puntos. Mal, porque el límite de la voluntad negociadora del Gobierno es realmente bajo, quedándose en la negociación presupuestaria de un año, el 1985, de unos presupuestos generales restrictivos y la culminación del ajuste centrada en la contención de las rentas salariales, tanto directas como indirectas, para los próximos años 85 y 86.

Y mal también, porque como ya ocurriera en el frustrado Acuerdo In-

terconfederal del año 84, la CEOE se sentaba a la mesa con la fuerza adicional de una política económica gubernamental que, firmase o no finalmente, le aseguraba reivindicaciones fundamentales como la reducción del déficit a base de reducir el gasto público en partidas sociales, la caída de las disponibilidades líquidas del sector público en beneficio de las dedicadas al sector privado, la reducción de la presión fiscal del 1,3 al 0,8, etc.

Es muy significativo que desde la convocatoria de la primera reunión del AES, el requerimiento a negociar del propio presidente del Gobierno se basase en que: ... *Pedimos con un Gobierno socialista los mismos sacrificios que se hicieron con uno de derechas...* Es decir, se sigue entendiendo que la concertación y los sacrificios que comporte son una *ofrenda* a los Gobiernos para la estabilidad de sus mandatos, antes que un medio para el avance económico-social de toda la sociedad, esfuerzos y contrapartidas de todos, incluido el Gobierno, para el país, y no de todos para el Gobierno. Por otra parte, esta caracterización de los acuerdos generales, alimentada en primer lugar por los Gobiernos, induce y alimenta a su vez las corrientes de opinión existentes en el seno del movimiento sindical, que desde posiciones defensivas en el fondo, por añoranza de prácticas y esquemas sindicales propios de la etapa de desarrollismo, que no volverán, se detienen solamente en el intríngulis político de la concertación.

Valorar por sus contenidos

Pese a todo, la C. S. de CC. OO. ha participado en la negociación del AES y adoptado una posición de rechazo, en perfecta coherencia con su política de solidaridad aprobada en el III Congreso. Ha valorado el acuerdo por sus contenidos.

El primer capítulo y el más relacionado con la creación de empleo, objetivo primordial del acuerdo, al menos en la declaración de intenciones de los interlocutores, es el de las inversiones públicas. La propuesta inicial del Gobierno situaba su crecimiento en el -0,47 en términos reales; finalmente, en el AES se adiciona *hasta un montante de 50.000 millones*. Volvemos a la solución, muy socorrida en el AES, de refugiarse en el texto críptico, porque, una vez exami-

nados los presupuestos, el señor Boyer ha precisado: *15.000 millones que pueden ampliarse hasta 50.000*. Es decir, lo añadido en principio a raíz del AES son los 15.000 millones. Aun en el caso más optimista de que se inviertan los 50.000, las inversiones se congelan, con crecimiento cero en términos reales. Tengamos en cuenta que, con un incremento del 4,6 por 100 en el 84, en el primer trimestre, el sector público sólo había destruido 102.900 empleos; al finalizar el primer semestre esta cifra en el conjunto de la economía ascendía a 160.000 empleos destruidos. Por tanto, ya con este capítulo del AES se asume no ya la creación de nuevos puestos de trabajo, ni siquiera el mantenimiento del volumen de empleo actual, sino una considerable caída del mismo.

De los 30.000 millones para ciertos entre el INEM y diversas instituciones para generar 180.000 contratos, cabe aclarar en primer lugar que se trata de contratos para obras de restauración o reposición de infraestructura y no de nuevos puestos de trabajo; pero además, para establecer tan sólo 100.000 (ochenta mil menos de los previstos en el AES) con 30.000 millones, cuyos contratos serían de una duración de tres meses, por tanto sin derecho a prestación por desempleo una vez finalizado el contrato y a salario base.

El Fondo de Solidaridad, propuesto en solitario por CC. OO. durante años, se recoge en su denominación, pero para tergiversar su contenido. Se establece un fondo de 60.000 millones, con una aportación excepcional del 0,56 por 100 a la cuota por Formación Profesional. El 0,28 por 100 a cargo de los trabajadores y la otra mitad de las empresas. Ahora bien, a los empresarios se les baja del 0,4 al 0,12 su cotización a la Formación Profesional (justo el 0,28 por 100 que van a aportar), más una reducción del 0,3 por 100 del tipo de cotización a la Seguridad Social, más un beneficio fiscal de 160.000 millones. Como se ve, los 20.000 millones que aportan los patronos, lo recuperan con creces por el mismo concepto empleado para el Fondo (Formación Profesional) y otros varios. También en este apartado, la posición de principio de la CEOE no ha permitido ni el *camuflaje*. Gobierno y UGT han consentido en crear un instrumento de solidaridad al revés: de los que

menos tienen (que no ven compensado en ningún otro concepto su aportación) con los que más tienen.

En cobertura de paro se declara alcanzar el 43 por 100 en 1985 y el 48 por 100 en el 86; pero no se añade ni una peseta a lo presupuestado para el INEM inicialmente, ni se amplían las modificaciones ya aprobadas en el Parlamento (por tanto, antes del AES) a la Ley Básica de Empleo. A no ser que se arbitren más adelante presupuestos extraordinarios para el INEM, la tasa de cobertura pasará del 25-26 por 100 actual al 35-38 por 100 a finales de la legislatura, dependiendo de la evolución de paro. En definitiva, en esta materia, el AES aporta *declaraciones*, pero ningún mecanismo adicional, propio del acuerdo, con respecto a lo existente anteriormente.

La política salarial, establecida en sendas bandas salariales para los años 85 y 86 en el 5, 5-7, 5 y el 5, 4-6, 4, respectivamente, tira por tierra la declaración y el compromiso electoral de mantener el poder adquisitivo. Dada la desviación segura por encima del 8 por 100 de la inflación en 1984, y aun aceptando la más que dudosa previsión del 7 por 100 para el 85, el mantenimiento del poder de compra de los salarios exige un incremento del 8,75 por 100 para 1985. Pese al insistente mensaje gubernamental de que el ajuste ya se ha cerrado con el 84, lo cierto es que el AES proyecta dicho ajuste, aunque ligeramente menos brusco, para los dos próximos años. En este capítulo merece especial atención la cláusula de revisión salarial. Se recoge la vieja reivindicación de CEOE de revisión anual mezclada con la negociación colectiva del año siguiente y por tanto condenada a su inutilización. Ni en el ANE, que era semestral, ni en el AI'83, a los nueve meses, pudo la patronal imponer su criterio, que ahora se ve afectado.

También en Seguridad Social se avanza por el camino trazado por CEOE. La asistencia sanitaria se ve abocada a su degradación paulatina, con recortes de 70.000 millones en el INSALUD. Las prestaciones económicas, además de no garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo con el 7 por 100 de incremento de las pensiones, aleja la perspectiva de equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional. Tanto para disponer de una asistencia sanitaria adecuada como para contar con

una pensión digna se induce a contratar la asistencia con entidades privadas y la pensión con fondos complementarios de pensiones también privados.

El "pacto entre caballeros" del Banco de España y la Banca privada para bajar los tipos de interés en 1,5 puntos ha tenido una incidencia notable en el desarrollo y desenlace del Acuerdo Económico Social. Para la pequeña y mediana empresa, necesitada de dinero más barato, apenas representa nada, ya que el ritmo de reducción de la inflación es mayor que el de los tipos. Además no hay compromiso temporal alguno en el pacto no escrito con las autoridades monetarias, de tal forma que la seguridad del pequeño inversor que acude al mercado del dinero es nula. Sin embargo, el dinero público, que también baja en igual cuantía sus tipos, sí está sujeto al horizonte temporal de un año, el de vigencia de los presupuestos. Para compensar la menor capacidad de financiación del déficit público, cuadrando los presupuestos, el referido pacto sí ha servido como catalizador de la reducción del déficit público más de lo previsto al inicio de las negociaciones (del 5,6 al 5 por 100 del PIB) y, en consecuencia, del gasto público (340.000 millones).

Nuevamente, la utilización demagógica de las dificultades de las PYMEs ha servido a las grandes para sacar mejores contrapartidas. A su vez, condicionaban cualquier aproximación del Gobierno a las propuestas sindicales, que normalmente conllevan aumentos en el gasto público.

El déficit público

La batalla desencadenada por la derecha económica en España y en Europa por la reducción del déficit público tiene una componente económica fundamental, pero también está connotada por aspectos ideológicos. Antes de discernir entre armamento o reducción del déficit es conveniente aclarar algunas premisas. La causa última del déficit estructural de los Estados capitalistas desarrollados, la crisis fiscal del Estado, reside precisamente en la propia crisis del sistema y en el proceso de distribución de la actividad económica entre sector público-sector privado durante la anterior etapa de acumula-

ción. De un lado, los Estados han asumido la prestación de servicios de escasa rentabilidad a corto plazo y en muchos casos deficitarios. La concepción del *Estado del bienestar social* ha sido en gran medida la forma más aparentemente social que ha tenido el sector privado para no responsabilizarse directamente en el desarrollo social, para eludir una buena parte de los costos económicos de la prestación de servicios cada vez más necesarios para la comunidad.

Por otra parte, el sector público ha sido tradicionalmente el hospital de distintas actividades industriales fracasadas en el sector privado o el trampolín para otras que en el origen comportaban un elevado riesgo empresarial.

Todo ello unido al crecimiento del paro, desaprovechando ingentes cantidades de mano de obra, de capacidad de producción, han engendrado el déficit público.

En el caso español, la crisis fiscal del Estado se da en una situación de semidesarrollo del sector público. Mientras el empleo público industrial es de un 8 por 100 en España, en Francia es de un 20 por 100, en el Reino Unido del 22 por 100 y en la República Federal Alemana ronda el 30 por 100. En prestaciones sociales las diferencias son más brutales: el 26 por 100 de cobertura de paro en la actualidad contrasta con el 87 por 100 de la RFA, por citar un solo ejemplo. El nivel adquisitivo de nuestros pensionistas, o la asistencia sanitaria, distan mucho de las cotas medias de los países de la CEE.

Asistimos, pues, como en Europa, a un ataque planificado contra el llamado Estado del bienestar social, pero sin que en España hayamos pasado del "semi-bienestar social".

Frenar el crecimiento del déficit público se puede hacer de otra forma en nuestro país: atacándole a su raíz, es decir, generando empleo mediante un proceso simultáneo de saneamiento e inversión en el sector público. Téngase en cuenta que en España no hay ningún sector que haya tocado fondo o que no esté necesitado de nuevas inversiones y hay muchos nuevos donde invertir, y más en el terreno de las tecnologías de base y grado medio que en la punta, como de manera engañosa insinúa el Gobierno actual. Por otra parte, ateniéndonos al propio informe de la OCDE sobre España de 1984, en nuestro

país mayor gasto público no es sinónimo necesariamente de mayor déficit público, habida cuenta de la baja de presión fiscal en comparación con los países de nuestro entorno. Esta vía es, además de progresista, más rentable que la que se viene utilizando. Pero, además, lejos de revivir modelos keynesianos, la inversión pública no tiene por qué ser sustitutiva o impedir la inversión privada. Se puede y se debe orientar la inversión privada. Se puede y se debe orientar la inversión pública en sectores determinados en combinación con el capital privado.

Por el contrario, el equipo económico del señor Boyer ha optado por una vía muy distinta. Reducción drástica de gasto público y financiación del déficit mediante la emisión de deuda pública. Además de injusto socialmente, este método ha entrado en un círculo vicioso. Para pagar intereses y amortizaciones de deuda, este año habrá que destinar ochocientos mil millones de pesetas. Es decir, hay que endeudarse nuevamente para financiar la deuda anterior, no ya el déficit público. En definitiva, estamos alcanzando un estadio en que la inversión del Estado, lejos de alimentar el crecimiento y la recuperación del empleo, sólo alimenta la especulación improductiva de la gran Banca. El dinero va a parar a un horno presupuestario del que sólo sale humo blanco.

Paradójicamente, las propuestas de CC. OO. en el AES, para generar empleo directo, sumadas de mala manera por el Gobierno, daban 500.000 millones y han sido piedra de escándalo. Los gastos financieros del Estado de ochocientos mil millones, que no producen empleo y mantienen a duras penas o empeoran las prestaciones sociales, se toman como algo natural.

En todo ello hay también una vertiente ideológico-cultural. El sistema se desresponsabiliza de su crisis, achacándola a los elevados costes laborales, al paternalismo asistencial del Estado, de su Estado, a la pesada carga del sector público, engordado con quiebras fraudulentas en el pasado. Se trata de abrir camino a la insolidaridad, a la supervivencia a costa de perder derechos adquiridos entre todos: el derecho al empleo, al puesto de trabajo estable; a normalizar el mercado negro de mano de obra, mientras se destruye el empleo fijo.

Con el Acuerdo Económico Social, analizado detenidamente en todos y cada uno de sus capítulos, se dan pasos y no pequeños acuerdos con el tratamiento económico, social y cultural de la crisis propugnado por la patronal.

El sector privado decidirá

Lo grave es que, llegados a este límite de entrega, por coherencia, el señor Boyer entrega la iniciativa exclusiva de la recuperación económica al sector privado. Esto en España significa dejarla en manos de una decena de personas, entre Consejo Superior Bancario y cúpula patronal. Máxime cuando el cuantitativamente importante sector de la pequeña y mediana empresa está subsumido en la CEOE y con un peso específico muy reducido. Las reformas estructurales (sistema financiero, fiscalidad, etc.) imprescindibles para que este sector tuviera un mayor dinamismo en un mercado cada vez más cambiante y competitivo, ni siquiera han empezado a diseñarse.

En cuanto a la salida negociada de la crisis, como estrategia que permita una mayor incidencia de la clase obrera en el proceso económico-social, el AES es un serio retroceso. Incluso los avances formales, como discutir por primera vez con los sindicatos los presupuestos generales del Estado, han terminado siendo avances reales para la patronal, que ha sido el único interlocutor social que ha determinado su ajuste final, en detrimento de la expansión preconizada por CC. OO. y en menor medida por UGT.

Salidas para el sindicalismo

Aun comprendiendo que la situación generada por el AES azuza las tendencias a la radicalización en el seno del movimiento sindical, caer en ello no supondría más que coronar políticamente la operación de CEOE y del propio Gobierno de arrinconar y reducir la expresión sindical más progresista, y a la vez más útil, con que cuenta nuestro país.

Cabría pensar que con el AES no le queda otra salida al sindicalismo

de clase que resistir, renunciar por el momento a la salida negociada de los problemas derivados de la crisis y practicar una acción de defensa de los sectores de la clase en mejores condiciones subjetivas de luchar y responder que son los activos fijos. Acumular fuerzas, se suele decir, para tiempos mejores. En este planteamiento, el terreno más relevante para rentabilizar la acción sindical es el convenio colectivo.

Sin embargo, las cosas no son tan simples. Ante un tratamiento de la crisis globalmente reaccionario, no sólo de las rentas salariales, y disgregador del mercado de trabajo, y en consecuencia de las bases del movimiento sindical, no se puede responder precisamente con una acción dispersa, limitada a la negociación colectiva, que aun con una plataforma reivindicativa común acaba plasmándose en cada realidad distinta de cada empresa o sector. Por otra parte, la negociación colectiva pierde peso en el conjunto de frentes del trabajo sindical y afecta cada vez a menos trabajadores. Involuntariamente se puede alimentar el corporativismo y la insolidaridad. No sólo no estaríamos acumulando fuerzas, sino que las estaríamos dispersando, aunque ocasionalmente pudieran darse luchas localizadas de gran relieve.

También se puede estar a la defensiva con mucha combatividad.

Después del AES, lo que menos cabe es la defensiva. Además de un mal acuerdo por sus contenidos, es un generador de contradicciones entre los propios firmantes, y por la distinta naturaleza en esta ocasión de los firmantes con respecto al AMI, va a ser (está siendo ya) un terreno resbaladizo para UGT.

El AES no es la última palabra de lo que se ha presentado como única política económica posible, la de Boyer. En todo caso, puede ser el último cartucho que dinamite esta política económica para abrir paso a un período de debate y polémica más vivo, dentro incluso de la propia familia socialista. Sobre todo, cuando antes de empezar su andadura, el propio presidente de la patronal declara que *no he firmado un compromiso para crear empleo*; es decir, que la recuperación prometida con el AES, en el 85 y en el 86, será de recuperación del excedente empresarial, pero de pérdida de empleo y de salarios.

Así pues, junto a la negociación colectiva, con la lucha necesaria para conseguir buenos convenios, y unitarios, sin perder espacio de negociación, junto a la presión articulada y con alternativas en todos los campos en que se degrada el empleo o las condiciones de vida (reconversión, Seguridad Social, etc.), es imprescindible contraponer con fuerza un marco alternativo de solución de los problemas de la crisis, unas coordenadas precisas que den trabazón lógica y coherencia tanto a la contratación colectiva como a cuantas luchas sectoriales o parciales se puedan desarrollar.

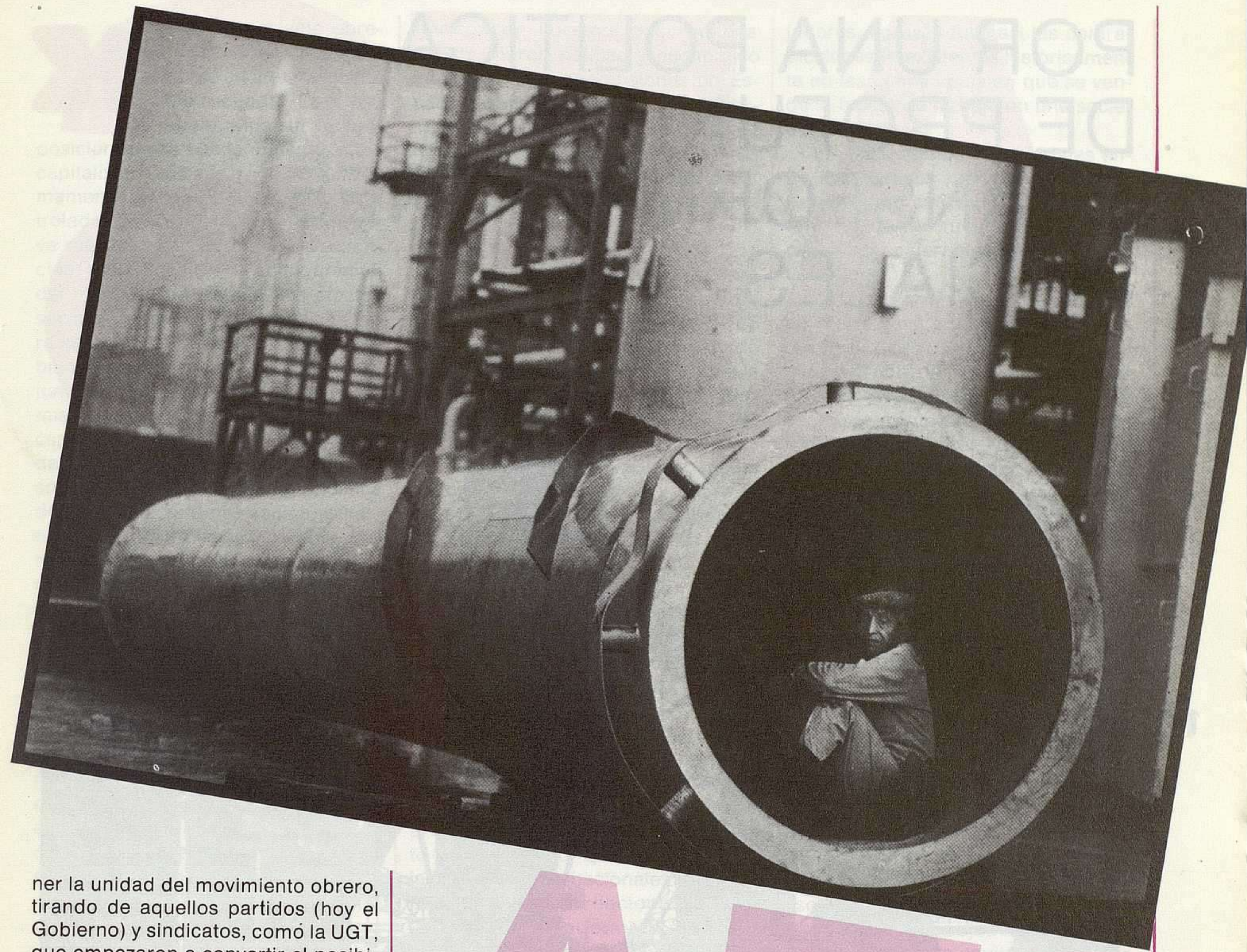
La C. S. de CC. OO. diseñó al inicio de la transición, y ante los primeros síntomas de agravamiento de la crisis, la estrategia de solidaridad nacional y de clase, que hoy tiene plena vigencia.

En lo económico-social, por su flexibilidad, por ser un conjunto de propuestas que pueden aplicarse gradualmente, sin representar un programa de máximos para conseguirlo de una vez. Por su estricta coherencia con una perspectiva de clase nacional de superación de la crisis, no autárquica, sino que en el contexto de soluciones progresistas a escala internacional atiende a los intereses nacionales. En el terreno estrictamente económico se confronta con las recetas clásicas o la ortodoxia de la economía política. Aborda el objetivo prioritario de creación de empleo con nuevas formas solidarias de obtención de recursos sin invertir el proceso de desaceleración de la inflación o de reducción de la deuda del Estado.

En lo social, porque entraña la mejora del salario diferido de los trabajadores, de las conquistas sociales, impulsando sin reservas la responsabilidad y aportación solidaria de toda la población activa (trabajadores y empleadores) para con los parados y pensionistas.

En lo político, por el avance en la modernización y democratización del Estado, y por las relaciones industriales a que conducen las reformas estructurales que propone.

A todo lo anterior habría que añadir, tras el AES, la enorme importancia de contar con una alternativa como el Plan de Solidaridad, que también contribuye ideológicamente a frenar, a contradecir las tesis de la derecha económico-social y a recompo-



ner la unidad del movimiento obrero, tirando de aquellos partidos (hoy el Gobierno) y sindicatos, como la UGT, que empezaron a convertir el posibilismo en virtud política y acaban difuminando sus diferencias con la derecha, aceptando bastantes de sus postulados. Eso conduce a arriesgar también el predominio político. Ejemplos recientes en la República Federal Alemana y en el Reino Unido, y otros que se apuntan, por ejemplo en Francia, son, deberían ser, antes de que sea tarde, cabezas ajenas en las que escarmentar.

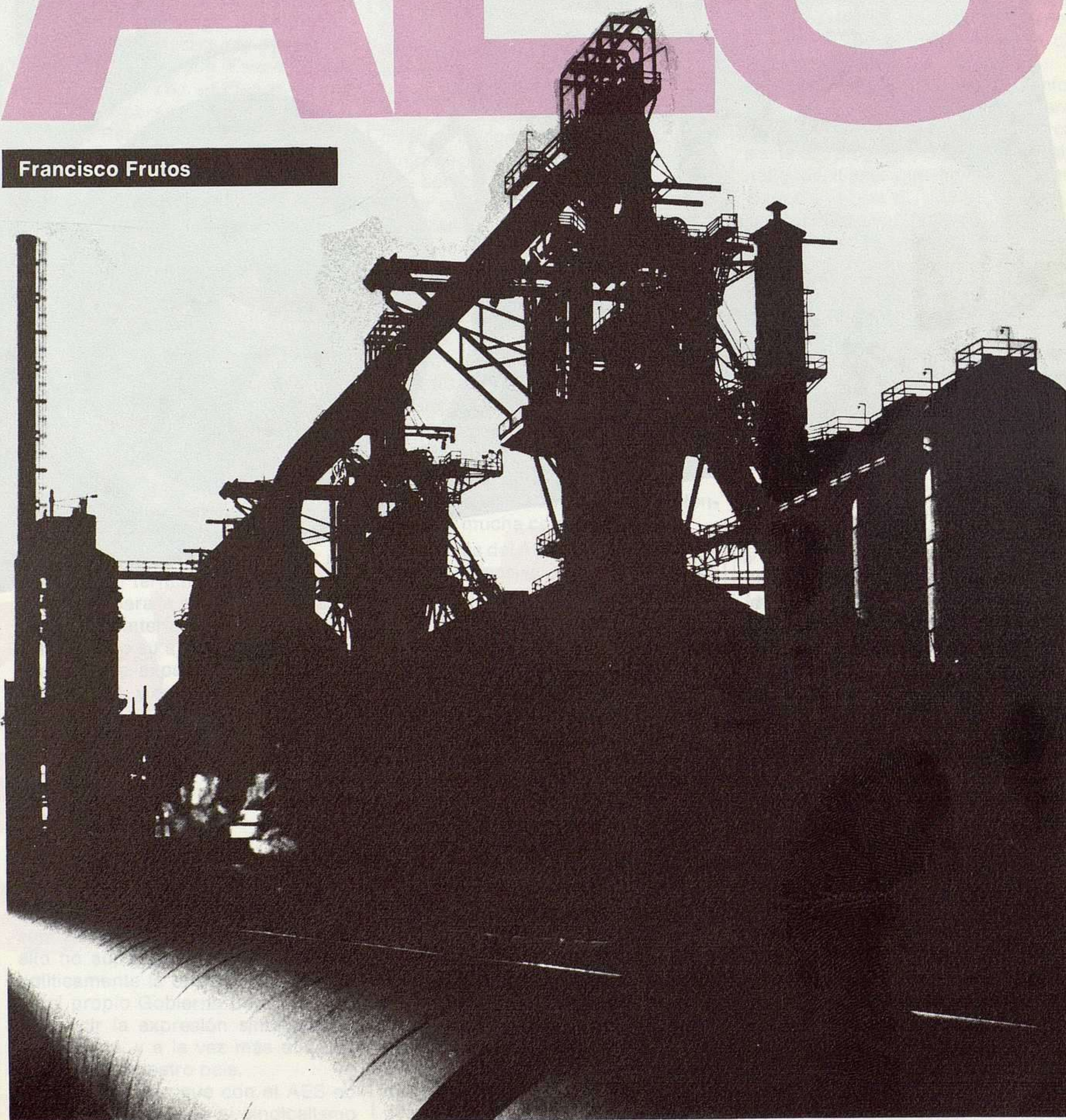
AEES



POR UNA POLITICA DE PROFUNDAS TRANSFORMACIONES SOCIALES

Francisco Frutos

10





El movimiento obrero español e internacional se encuentra en una encrucijada. La crisis económica, la recomposición de las bases materiales del capitalismo (en base a una política armamentista y de alta tecnología controlada por el imperialismo) y su nueva reestructuración, con consecuencias gravísimas en la configuración del mercado de trabajo, los efectos sociales negativos de esta política para los intereses y derechos de los trabajadores y, en definitiva, para el conjunto de la sociedad, exigen al movimiento obrero construir una política capaz de abrir una etapa de profundas transformaciones económicas y sociales: tendrá que ser una política de movilización, organización y alternativas —que potencie los valores del trabajo, de la solidaridad y de la igualdad frente a los de la disgregación social y el paro, la insolidaridad y el egoísmo.

La crisis se caracteriza en los países económicamente desarrollados por paro masivo, inflación y quebrantamiento del *Estado de bienestar social*. En los no desarrollados económicamente, por la continuidad de sus condiciones miserables de existencia, agravadas por su creciente endeudamiento externo, potenciado por la política monetarista y financiera de los EE. UU. y por la actuación de las oligarquías nacionales.

En los países capitalistas desarrollados se está imponiendo un tipo de tecnología que, controlada en exclusiva por el modelo competitivo, liquida millones de puestos de trabajo sin crear otros nuevos, agudizando así las contradicciones entre avances científicos y tecnológicos y el derecho elemental al trabajo, entre la necesidad de satisfacer las necesidades materiales y la conservación de la Naturaleza y el medio ambiente, entre la creación de bienes socialmente útiles y el desenfreno consumista de franjas privilegiadas de la sociedad.

El Gobierno español subordina su política económica, tecnológica e internacional a las grandes líneas de actuación del imperialismo norteamericano, renunciando al margen de autonomía que nos permitiría nuestro relativo atraso, con márgenes superiores para otra política más

anclada en nuestras posibilidades.

Este marco político y económico mundial y sus repercusiones en España pesan, obviamente, sobre nuestra situación concreta. Es un punto de referencia para abordar desde la izquierda alternativas para España e ir apoyando, en la medida de nuestras posibilidades, la articulación de una alternativa europea de progreso.

En este marco mundial y de España debemos avanzar en nuestros análisis, ya que corremos el riesgo de quedarnos en un discurso sesgado sobre las consecuencias que tiene la crisis económica sobre los trabajadores y el país, sin ser capaces de ver cómo las mismas consecuencias de la crisis van variando radicalmente el panorama que teníamos y sobre el cual hemos hecho nuestras conjeturas y proyectos, muchas veces alejados de la realidad circundante.

¿Y cuál es esta situación en sus efectos concretos?

1. Empobrecimiento relativo y en muchos casos absoluto de los trabajadores y capas populares. Más paro y más trabajo precario.

2. Cambios en la estructura de la clase obrera y trabajadora, perfilándose un sector, cada vez más reducido, que trabaja establemente en empresas punta, de alta tecnología y alto valor añadido, que dependen de las grandes transnacionales o grupos económicos internacionales. Otro sector amplísimo forma el mercado negro o precario. Y otro lo forman los parados, sector que se solapa constantemente con el segundo.

Los tres sectores están al páiro de las decisiones que tomen los grandes grupos transnacionales que van decidiendo en cada momento qué es lo que corresponde producir al centro económico y qué a la periferia, cambiando las orientaciones en función de sus intereses. Algunos han calificado este estado de cosas como economía de barbecho.

3. Desarrollo de los fenómenos de corporativismo y de división entre los trabajadores activos y potenciales. Por ejemplo: ante el trabajo inestable hay una actitud diferente en los trabajadores con empleo estable y los jóvenes que todavía no han accedido a un puesto de trabajo. La razón está clara: se sitúa la disputa por el puesto de trabajo entre los propios traba-

jadores, agravándose así las contradicciones ya existentes históricamente en las condiciones en que se vende la fuerza de trabajo en una sociedad capitalista.

4. Más diferencias salariales entre los sectores punta y el resto de trabajadores activos y en paro. Este fenómeno, no nuevo, se está ampliando considerablemente en los últimos años.

5. Ampliación de las diferencias entre los pensionistas, en vez de la reducción del abanico a partir de la equiparación de las pensiones más bajas al SMIG. Estas diferencias crecerán, de desarrollarse los planes de reducción de las pensiones, tal como ha planteado el Gobierno en la mesa del AES, aunque, ante la impopularidad de una reforma por ley de la Seguridad Social y las pensiones, parece que se optará por reformas parciales que tengan el mismo objetivo final.

En suma, la estructura de la clase trabajadora está variando sustancialmente. El impacto político que el paro tiene en cifras absolutas esconde una realidad tanto o más sangrante: se está revulsionando el mercado de trabajo gradualmente. La situación de las clases sociales se retrotrae a situaciones anteriores al desarrollo de los derechos sociales que se consiguieron en la lucha histórica del movimiento obrero en momentos en que esos derechos podían coincidir con las necesidades objetivas de un determinado tipo de capitalismo de los países más económicamente desarrollados. En España se resquebraja el proceso que se desarrolló a partir de los años sesenta al calor de la acumulación de capital. Hay sectores amplios de trabajadores que renuncian individual y sindicalmente a la defensa de derechos mínimos en condiciones de trabajo, salarios, seguridad e higiene.

Hemos expuesto causas genéricas y efectos concretos de una situación que está alcanzando niveles intolerables, que exigen una acción política, sindical y social decidida y sin concesiones al posibilismo, porque lo que se nos plantea a los comunistas, sindicalistas y trabajadores en general es: o aceptar esta situación con fatalismo, tal como se nos propone desde la derecha y desde el propio Gobierno socialista, creyendo que es

irreversible, y esperar soluciones externas que nunca llegarán, como creemos demuestran las grandes líneas de actuación del imperialismo. O bien emprender la larga marcha de la transformación de las estructuras económicas y sociales conscientes de que ello sólo será posible si descartamos tanto el posibilismo acrítico, que nos enfangaría cada vez más, como las recetas revolucionarias de almanaque.

Sí somos conscientes de que sólo la acción política y social de masas y el desarrollo social de alternativas radicales a la actual política pueden hacer variar el signo adverso de las cosas y crear las bases para una política de verdaderas transformaciones, asentada en la igualdad y la solidaridad.

Esta política exige sustituir el maniqueísmo en la elaboración de las líneas de acción y el voluntarismo sin objetivos por el análisis riguroso y una práctica consecuente con él. Formarnos la idea y la teoría y plantear las alternativas y la acción a través del conocimiento de los hechos materiales y no al revés, como hemos hecho muchas veces.

Para hacer esta política intentemos situar algunos elementos de nuestra realidad actual.

La política del Gobierno

La política económica del Gobierno no se deriva del desarrollo de una planificación y programación a medio y largo plazo que abra perspectivas en los sectores que podamos considerar desde nuestra realidad, con posibilidades de futuro. Subordina las grandes líneas estratégicas a las economías capitalistas, concierta con los poderes económicos nacionales lo fundamental de esta política y luego negocia con los sindicatos los flecos y soluciones-parche a los problemas más acuciantes. Esto se ha visto claramente en las propuestas hechas en la mesa del AES.

Esta política se sustenta, como es sabido y por ello no nos extendemos, en la lucha contra la inflación, en la reducción del déficit público, en la generación de beneficios para la empresa privada, en la reducción de

plantillas en la empresa pública como principal medida para su saneamiento, en la reducción de salarios y pensiones, en la reducción de la inversión en el sector público. Al mismo tiempo, en las leyes laborales y en el AES se plantea más "flexibilidad" en el mercado de trabajo, que hablando en plata significa despido libre barato, como ha dejado muy claro la CEOE en su oferta-chantaje en el AES.

Este conjunto de medidas, según el Gobierno, producirá un importante aumento de la formación bruta de capital que reactivará la economía y creará empleo. Los efectos concretos de esta política, después de dos años de gobierno, nos son conocidos; no nos extendemos.

El AES es una operación para continuar haciendo esta misma política.

Sí afirmamos que de esta política sólo puede salir más dependencia exterior, más empleo precario, más sustitución de trabajadores fijos por eventuales, más paro. Y no porque, como pudiera pensarse esquemáticamente, no sea necesaria la lucha contra la inflación, por la mejora de la productividad, la reducción del déficit público a través del saneamiento y gestión adecuados, etcétera, sino porque la filosofía que inspira el conjunto de medidas no va en la línea de atacar la base de los problemas, es la política de "que se mueva todo para que no cambie nada".

Las propuestas hechas por el Gobierno en la mesa del AES reflejan que los grandes temas se deciden en la vía del monetarismo y del neoliberalismo, con algunos tintes sociales; algunos se pactan con la Banca y el gran empresariado. En la práctica, se reduce la inversión pública, no hay fondo de solidaridad, que en rigor puede llamarse así, ninguna perspectiva en creación de empleo ni en cobertura de paro, amenaza para las pensiones, fracaso del PER (Plan Empleo Rural)...

Las alternativas

En el terreno de las alternativas, es útil aclarar que éstas no vendrán únicamente de la elaboración de buenos planes, que son necesarios, sino fundamentalmente de cómo las propuestas se funden con los problemas y necesidades de la gente y se con-

vierten en conciencia y movilización social de masas.

Para ello, el PCE ha lanzado alternativas que pudiéramos llamar programáticas, referentes a transformaciones de fondo en las estructuras económico-financieras, industriales, agrarias, administrativas-españolas. El PCE propone un debate sobre una alternativa de progreso que se articula en una serie de propuestas. Propone una convergencia político-social sobre estos temas y otros, como la paz y el desarme, relacionados directamente con la economía.

El PCE está convencido de la necesidad de negociar y llegar a acuerdos. Pero no sobre la base de claudicar ante una política antisocial y antisindical, sino sobre la perspectiva de una política de progreso social que, aglutinando el gran potencial de cambio expresado en el 82, avance en la unidad de la izquierda y de las fuerzas progresistas, *sobre bases de programación y de organización social* y no sobre unidades abstractas y neutras de determinadas posiciones pretendidamente marxistas.

Para que ello sea posible es imprescindible el protagonismo social. El reforzamiento del PCE como instrumento político y el reforzamiento de los sindicatos como instrumentos de elaboración y acción colectiva, de organización social.

Es preciso establecer líneas de defensa y alternativas concretas sobre temas concretos.

Sobre las líneas de defensa: Hay quien caricaturiza desde la vieja y nueva derecha o desde la izquierda neoliberal las movilizaciones de los trabajadores italianos, franceses, británicos, alemanes, belgas, españoles, calificándolas de defensivas, sin alternativas. Esto es miopía política. Es sacrificar una posición concreta, parcial, del movimiento obrero a un todo hipotético, existente sólo en el silencio de los gabinetes de elaboración pedante y no en la dinámica cruda de la realidad social. La lucha por las treinta y cinco horas, contra un determinado tipo de reconversión, contra la reducción por decreto de la escala móvil, contra la liquidación de minas de carbón, son parte de una defensa contra la agresión a las conquistas sociales y sindicales históricas de la clase obrera. No se puede esperar a que florezca un todo ideal y mientras ir perdiendo las partes reales. Una alternativa global no saldrá

de la pasividad y del posibilismo frente a agresiones parciales, sino a partir de la defensa de unas posiciones conquistadas en un duro proceso histórico.

Sobre las líneas de alternativas: Aunque la izquierda social y política deba ir construyendo una alternativa global, debe organizar e impulsar movilizaciones sociales en torno a alternativas parciales, como la política de empleo y sus complejas manifestaciones, la inflación y cómo se compone su estructura, el déficit público ligado a la mala gestión y a la corrupción en muchos casos, la inversión pública y su aplicación a políticas puramente asistenciales como ahora, o bien a reestructuraciones económicas de futuro, etcétera, etcétera.

Es decir, articular aspectos concretos a una movilización social y a una alternativa global.

Para hacer posible esta movilización y alternativas es imprescindible el reforzamiento del PCE y de los sindicatos, y en concreto de CC. OO.

Sobre los sindicatos

Los sindicatos en España se encuentran en peor situación que los de los países de nuestro entorno europeo.

Es fácil de comprender, pues, los sindicatos europeos se organizan, amplían y potencian durante un largo período de auge económico después de la segunda guerra, lo cual les permite una consolidación social a través de la movilización y negociación reivindicativas, que alcanzan importantes victorias en el plano económico social. (Hacemos abstracción aquí del carácter diferente de los sindicatos, de su mayor o menor grado de "integración" al sistema, del enfrentamiento ideológico que produce la guerra fría, etcétera.) Interesa señalar que frente a esta realidad, en España la libertad sindical llega con treinta decisivos años de desventaja.

Este dato no sirve para justificar nada, en todo caso sí para entender los fenómenos de débil organización y afiliación, aunque la capacidad de movilización real sea muy importante.

El movimiento sindical español, tan potente antes de la guerra civil, se convirtió durante el franquismo en

pequeñas minorías aisladas, con la única excepción del movimiento de CC. OO.

Posteriormente, en la democracia, los sindicatos se estructuran en condiciones verdaderamente difíciles, sin recursos económicos y sin infraestructura material.

El primer momento afiliativo masivo es inmediatamente seguido de la desafiliación, por motivos diversos, lo cual sitúa al sindicalismo español, en conjunto, en las cotas más bajas de Europa. Los comunistas no fuimos realmente conscientes de este fenómeno ni de sus causas. Actuamos con una cierta prepotencia y triunfalismo. Sólo mucho más tarde nos dimos cuenta de estas debilidades, imposibles de superar a corto plazo, porque son fruto, además de los propios errores, de diversos condicionantes de tipo objetivo, derivados de la desarticulación organizativa que impuso la victoria franquista, de la disgregación consecuente de la conciencia de clase y del impacto inmediato que la crisis actual tiene sobre los trabajadores con sus repercusiones en el sindicalismo.

Junto a estos condicionamientos, la política sindical del Partido no contribuyó a superar las debilidades y dificultades, al aplicar una división mecánica entre sus tareas y las del sindicato: el partido hace política formalmente sobreestructural y el sindicato se encarga de lo socio-económico. En momentos puntuales, el partido suscribe o impulsa, por razones políticas y tácticas, acuerdos de carácter general, y el sindicato, con mayoría de militantes comunistas en sus órganos de dirección, los debe defender, sin un debate previo entre sus afiliados y en las estructuras organizativas.

Esta práctica desarma a los comunistas que trabajan en el sindicato, empobreciendo su capacidad teórica y sindical, al propio tiempo que deja al conjunto del Partido desarmado para su intervención específica en los problemas económicos y sociales.

Lentamente vamos cambiando en nuestros métodos. En la reunión del Comité Central del 11 y 12 de marzo de 1983 aprobamos un folleto, que significaba un paso hacia la superación de determinadas formas. El último período no ha estado exento de fricciones y enfrentamientos, muchos de ellos derivados de la propia situación del Partido. Ahora creo, francamente, que estamos en condiciones

objetivas e incluso subjetivas, mejores, para consolidar la independencia del sindicato y del Partido, al propio tiempo que unificar las ideas y posiciones de los comunistas en el Partido y en el sindicato.

Comisiones Obreras está creciendo en afiliación, en delegados sindicales, en incorporaciones cualitativas desde sectores tradicionalmente más moderados y/o más radicales del movimiento obrero. Esto es bueno y es la línea en la cual debemos perseverar. Pero es que CC. OO. está recuperando también terreno perdido en algo fundamental: la participación de los cuadros, afiliados y trabajadores en los debates.

Este proceso, que se inicia en torno al AI-83 con las asambleas de delegados, se ha continuado posteriormente, y ahora, en torno al AES, ha habido y hay una importante participación en el debate.

Esta es la vía de recuperar y afianzar el carácter democrático y de masas de CC. OO. Esta vía, siempre más compleja que las orientaciones o acuerdos de arriba hacia abajo, exclusivamente es la única que puede elevar a medio plazo la responsabilidad, capacidad y conciencia de clase de miles de afiliados y trabajadores.

El PCE y su política sindical

El PCE debe jugar un importante papel en este proceso.

En primer lugar es necesario constatar que nos vamos poniendo de acuerdo entre los militantes que actuamos en y hacia el movimiento obrero. Creo que hay bases suficientes para hacer desaparecer las principales contradicciones y fricciones del pasado inmediato. La práctica social, más tozuda que nuestra propia tozudez, va aclarando las cosas.

Deberíamos descartar los maniqueísmos que intentan justificar la razón absoluta de tal o cual posición en un momento dado. Constatar que en los nueve meses transcurridos desde el XI Congreso del PCE, paulatinamente se han ido sentando sólidas razones para el entendimiento en lo fundamental de la política del PCE y

en concreto en el terreno socio-económico. Debates y opiniones diversas ante uno u otro problema los hay y los habrá siempre, pues la realidad difícilmente se deja encasillar en recetas. Pero será debate, no confrontación. La confrontación será con las posiciones del adversario.

Por ello, desde el Partido estamos en buenas condiciones para canalizar hacia la sociedad nuestras propuestas. No perdamos en inútiles disquisiciones el amplio campo de trabajo que tenemos. No dejemos que las inercias del pasado nos arrebatan un territorio social que necesita nuestras alternativas y nuestra acción política.

Hay un avance de nuestras posiciones en la sociedad. Lento, pero gradual y claro.

Veamos qué política hacemos y cómo.

En primer lugar, recordar algunas cosas para no desenfocar nuestros objetivos.

Una de ellas es la necesaria perseverancia en ver que nuestra batalla política e ideológica contra la derecha y su demagogia continúa siendo fundamental y debe presidir todos nuestros análisis y acción política.

Sería un error situar, por omisión, al PSOE como el adversario de clase. Cuando acusamos al Gobierno de hacer la política de la derecha en una serie de aspectos importantes partimos de la base de que hay una derecha orgánica expectante, que en muchos casos recurre a la movilización contra las leyes que lesionan sus intereses.

Hay una derecha que está haciendo una política de demagogia social. Resulta que ahora es AP quien defiende con más fuerza una política contra el paro y la corrupción, por las autonomías, etcétera.

No es un sarcasmo, como pudiera parecer. Responde a la mejor tradición de la derecha. Por principios y por necesidad política, el desenmascaramiento de esta actitud demagógica es una tarea permanente del PCE, que debe diferenciarse de la crítica al Gobierno socialista, por elemental pedagogía marxista y para que nuestro mensaje llegue claro a la opinión pública sin posible instrumentalización.

En segundo lugar, el conjunto del PCE, al oponerse a la política económica del Gobierno, debe explicar, con todos los datos posibles, que la política del Gobierno no va objetiva-

mente en una línea de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente, sino que conduce a una degradación de estas condiciones. Al decir objetivamente es porque se entiende que el Gobierno del PSOE no pretende malévolamente esta degradación, sino porque no puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Porque si ha escogido, por contenidos propios y por claudicación ante la derecha, la vía de una política conservadora, no se puede esperar que los verdaderos beneficiarios de esta política renuncien a sus privilegios.

Ello ha quedado meridianamente expresado en el AES. Daba vergüenza contemplar los últimos cambalaches entre la CEOE, el Gobierno y la UGT como comparsa, sobre temas tan importantes como el despido libre y la Seguridad Social. Era una pérdida generalizada de papeles del Gobierno y de UGT, mientras la CEOE actuaba cada vez con más desparpajo e insolencia. Triste espectáculo que no se merecían tantos trabajadores que votaron cambio.

Ahora se trata de ver cómo se plantean las cosas. Sin precipitación, ordenadamente y con propuestas. Propuestas que no son nuevas, pero que deben reconducirse hacia la negociación colectiva y hacia las movilizaciones sociales próximas. Propuestas que deben articularse en torno a la elaboración de planes concretos de creación de empleo, a una mayor cobertura de los parados, a la reducción de la jornada laboral, al mantenimiento global del poder adquisitivo de los salarios y pensiones, a medidas crediticias y de ayuda tecnológica para las pequeñas y medianas empresas, al fortalecimiento de los sindicatos.

Todas estas medidas forman parte de una verdadera política de solidaridad, entendida no como el vergonzante reparto de la escasez entre los asalariados, sino como una política que vaya forjando y consolidando entre los trabajadores una cultura de masas solidaria.

Una concepción solidaria que tenga en cuenta a los sectores más organizados y combativos de los trabajadores y también a los más dispersos y desorganizados por el lugar que ocupan en el proceso productivo: a los parados, al amplio sector juvenil que todavía no ha tenido un puesto de trabajo. Una política que tienda, con la acción social y con las alternativas políticas y legislativas, a hacer

emerger el trabajo sumergido, a los centenares de miles de trabajadores que se han cobijado en él y que, sin ser parados, no son trabajadores de pleno derecho.

Una política que, enraizada en nuestra realidad social, se proyecte hacia las luchas europeas y hacia la unidad del movimiento obrero.



LA IZQUIERDA Y LOS COMUNISTAS HOY

Antonio Gutiérrez Díaz

Conferencia pronunciada
dentro de un ciclo
organizado por el Comité de
barcelona del PSUC



Al concluir esta serie de reflexiones abiertas sobre la izquierda creo que es bueno recordar que se inscriben en el marco de la convocatoria del VII Congreso del PSUC. Son, pues, unas reflexiones que en cierta medida pretenden estimular un debate que recoja ya, desde el principio, el espíritu que vertebra la convocatoria de este Congreso.

Un Congreso de un partido que, lejos de cualquier actitud defensiva, pretende acercarse a los problemas de la sociedad actual reconociendo sus propias dudas, e incluso en algunos casos su confusión.

Un partido que, consecuentemente, sin renunciar a su identidad orgánica, convierte en elemento político congresual la participación. Y que, sin renunciar a toda su historia, se dispone a reflexionar sobre su renovación y a llevarla a la práctica.

Estos elementos fundamentales —reflexión abierta para intentar definir la realidad social, participación como estímulo a la creatividad y renovación como vía de aportación de nuevas y fecundas potencialidades— obligan a plantear todas las cuestiones como una invitación al diálogo, como un estímulo provocador a la crítica y como una solicitud de sugerencias.

¿El espectro de la muerte de la izquierda?

Un espectro se cierne sobre Europa: es el espectro de la inquietud sobre el presente y el futuro de la izquierda.

Una inquietud en muchos casos bien intencionada; exponente, en otros, del cretinismo y la superficialidad, y que, en otros, da paso descaradamente a una ideología pesimista que intenta disimular la crisis real invocando la incapacidad y casi la muerte de la izquierda en Europa.

Ciertamente, las dificultades objetivas de la crisis de civilización afectan a todos los sectores sociales, a la clase trabajadora, a las fuerzas de izquierda. Nadie puede escapar, en cierta medida, a los efectos de la crisis, aunque se esté luchando por superarla. El edificio económico, social, cultural y político es totalizador, y, en un momento dado, se vive en este edificio incluso cuando se habita en la buhardilla.



Pero confundir el centro de gravedad de la crisis con sus consecuencias, aprovechar las dificultades objetivas para negar la viabilidad de una alternativa por parte de las fuerzas sociales de progreso y estimular las soluciones individuales e insolidarias para retardar la visión colectiva en favor de los valores de la transformación ante las inercias conservadoras, es un ejercicio ideológico de la reacción que encuentra a menudo insólitos colaboradores que estigmatizan a las fuerzas de izquierda de desarboladas, invitándonos a añadirnos a la sinfonía de las palabras que ya tiene orquestada la derecha.

Lo que está en crisis

A pesar de ser una evidencia incuestionable, no es una obviedad recordar hoy, para intentar situar algunos elementos que proyecten estímulos a la reflexión, que la crisis de civilización en que estamos angustiosamente inmersos es la crisis de una formación social llamada capitalismo.

Lo que hoy está en crisis, pues, es el modelo de acumulación capitalista y, a su alrededor, el modelo social, cultural y moral que ha desarrollado. Esto implica, también, las relaciones internacionales y, a través de ellas, los condicionamientos que la economía de mercado proyecta en todas las direcciones.

Y cuando hablamos de crisis del capitalismo estamos hablando también del agotamiento de todas las formas de administración de este tipo de sociedad.

Queremos decir explícitamente que nos estamos refiriendo al agotamiento de las posibilidades de la administración tradicional socialdemócrata de la *sociedad del bienestar*. Porque si es cierto, como sabemos, que son la fuerza mayoritaria del movimiento obrero de muchos países de Europa Occidental y que han realizado en el pasado, gracias a los márgenes consentidos por el funcionamiento de los mecanismos capitalistas, determinadas reformas sociales que han mejorado las condiciones de vida de los trabajadores, también es cierto que no han realizado la superación del capitalismo y que hoy se encuentran ante la quiebra de la *sociedad del bienestar*; que la crisis ataca las bases materiales sobre las que han triunfado las socialdemocracias como expresión de aquella capa de las masas trabajadoras que Lenin en su tiempo llamaba aristocracia obrera.

Apuntamos ya, por tanto, que el agotamiento de las propuestas de progreso tradicionales propias de la socialdemocracia es una constatación que, referida a la crisis del capitalismo, ya es objeto de estudio y de intentos más o menos avanzados para explorar y experimentar nuevas vías por parte de sus sectores más críticos.

Y es que nunca como hoy, ante el agotamiento del período del Estado del bienestar, se mostró tan válido el juicio de Marx sobre el carácter intrínsecamente anárquico y antihumano del sistema capitalista (1).

Por otra parte, es evidente —como ya afirmaron los comunistas italianos en su reflexión ante la crisis polaca— el agotamiento del empuje impulsor surgido de la Revolución de Octubre, revolución que originó la creación de Estados con formaciones sociales no capitalistas.

Está claro que nos referimos a los países del socialismo real, que no sólo han cambiado la correlación de fuerzas en el mundo, abrieron expectativas revolucio-

narias para la clase obrera ante la claudicación de los partidos socialistas europeos en la primera guerra mundial y dieron nacimiento a los partidos comunistas, sino que también han originado la formación de Estados burocratizados en los que, a pesar de los avances conseguidos, es identificable un freno en el proceso de construcción del socialismo y un intento de proyectar el propio modelo y de confundir los intereses de Estado con la lucha de clases, lo cual sitúa a estos países en una realidad alejada del proyecto de socialismo en libertad a que aspiramos.

También aquí un análisis más esmerado permite detectar intentos de abrir nuevas vías —algunas drásticamente cortadas, otras que avanzan con lentitud y prudencia bajo la mirada vigilante de la URSS— entre los países del Pacto de Varsovia.

En sus rasgos más generales, el marco global de la crisis se define, en el terreno económico, por el estancamiento-inflación, acompañado de un aumento continuado de los porcentajes de desocupación, una degradación de las condiciones de vida y del medio ambiente y una crisis fiscal del Estado.

Las tendencias individualistas, gremiales y corporativas ante la agresividad de la crisis se acompañan de reacciones colectivas, unas veces resistenciales y otras con contenidos socio-políticos.

Por su parte, el poder instituido, lejos de estimular la participación, no está ausente de tentaciones autoritarias, mientras que, a nivel internacional, la tensión entre los bloques impulsa la carrera armamentista, facilita el intervencionismo de las grandes potencias y dificulta el avance de los movimientos de liberación de los pueblos.

Contra el individualismo y el pesimismo

Es en este contexto en el que se plantea para las fuerzas políticas y sociales de izquierda en Europa impulsar una tercera fase en el desarrollo de la lucha de los trabajadores hacia el socialismo en libertad y democracia.

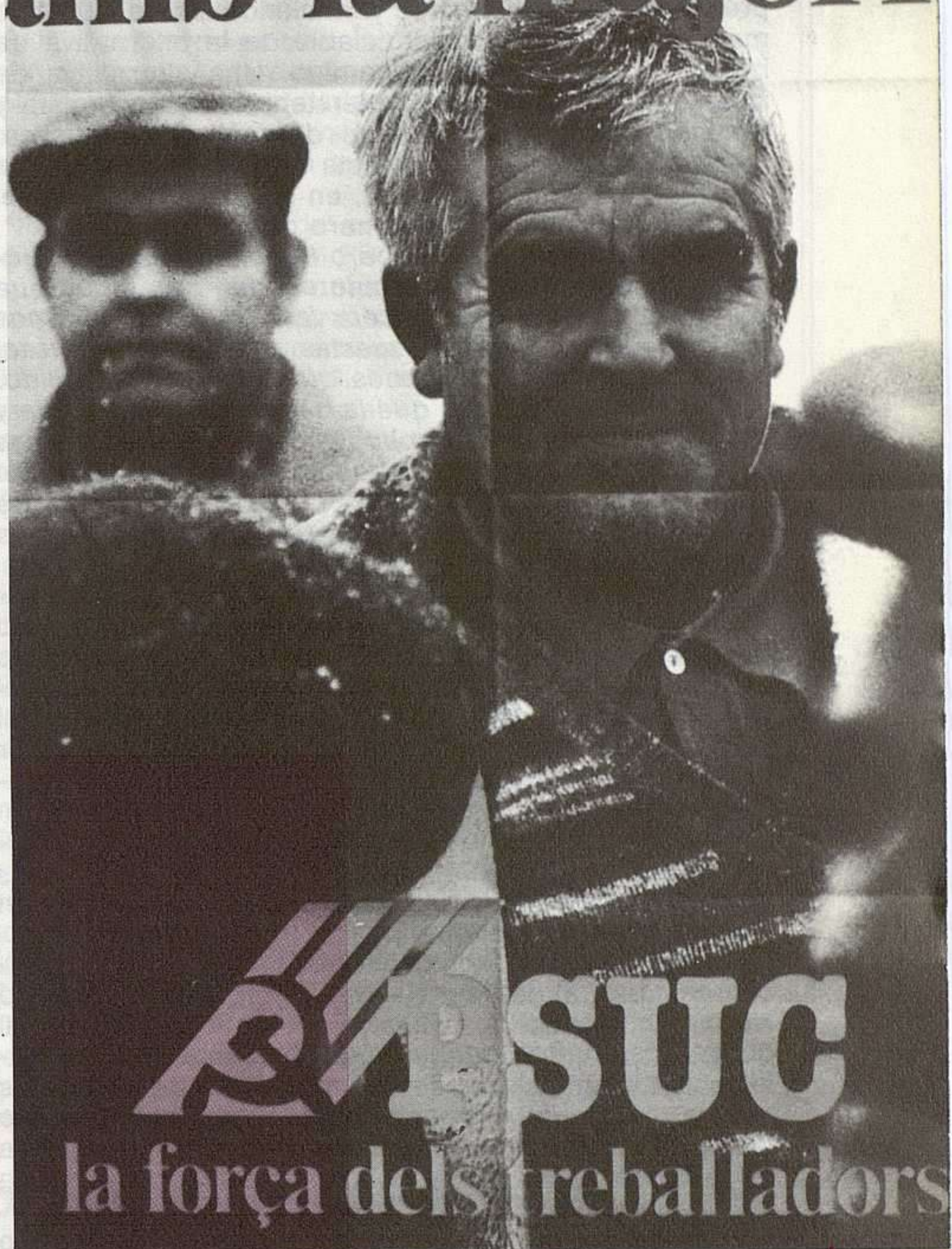
Pero se trata de ser conscientes de que este proceso comporta un largo período de transición que deberá afectar los equilibrios mundiales, el nivel de la tecnología y la organización y la división del trabajo, y que, si bien es cierto que conseguir la coincidencia, la síntesis de las diversas fuerzas del trabajo para hacer avanzar este objetivo no es fácil, no es menos cierto que las dificultades objetivas son a veces exasperadas por esquematismos y oposiciones de fracciones e incluso por actitudes conservadoras.

Ciertamente, debemos construir sobre los cimientos del pasado, pero la construcción ha de ser nueva, y la izquierda comprenderá, debe comprender, a lo largo de este proceso, que ha cambiado, que tiene que cambiar su estilo, su forma de existencia, sus estructuras.

Todo eso exige una capacidad autocrítica que permita diferenciar los errores de las derrotas; un conocimiento riguroso de la realidad social para identificar los principales problemas de la misma, y una capacidad para proponer soluciones desde el mismo seno del tejido social, ligando el valor de la acción diaria con la dimensión estratégica que supone conseguir una sociedad más justa.

Pero, para hablar con credibilidad de la consecución de esta sociedad más justa, hay que impregnar nuestra actividad individual y colectiva, de una forma conscien-

Amb el poble amb la majoria



ASUC
la força dels treballadors

temente voluntaria, de una conducta moral que haga referible nuestra actitud de hoy a nuestro proyecto de mañana.

Quiero decir con esto que hay que actuar de una forma individual y colectiva desde una ética política solidaria, no cediendo a los efectos disgregadores de la crisis, contra el individualismo, contra el pesimismo, desde una praxis ejemplificadora.

Tan sólo luchando contra los intentos de normalizar las formas más diversas de corrupción —a veces sorprendentemente sutiles— y haciendo de la cuestión moral un elemento irrenunciable de la alternativa de izquierda, ésta se abrirá camino. Una alternativa de izquierda alejada de cualquier tentación ideologista y también de cualquier actitud dogmática apriorística, que nos haga avanzar en esta *tercera fase*, sobre la cual Enrico Berlinguer decía, en su intervención en el Comité Central del PCI de enero del 82:

A nuestros adversarios, pero también a nuestros actuales y potenciales interlocutores, que nos piden que precisemos qué es la "tercera fase" y que aclaremos los contenidos y las propuestas que la caracterizan, nosotros no les contestamos que todo está definido. Sabemos, sin embargo, que la búsqueda está abierta y que, a pesar de que hay muchos contenidos y objetivos a precisar y profundizar mediante un desarrollo del pensamiento y, sobre todo, de la praxis —es decir, de la acción y de la lucha—, existen, también, los ejes fundamentales que pueden configurarla.

Una propuesta desde Europa, coherente con el carácter de la crisis de civilización a que hemos hecho referencia debe recuperar sin ambigüedades, como hilo conductor suyo, el valor *transformación*. Por gradual que sea el proceso, por prolongado que sea el horizonte, en cada fase es preciso reconocer el valor *transformación* como elemento identificable de la propuesta alternativa.

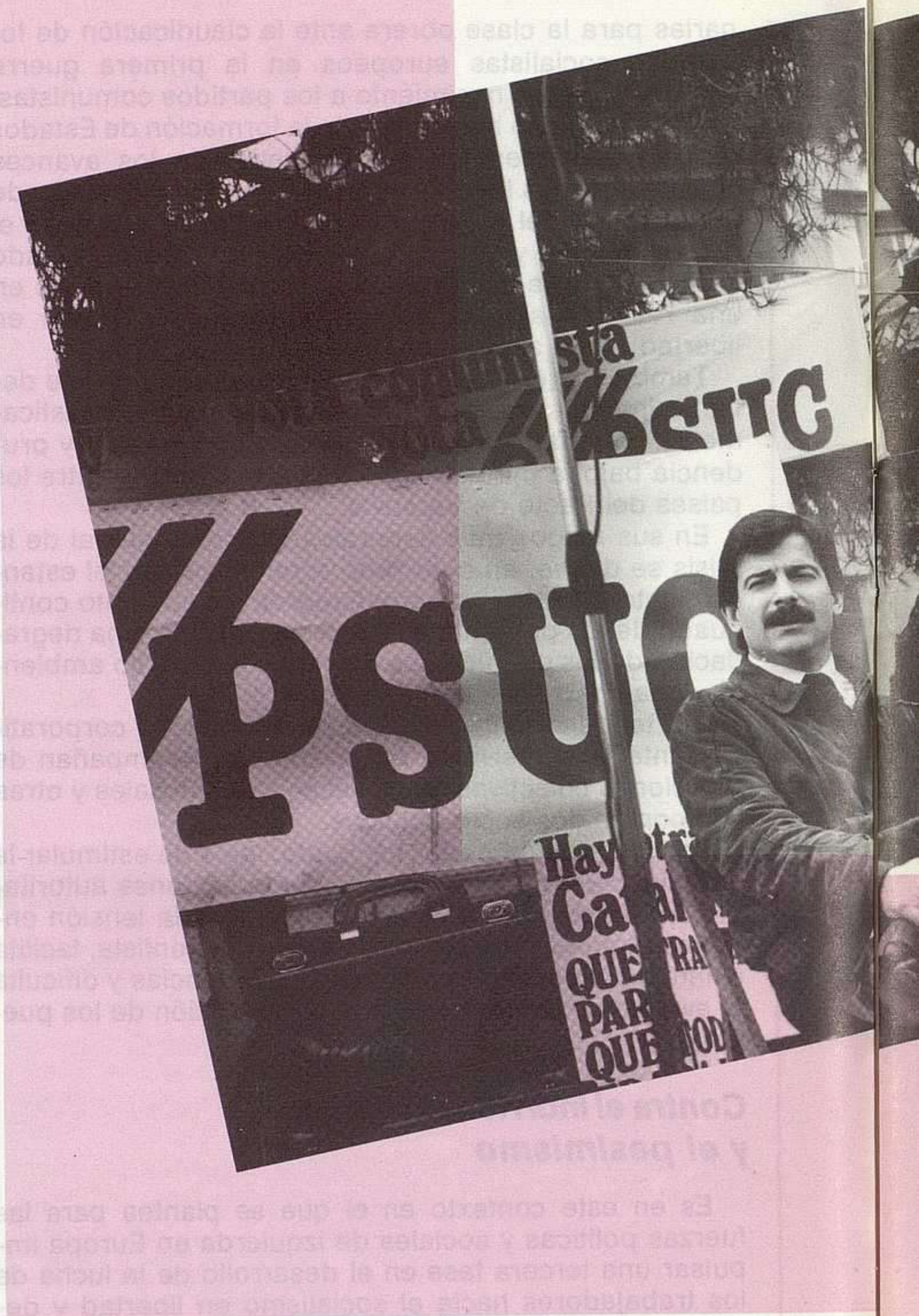
Y este valor, por lo tanto, deberá ir ligado a la *ampliación y consolidación de la Europa de los pueblos* frente a las corrientes proteccionistas presentes hoy en la Europa de los monopolios.

Esta Europa deberá construirse como una aportación a la paz, al desarme y a la distensión, al diálogo Norte-Sur, contra la política de bloques, a favor del *policentrismo*. Por tanto, uno de los elementos de identificación irrenunciable de una alternativa de izquierdas es una política de paz encaminada no al debilitamiento de un bloque ante el otro, no a la aceptación fatalista de las presiones atlantistas, sino a la superación de la política de bloques.

Pero una alternativa de izquierdas en Europa no podrá avanzar si, junto a una práctica democrática, participativa y solidaria de los trabajadores y una política de paz y desarme, no se abre paso una nueva política socio-económica que supere el agotamiento del modelo de acumulación capitalista y que reconozca que la política asistencial y redistributiva propia de la práctica socialdemócrata está agotada.

Esto significa, pues, levantar en Europa un nuevo modelo de crecimiento por la vía del consenso mayoritario de los trabajadores; unos trabajadores a los que hay que llegar desde el conocimiento de su realidad actual, alejada de la visión esquemática del obrero industrial característico del siglo pasado.

Esta nueva política económica y social no puede basarse únicamente, aunque es importante, en una *mayor justicia fiscal*, sino que debe contemplar la situación de una forma global y, desde criterios de austeridad y solidaridad, asentarse en una planificación democrática, combinar la inversión pública y la privada, analizar racionalmente las necesidades de reconversión y reestructuración, impulsar la reindustrializa-



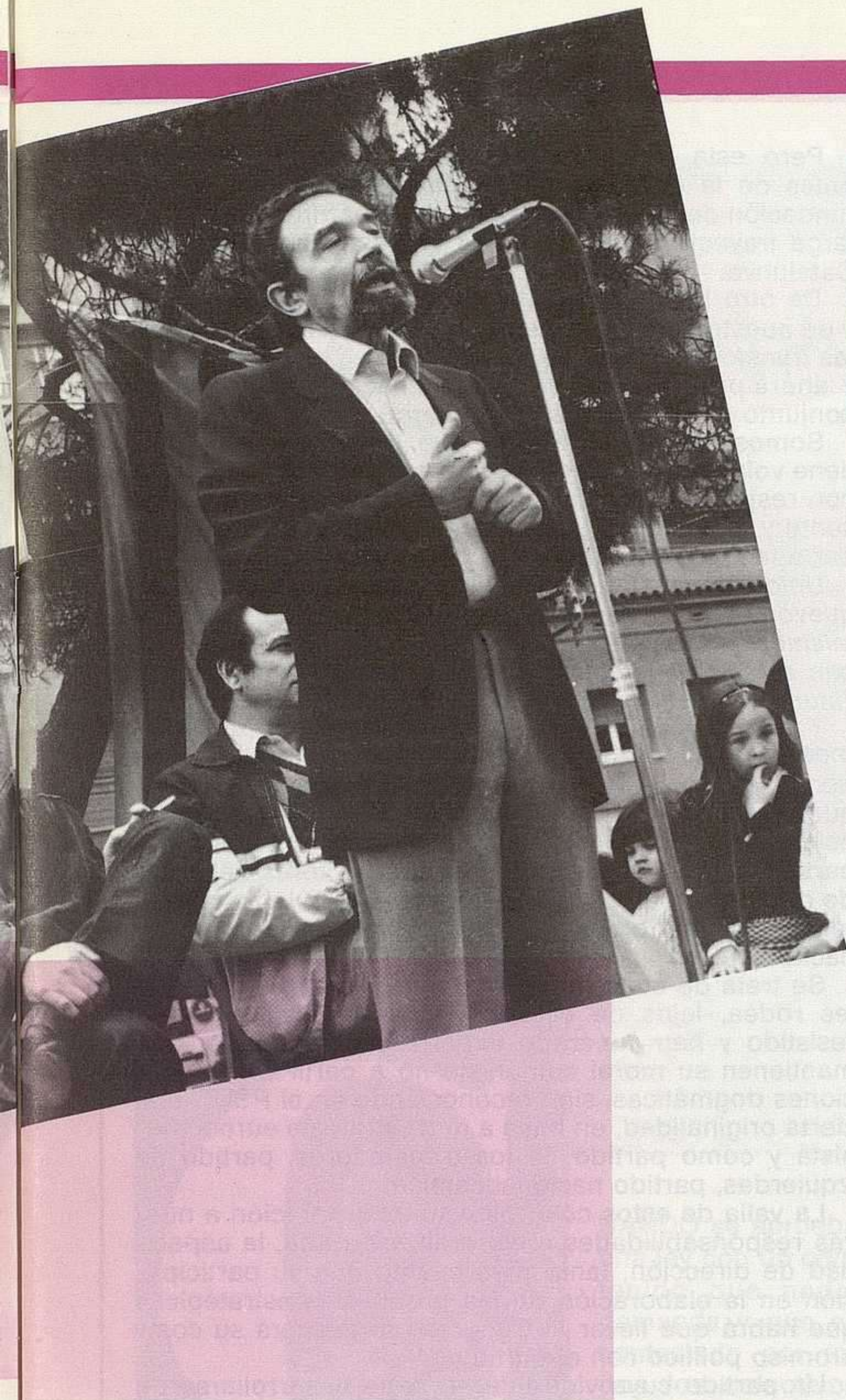
ción, equilibrar los diversos sectores de la producción, acabar con la especulación monetarista, estimular la inversión productiva y asegurar el mantenimiento de las mejoras conseguidas por los trabajadores.

Es necesario que los partidos de izquierda rehuyan convertirse en mediadores de la negociación salarial entre el Estado y los trabajadores, y que, aun aceptando la necesidad de resistir ante los intentos de las fuerzas conservadoras de hacer recaer los efectos de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y las capas medias, eviten situarse en una postura meramente defensiva y resistencial en detrimento de su papel como fuerza portadora de alternativas globales.

Una alternativa global que debe extender su combate al terreno cultural, entendiendo la cultura como una forma de convivencia arraigada en Europa, en una tradición creativa que ha impregnado sustancialmente a Europa de los valores de la libertad.

Alternativa de izquierda en España

Articular en España y desde España, con proyección europea, una alternativa de izquierda es una posibilidad que debe referirse, de una parte, a los resultados del 28 de octubre como expresión genérica de una voluntad de cambio y a la capacidad de lucha, funda-



mentalmente resistencial, de los trabajadores ante la reconversión, y, por otra parte, a la innegable desarticulación organizativa de nuestra sociedad, ligada a la debilidad de los partidos políticos y de las organizaciones sociales.

La política desarrollada por el Gobierno del PSOE durante su mandato añade, sin duda, un elemento de complejidad en el proceso de articulación de la izquierda en España y de elaboración de una alternativa con contenidos de transformación.

Un juicio riguroso sobre la política del Gobierno del PSOE deberá surgir, evidentemente, de los debates y las conclusiones de nuestro VII Congreso. HAY QUE SER, POR LO TANTO, PRUDENTES Y NO AVANZAR JUICIOS DEFINITIVOS. Pero, en el terreno de la reflexión abierta en que nos movemos hoy aquí, quisiera hacer algunos comentarios con voluntad, como mínimo, de incitar al diálogo.

En primer lugar es bueno aclarar que resulta falaz interpretar las críticas al Gobierno del PSOE como críticas al socialismo, porque el carácter general de la acción política del Gobierno del PSOE no es identificable con los ejes fundamentales que hemos reconocido como característicos de una política de izquierda en Europa.

En segundo lugar, el carácter fundamental de estos ejes no permite hablar con rigor de errores parciales del

Gobierno del PSOE o de servidumbres obligadas a presiones de las fuerzas conservadoras, sino de la asunción de una línea de gobierno que no incorpora en su proyecto las necesarias transformaciones para hacer avanzar una política de izquierdas.

En tercer lugar, consideramos que no se puede hablar de un socialismo asediado, de un lado, por una derecha que sigue planteando más exigencias día a día y, de otro, por unas fuerzas políticas y sociales que reclaman un cambio en la política del Gobierno del PSOE. Porque no se trata de debilitar el Gobierno, sino de fortalecerlo, acercando sus decisiones a los intereses de las clases trabajadoras y las capas populares y evitando, a la vez, que vaya prosperando la política de la derecha y que vayan aumentando sus posibilidades de alternancia.

Pero la necesidad de comprender y definir bien la política del Gobierno del PSOE, de plantear a la misma una crítica rigurosa y unas alternativas, de fortalecer las iniciativas de las fuerzas de izquierda y de cerrar el paso a la derecha exige hacer coincidir, en la elaboración y la acción conjuntas, a los amplios sectores sociales de la izquierda potencial en España. Es decir, conseguir una convergencia articulada de las fuerzas de izquierda que respete la identidad de cada una de ellas.

Este es un objetivo estratégico complejo y difícil, que habrá que construir con tenacidad, inteligencia y sensibilidad.

La tarea es más difícil aún dada la debilidad organizativa de la sociedad española a que nos hemos referido antes y, en ella, la situación difícil del PCE, en un proceso de recuperación a partir del XI Congreso no exento de dificultades.

A pesar de eso, los avances son evidentes en la movilización de masas en favor de la paz y la salida de España de la OTAN, y las perspectivas de continuidad y la posible organización de diversos niveles de coordinación de los sectores más activos de este movimiento son un hecho positivo y esperanzador al cual hay que añadir los resultados del III Congreso Confederal de CC. OO., los avances de esta organización en las elecciones sindicales —en especial en Seat, en Catalunya—, los incrementos de afiliación y la autoridad social que van adquiriendo sus propuestas de política de solidaridad.

Después de las elecciones catalanas

El triunfo de *Convergència i Unió*, claro exponente de la consecución de un predominio hegemónico por parte del *pujolismo* en Catalunya, ha sido no sólo una evidencia, sino una fuerte sacudida a la conciencia de las fuerzas de izquierda y una invitación a la reflexión autocrítica y al debate superador.

El sentimiento nacional como mediación interclasista, recogido hábilmente por *Convergència i Unió*, le ha permitido ampliar la base de influencia más allá de los planteamientos conservadores característicos de su núcleo dirigente.

A la vez, las fuerzas de izquierda han quedado confundidas y descolocadas. El PSC-PSOE, condicionado por la política del Gobierno central, sin capacidad para salir de la ambigüedad ante la reivindicación nacional y sin conseguir credibilidad ante las reivindicaciones sociales, ha perdido, hoy por hoy, la iniciativa en Catalunya. El PSUC, a pesar de sus posiciones nacionales y sus propuestas de gobierno, limitado por su debilidad, traumatizado aún por el recuerdo de sus recientes tensiones internas y sin haber recuperado la credibilidad social, ha quedado estancado. ERC ha desdibujado

cualquier contenido de progreso que pudiera haber en su política, y el resto de organizaciones que se reclaman de representar a la izquierda han quedado aún más minoritarias y, todas ellas, extraparlamentarias.

Queda ahora ante nosotros, en Catalunya, todo un trabajo de reflexión, recuperación y reestructuración de la izquierda política y social, que en cierta manera se ha iniciado ya, con las formas más diversas, y al que nuestro Congreso quiere ser una aportación.

Se trata, pues, de una tarea proyectada a medio plazo, que tenga como objetivo impulsar la organización de nuestra sociedad, no sólo en base a los partidos políticos y las centrales sindicales, sino también a través de las organizaciones de masas, a partir de su situación actual, con una especial atención en aprender a valorar los nuevos movimientos de masas, a trabajar en ellos respetando su independencia, pero conscientes, al mismo tiempo, de que nuestra condición de militantes nos hace transmisores de un mensaje político. Y, evidentemente, con una especial atención, también, a la juventud.

Este proyecto de recuperación y recomposición de la izquierda en Catalunya, que concebimos como la propuesta del catalanismo popular frente al catalanismo conservador, debe colocar en primer plano las reivindicaciones sociales como contenidos diferenciadores.

Queremos decir con esto que, a la vez que en Catalunya un proyecto de izquierda tiene que ser obviamente nacional, éste no sería realizable, estaría falto de signos de identidad de clase, si no respondiera a las reivindicaciones sociales de los trabajadores.

Creo que también conviene dejar bien claro que el PSUC debería entender este proyecto de una forma pluralista, no con una concepción de pluralismo institucional o de pluralismo de clase, sino de pluralismo político y social. Es decir, que la recomposición de la iniciativa de la izquierda pasa por el respeto a la identidad de las diversas fuerzas.

Quisiera ahora entrar sin ambigüedades a expresar una opinión sobre el carácter de la unidad con los socialistas.

Más allá de las diferencias que puedan existir entre el PSC-PSOE y el PSUC, un proyecto estratégico de la dimensión a que nos estamos refiriendo para Europa y España, trasladada a Catalunya, es inconcebible sin encontrar un espacio de coincidencia fundamental entre socialistas y comunistas.

Pero a nuestro entender, no se plantea hoy, como sucedió en 1936, un proyecto de fusión de los partidos de izquierda. Y no sólo porque hoy no existe una Internacional Comunista que lo aconseje, como sucedió en su VII Congreso, sino porque las expresiones políticas diferenciadas de esta izquierda pueden conseguir hoy, en el marco del pluralismo, extender su influencia organizada y encontrar vías de colaboración —no de supeditación—, no sólo para acuerdos puntuales sino con coincidencias de entidad política importante a medida que el PSC-PSOE vaya clarificando su compromiso con una política nacional de izquierdas, es decir, con una política de auténticas transformaciones.

Por último, unas palabras todavía sobre el PSUC, el partido de los comunistas catalanes.

Como decíamos antes, el nuestro es un partido que tiene vivo en su memoria reciente el recuerdo de las tensiones que llevaron a la escisión, las dificultades compartidas en la vida interna del PCE y nuestros fracasos electorales.

A eso hay que añadir la conciencia lúcida de todos los problemas objetivos que proyecta la crisis de civilización y la capacidad de la derecha catalana para recuperar influencia a partir de la instrumentalización del nacionalismo.

Pero esta reflexión se hace, también, pocos días antes de la conmemoración del 48 aniversario de la fundación del PSUC. Es decir, con el patrimonio de una larga trayectoria de servicio a la clase trabajadora de Catalunya.

De otro lado, por encima de cualquier contingencia y de nuestros errores, nuestra fidelidad a los valores de las transformaciones revolucionarias es incuestionable. Y ahora pretendemos proyectarla hacia el futuro con el conjunto de las fuerzas de izquierda.

Somos, pues, un partido que tiene pasado y que tiene voluntad de futuro. Por lo tanto, debemos aceptar con responsabilidad y firmeza las dificultades del presente y tomar las medidas necesarias para no defraudar a la clase trabajadora.

Únicamente si no fuésemos capaces de dar este nuevo paso sobre la vía de la renovación, que los mismos hechos —internacionales e internos— nos obligan a recorrer, deberíamos estar preocupados por el futuro de nuestro partido (2).

Y esta renovación es posible no sólo porque tenemos voluntad de hacerla, porque desde nuestra experiencia estamos abiertos a aprender, sino también porque, aun con nuestra debilidad organizativa, contamos hoy con decenas y decenas de cuadros medios en el partido, procedentes de los diversos sectores del mundo del trabajo, que son una riqueza incalculable para la renovación del presente, para asegurar la proyección hacia el futuro.

Se trata de cuadros ligados a la realidad social que les rodea, lejos de elitismos esterilizantes, que han resistido y han superado experiencias difíciles y que mantienen su moral comunista no a partir de invocaciones dogmáticas, sino reconociendo en el PSUC una cierta originalidad, en base a una estrategia eurocomunista y como partido de los trabajadores, partido de izquierdas, partido nacional catalán.

La valía de estos cuadros y su incorporación a nuevas responsabilidades mejorarán, sin duda, la capacidad de dirección, tanto más cuanto que su participación en la elaboración de las propuestas estratégicas que habrá que llevar al Congreso fortalecerá su compromiso político con el partido.

Un partido cuya vida interna debe desarrollarse de forma que posibilite un debate libre y abierto, conjuntamente con el esfuerzo incesante por salvaguardar y reforzar su unidad, bien inestimable que es preciso defender —y que se defenderá—, y por evitar también las posibles intervenciones externas en la vida del partido. Esto exige, por parte de todos, el respeto a las reglas de nuestros Estatutos y a nuestras costumbres. La experiencia demuestra que también las reglas formales tienen un valor esencial en la vida de los partidos.

Obviamente, será el Congreso quien dirá la última palabra. Pero el respeto a nuestras costumbres implica, también, el respeto a las opiniones minoritarias. Y respetarlas quiere decir, al mismo tiempo y a mi entender, facilitar su conocimiento, sin que esto entre en contradicción con la forma de elaborar las opiniones colectivas del partido a través de los Congresos y, entre Congreso y Congreso, en el Comité Central.

(1) Intervención de Enrico Berlinguer en el Comité Central del PCI de 12-1-82 ("Nous Horizons", número 79, página 54).

(2) Intervención de Enrico Berlinguer en el Comité Central del PCI de 12-1-82 ("Nous Horizons", número 79, página 60).



“UNA LEY PROVISIONAL PARA UN PROBLEMA CONSTANTE: LA FUNCION PUBLICA”

Enrique Veloso

C

UANDO se aprueba una ley con un contenido que nadie demanda y que es contestado por todos los colectivos directamente afectados cabe pensar que el partido político que goza de hegemonía parlamentaria ha utilizado el instrumental

de la democracia representativa para imponer su voluntad. Esta se habrá abierto paso siguiendo técnicas de “rodillo” o incluso de apisonadora, pero se manifestará “formalmente” como una ley y, como tal, habrá de ser respetada y cumplida. Evidentemente, se tratará de un triunfo hueco del partido mayoritario; de una victoria sostenida en el aire y propiciada por esa desacomodación entre las aspiraciones del electorado y los intereses partidistas de los elegidos que se origina en los períodos interelectorales. Para atajar este tipo de desviaciones no hay como las fórmulas de democracia directa o el recurso a lo que la doctrina alemana denomina la “función de reacoplamiento” (así, Eckehart Stein). Mas estos desajustes entre lo que los representados realmente quieren y lo que los representantes dicen querer sus clientes (frecuentes, al proscribirse el “mandato imperativo”), donde encuentran su merecido correctivo es, como a nadie se le oculta, en las próximas confron-

taciones ante las urnas. En puridad, y salvo rectificaciones en la línea gubernamental, no hay otro camino para obtener la derogación de la norma “impuesta”.

La anterior consideración viene a cuento del proceso seguido en la elaboración de la Ley de Medidas (urgentes) para la Reforma de la Función Pública. Constituye un ejemplo de una ley de irregular gestación. En su fase de anteproyecto se fraguó sin dar entrada a los colectivos de trabajadores afectados ni a las representaciones corporativas, asociativas o sindicales de los mismos, con olvido de lo previsto en la Ley de Procedimiento administrativo (art. 130). Y en la fase de discusión parlamentaria sólo fue debatida en parte y merced a un fallido intento de consenso con la oposición aliancista, en el que, en cualquier caso, se orillaron como interlocutores tanto a las representaciones de los cuerpos y escalas de los funcionarios modestos y más numerosos como a las de los sindicatos no vinculados con ninguno de los dos partidos empeñados en la maniobra consensual. Pero como el abortado acuerdo se pretendiera orquestar sobre un texto alternativo redactado por la derecha, más tarde desechado y reemplazado por el primitivo proyecto gubernamental, resulta que al quedar éste victorioso no recibió más aplausos que los que quisieran tributarles los parlamentarios del propio partido, titular del poder y mayoritario en las Cámaras.

Hoy, una vez aprobada y publicada la Ley (“BOE” 3 de agosto de 1984), habría de registrarse una nueva anomalía, producida en el último tramo del proceso de alumbramiento de la Ley en cuestión. El introducir,

como enmiendas del Senado, unas disposiciones adicionales que se pronuncian acerca de la refundición de la totalidad de cuerpos y escalas de funcionarios en las que se mencionan (se supone que exhaustivamente) a todos y cada uno de estos colectivos, implicó sustraer a la Cámara popular la discusión minuciosa de tan delicada materia, nudo gordiano del fracasado consenso entre los dos partidos mayoritarios. Actuando de esta forma se habrán salvado las apariencias. La refundición de cuerpos se habrá producido "ope legis", pero, en realidad, la adición senatorial se habrá confeccionado siguiendo inspiración extraoficial de cuño ministerial y transmitida por un cauce ajeno al del proyecto de Ley, único formal y solemnemente establecido para entenderse, en este orden de cosas, el Gobierno y las Cámaras.

Con independencia de las irregularidades que adornan su nacimiento y con olvido de la falta de acogida que, por ahora, viene mereciendo, debe, no obstante, valorarse la ley que se comenta, dada su indudable importancia. El apunte crítico que sigue va a ser esbozado desde una triple perspectiva: a) como medida legal (aspecto jurídico); b) como norma reguladora de la función pública española (aspecto sociológico, burocrático); c) como cauce de articulación de las relaciones Estado-sociedad civil (aspecto político).

UNA LEY-MEDIDA, EXTEMPORANEA Y GRATUITA

Las leyes medida constituyen una técnica legislativa que se justifica por razones de oportunidad. Son coyunturales. Tratan de cubrir un bache. Y suelen tener especial aplicación en el campo económico. Al menos, en tal sentido se utiliza, por lo general, este tipo de normas cuyo término acuñara Karl Schmitt. Por tanto, tratándose de materia no económica y no dirigiéndose a cubrir un bache ni a encauzar una adversidad pasajera, sino, muy por el contrario, a reestructurar un sistema tan complejo y estable como el que englobe el conjunto de trabajadores de las Administraciones públicas en que se organiza territorialmente el Estado español, no parece aconsejable el uso de aquella técnica.

La Constitución, por lo demás, no da pie a que tan importante cuestión se someta a opciones oportunistas de gobierno. Dispone claramente que la ley regule el Estatuto de los funcionarios públicos (art. 103,3) y que el Estado establezca las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las diversas Administraciones públicas (art. 149.1.18.^a). Luego la reserva legal relativa a la materia de función pública y la atribución estatal en exclusiva de los aspectos básicos de tal regulación constituyen puntos esenciales e irreductibles de la previsión constitucional. La garantía institucional (la "einrichtungsgarantie", de la doctrina germánica) cubrirá estos dos aspectos en los desarrollos que el legislador ordinario haga del mandato formulado en la "norma normarum". Y cierto que el texto constitucional no dice "cuándo" hayan de cumplirse los preceptos que pone a cargo del legislador ordinario (es obvio que a la mayor brevedad posible), sino que se limita a predeterminar el "cómo" (en este caso, mediante ley o mediante una legislación básica). Pero comoquiera que la ley-medida

es una norma que en cierto sentido degrada, por razón de su provisionalidad, el tenor ordinario de las leyes, cabe pensar que mediante una norma de dicha índole no se da cabal cumplimiento a los preceptos constitucionales o, al menos, que una ley-medida resulta, al efecto, extemporánea y gratuita, especialmente una vez que hubo de suprimirse de su enunciado la referencia a la "urgencia".

El breve preámbulo que antecede a la ley que se comenta afirma la provisionalidad de sus preceptos. Autopronostica su breve vigencia en contraste con la longevidad alcanzada por sus precedentes legislativos (las leyes de Bravo Murillo y de Maura, e incluso la de Carrero, ya que no se atreve a reemplazarla). Sin embargo, tanto el dato de venir la nueva ley precedida de más de siete años de estudios preparatorios, desarrollados por los sucesivos equipos del Ministerio de Presidencia del Gobierno, como la insoslayable circunstancia de tener que servir para la configuración de la función pública en el momento fundacional del Estado autonómico tendrían que haber contado como factores determinantes de una vocación legal de solidez y permanencia. No ha sido, empero, así y careciendo, por lo demás, la ley de ambición de generalidad, es lo cierto que se limita al tratamiento puntual de determinadas cuestiones relativas a la función pública, con lo que queda destinada a coexistir con la normativa anterior. Es decir, la ley socialista sobre la función pública se ve condenada, por no haber sabido librarse del sino de la provisionalidad, al modesto papel de revisora de la normativa propia y fundamental de la Administración franquista. La nueva ley se basa en el estatuto de Carrero, al que se superpone en parte y en parte complementa, como si tal cosa.

INDEFINICION DE MODELO BUROCRATICO

El rechazo con que el Congreso saludara al proyecto legal, la alegre aceptación del texto alternativo aliancista por parte de los propios diputados socialistas y la vuelta al primitivo borrador al romperse el consenso (no por divergencias ideológicas, sino por no coincidir en la lista de cuerpos a refundir) son hechos harto elocuentes acerca del valor intrínseco de la nueva ley. No la defendieron ni sus adeptos oficiales y es que, en realidad, aporta muy poco de nuevo y menos aún de bueno. No favorece la profesionalización ni la carrera administrativa al introducir factores de inseguridad e inestabilidad en el empleo. No crea vías para la democratización de la Administración pública, ya que, en el orden interno, no da entrada decidida a los sindicatos ni crea órganos paritarios de gestión y, en su proyección hacia la calle, no se plantea siquiera el problema del comportamiento del funcionariado en una "Administración participada". Y el modelo burocrático, en fin, que de la ley resulta acusa la indefinición derivada de aprovechar el preexistente sin más que incrustarle la pluralidad de Administraciones, propia del Estado autonómico (circunstanciación política) y que someterle, de antemano, a los vaivenes presupuestarios de la crisis (circunstanciación económica). Los elementos de inseguridad que van a degradar nuestra función pública derivan, por un lado, de sujetar la estabilidad de

plantillas y empleo a las disponibilidades anuales del erario público y, por otro lado, de condicionar los conceptos retributivos tanto al concreto programa y al concreto puesto de trabajo al que, dentro de aquél, se vea el funcionario adscrito, como a la evolución que merezca a juicio del correspondiente "responsable de programa". De esta suerte, no sólo se vuelve al antiguo culto de las clasificaciones de puestos (dejado por imposible en la propia etapa tecnocrática de la Administración franquista), sino que se socaba totalmente la profesionalidad al sujetar, aún más, al funcionario al estamento "politizado" ("responsables").

Dejar a la función pública hipotecada, de antemano, al éxito de las previsiones anuales del Ministerio de Hacienda (presupuestos, programas) no se traduce únicamente en un aumento de la indefinición del modelo burocrático, sino que puede tener grave incidencia en la configuración real (dotación) de la pluralidad de Administraciones en que ha de cumplirse el Estado autonómico. Ha de pensarse que, si bien tratándose de la Administración central y local la reducción de su función pública a las cuantificaciones presupuestarias no dejará de tener inevitables referencias concretas a estructuras preexistentes, en cambio, tratándose de la Administración autonómica, la falta de precedentes puede llevar a soluciones de gran diferencia, en función de las respectivas disponibilidades. Naturalmente, la común regulación del régimen funcional de las Administraciones conjurará estas posibilidades de desigualdad. Pero tal comunidad no se logra por medio del principio de movilidad (horizontal/vertical), sino definiendo un sistema de burocracia tan decidido en su afirmación democrática como en la homologación de las peculiaridades.

Se dibuja, pues, un equívoco modelo de burocratismo neocapitalista que, por una parte, fiel a la consigna liberal de dócil sumisión del funcionariado al estamento político, acentúa dicha subordinación y, por otra parte, vincula el tratamiento de la función pública a la programación económica para favorecer los designios de un cierto capitalismo de Estado. Y se diría que sólo un doble temor impide llevar las cosas a sus últimas consecuencias alcanzando la laboralización (con despido libre, claro) neta del sector, siendo tanto los sindicatos como los cuerpos de élite quienes inspiran aquel sentimiento.

Los sindicatos y los cuerpos funcionariales cabría decir que se mueven dentro de un sistema de fuerzas cuyos exponentes son la negociación de las condiciones de empleo y la estabilidad. Cuando en una organización dada la estabilidad está exenta de todo tipo de peligros, la sindicación pierde interés entre los miembros de los colectivos integrantes de aquélla; en cambio, si la estabilidad se ve amenazada y los cuerpos funcionariales no constituyen cobijo para sus componentes, los funcionarios recurren a la sindicación. Una función pública cuya estabilidad cede ante las cambiantes previsiones presupuestarias anuales constituye un colectivo que ve mermada su profesionalidad y que, si no desea ser presa del clientelismo político, intentará recobrar el equilibrio perdido a través de la acción sindical.

Por último no debe cerrarse la referencia al modelo burocrático sin aludir al problema de los cuerpos y su refundición. Constituye una coacción a la opinión progresista argumentar que no se debe estar en contra de una norma que desmonta la estructura corporativista de nuestra Administración. En primer lugar, porque no

se ha desarbolado la copiosa fronda, sino que la cosa se ha limitado a reagrupar las distintas ramas homólogas en troncos comunes, con arreglo a criterios racionales y denominaciones nuevas. Y en segundo lugar, porque el "quid" de la cuestión no estriba en despiezar cuerpos funcionariales, sino en desarticular y clausurar esas cimas del burocratismo, esos lugares de encuentro ("lobbies"), que son las fuentes reales del prebendalismo. Se trataría, pues, de descomponer las lonjas del favor y los mercados de la corrupción, donde se establecen las condiciones de la subordinación de la "instancia política" a la "instancia económica", como se diría utilizando expresiones de Nicos Poulantzas. Y nada de esto se aborda frontalmente en el texto comentado.

ALCANCE POLITICO LIMITADO

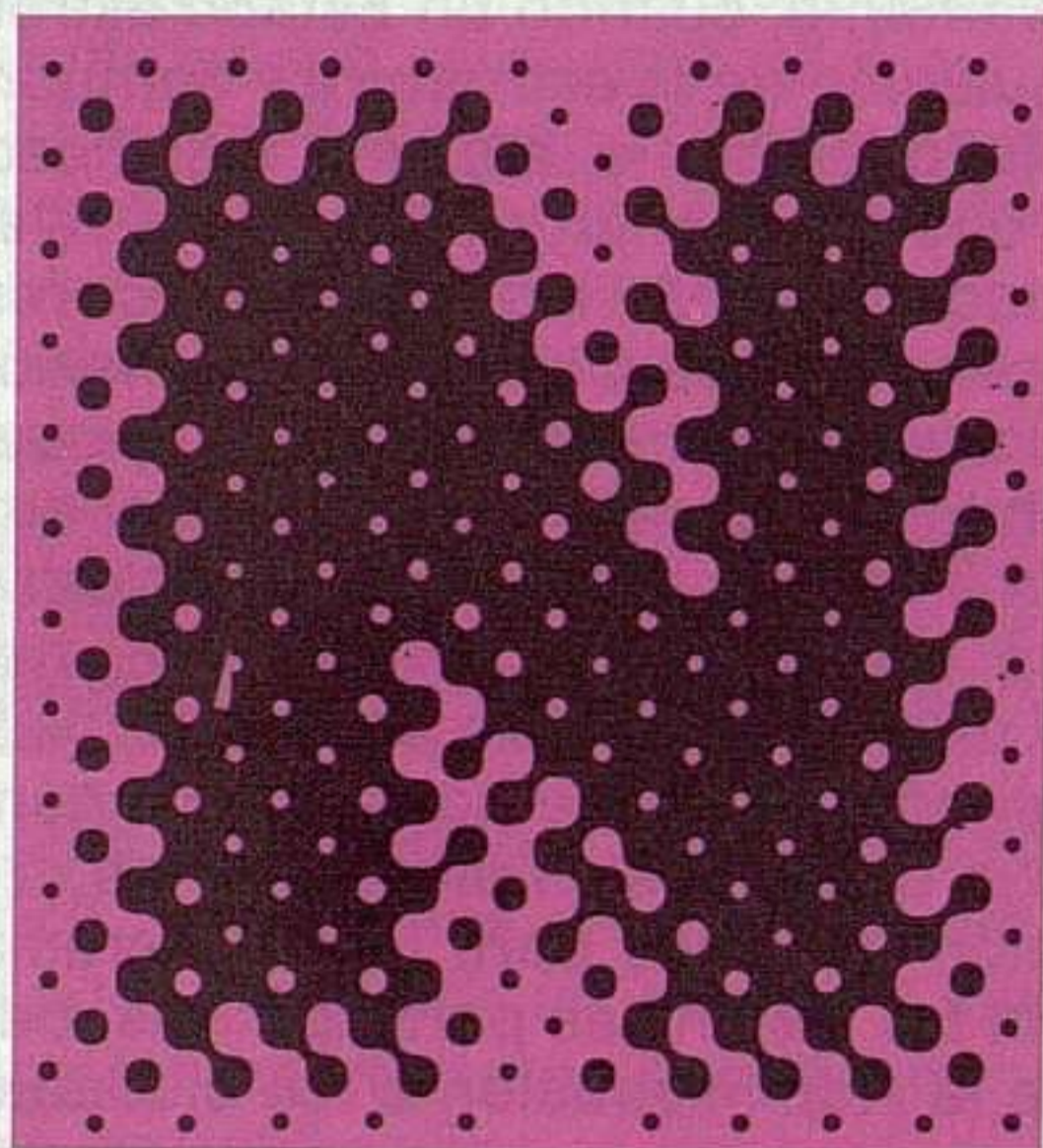
El preámbulo de la ley comentada afirma certeramente la importancia política de la reforma del funcionariado dentro del contexto de la reforma administrativa. Efectivamente, cuando un Estado estrena democracia, la regulación de la estructura y comportamiento del funcionariado es de la máxima significación política. Piénsese que en la encrucijada de las relaciones Estado-sociedad civil están los administradores hablando y actuando en nombre de aquél. Y reflexiónese acerca del desafío que para el funcionario representa el pasar de los hábitos burocráticos propios del autoritarismo a los modos y formas propios de la democracia.

Mas las acertadas consideraciones del preámbulo no tienen ulterior desarrollo en el articulado. La democratización administrativa no recibe ningún impulso. Ya se ha dicho que ni los sindicatos ni los organismos de composición paritaria, para la democracia de puertas adentro, ni las instancias participativas, para el acercamiento de la Administración a los ciudadanos, reciben adecuado tratamiento legislativo. El único aspecto de la regulación que evoca el cambio político operado en España es el relativo a la pluralidad de Administraciones públicas. Realmente, si no fuera por las referencias al Estado de las autonomías, faltaría todo elemento identificador del momento en que la ley ha de tener vigencia. Podría tratarse de una ley intemporal o incluso de una norma perteneciente al período político anterior.

La dimensión autonómica viene a conectar, efectivamente, la norma con la realidad socio-política actual sobre la que se proyecta. Pero aun en este punto se diría que el legislador no ha sabido apurar el alcance político que la consigna constitucional de la descentralización encierra. La peculiaridad de la función pública del Estado autonómico no puede reducirse a la enunciación del principio de la movilidad interadministrativa. Si el Estado se organiza territorialmente en diecisiete comunidades autónomas, cincuenta provincias y más de ocho mil municipios, no será sólo para que los funcionarios puedan pasar de unas a otras estructuras burocráticas sino, sobre todo, para que cada español tenga a su alcance y goce por igual de los servicios públicos y pueda hacer real su participación en la vida política, social, económica y cultural del país, como prescribe la Constitución (art. 9.2).

CENTROAMERICA

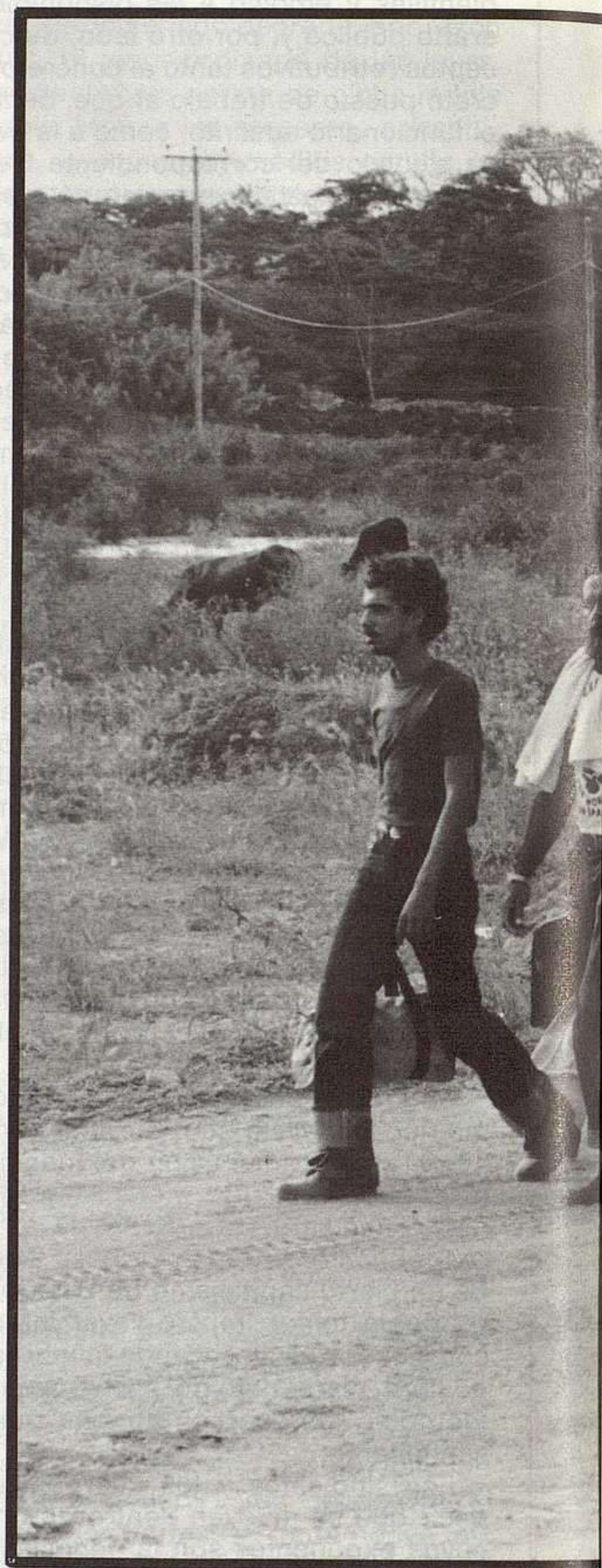
FILOSOFIA DE UN DESPOJO



Nelson Marra

O se puede entender la historia y el proceso de los países de Centroamérica, sino se tiene en cuenta que ese escenario ha sido un viejo territorio de esclavitud, en el cual el factor humano llegó a perder hasta su significación específica. La idea feudal se inculcó tanto en norteamericanos como en centroamericanos y, a lo largo del tiempo y de la injusticia como hábito, generó complejos que han devenido en

constante y natural incomunicación de base. La historia de los países conquistados y colonizados no puede entenderse, pues, con los mismos preceptos de los colonizadores, y la mentalidad de los analistas que interpretan los hechos desde el punto de vista de éstos supone siempre una fundación retardataria, más grave aún en cuanto afecta a la inteligencia, instrumento indispensable para cualquier liberación. El otro componente esencial para entender el proceso centroamericano —y su evolución económica— es la piratería y sus derivados en beneficios comerciales para el país colonizador que la sustenta y promueve. El filibustero ocupa los siglos XVI, XVII y XVIII; pero desde entonces lo que ha cambiado, y gradualmente, han sido los procedimientos y los argumentos. No las situaciones de hecho, ni las estructuras, ni las relaciones estructurales. Puesto que del patrimonio inglés que nacionalizan los Estados Unidos, en su totalidad y con una visión histórica de cara al fu-



turo, la piratería y sus tácticas son un lote.

El último de los piratas fue, precisamente, William Walker, equipado y patrocinado por el Gobierno norteamericano y el cual llegó a ser Presidente de Nicaragua. Fue médico, abogado, periodista, diputado, militar y corsario, y, ante todo, el verdadero símbolo de la historia expansionista de los Estados Unidos.

Como en otro ámbito fue símbolo de una ideología y metodología, en cuanto a las relaciones con América Latina, la doctrina del Presidente



Monroe en 1823 y su corolario Polk en 1848, en la cual se condiciona a la voluntad de los Estados Unidos el derecho a la libre determinación de todos los países americanos. En esta dirección merece la pena reproducir un breve fragmento de un artículo publicado en el diario *La Nación* de Argentina, titulado *El canal de Panamá y la doctrina Monroe* y que dice: *Si esta doctrina no sólo quiere decir que las naciones europeas no deben tener una intervención en los asuntos políticos de los americanos, sino que las grandes obras que hay que ejecutar en los países de más acá del Río*

Bravo no pueden hacerse sin el beneplácito, mejor dicho, no pueden hacerse sino por los americanos, no podemos asentir a ello. Los americanos del Norte nos tratan con este motivo como si en realidad no existiéramos, o como si se nos pudiera suprimir de un golpe. El artículo fue publicado hace ciento cuatro años.

El destino manifiesto

Por lo expuesto, la idea del *destino manifiesto* no es entonces una idea original surgida de los desvelos nocturnos del Presidente Reagan, ni una

bandera que abrazan los norteamericanos contemporáneos ante el *creciente avance del comunismo en Centroamérica*. Sino que es un concepto arraigado en una civilización de conquistadores que han logrado imponer en regiones ajenas un modelo político, un sistema económico y una forma de relación estructural acorde a los intereses del capitalismo expansionista. Es, también, un dogma que forma parte de la mentalidad básica del norteamericano medio que pasa del paternalismo a la represión según las coyunturas de mercados internos e internacionales. El aventurerismo ancestral yanqui debe estereotiparse

en un canon mental concordante y en una praxis política, una moral y un modelo de explotación que se cristalice en ese dogma. Apartarse del mismo supondría una herejía política y ninguno de los Presidentes norteamericanos ha merecido la reprobación de sus feligreses. El *destino manifiesto* que motivó y motiva la intervención yanqui en el área es lo que Fidel Castro definió en un discurso pronunciado en la sede de las Naciones Unidas como *la filosofía de un despojo*.

La cuarta frontera

Como el intervencionismo intenta forjar nuevos modelos de dominación también pretende elaborar una nueva nomenclatura que se ajuste al nuevo modelo. Del mismo modo que se esfuerza por borrar los pueblos de un mapa demasiado alucinante, intenta borrar una historia escrita con la misma sangre de esos pueblos. Porque la historia es —precisamente— un testigo demasiado duro para la actitud agresiva e intervencionista de los Estados Unidos en el área centroamericana.

Sergio Ramírez, miembro de la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, decía a propósito del tema, en una exposición leída en el Congreso sobre el Pensamiento Latinoamericano realizado en Venezuela durante los homenajes al libertador Simón Bolívar que *el presente Gobierno de los Estados Unidos adversa el proyecto revolucionario nicaragüense por ser un proyecto nacional, que contradice cualquier esquema de dominación externa y proclama la independencia, la soberanía y el no-alineamiento de una nación pequeña, enclavada en el traspasio imperial y en lo que ahora los ideólogos extremistas de la Casa Blanca llaman su cuarta frontera. Bajo esa concepción extrema de los adalides sureños, William Walker, el filibustero que invadió Nicaragua en 1855, inscribió en el estandarte de su compañía de rifleros la leyenda "Five or None", es decir "los cinco países de Centroamérica o ninguno". Esa arbitraria concepción, iluminada por los fuegos del extremismo ideológico, campea ahora en los salones de la Casa blanca y en las cavernas blindadas del Pentágono: todo Centroamérica o nada.*

Como destaca Sergio Ramírez, Reagan y sus ideólogos han puesto

al día la vieja tesis del *destino manifiesto* bajo el nuevo concepto de la *cuarta frontera*, la frontera imperial que empieza donde los intereses imperialistas se consideran amenazados. Una frontera defendida por mercenarios, por Edén Pastora, por ex miembros de la Guardia Nacional de Somoza, por la presencia criminal de la CIA. La historia de ayer —Walker, Monroe, Polk— y la de hoy —CIA, Pentágono— confluyen en una misma lógica despiadada y en semejantes formas brutales de dominación.

Democracia formal y guerrillas

El componente esencial del mapa político centroamericano actual radica en un conjunto de *democracias formales* diseñadas al estilo USA y fruto de elecciones tan fraudulentas como restringidas y un movimiento guerrillero que aglutina a los marginados partidos de izquierdas y a un amplio sector de la población más desposeída como, por ejemplo, el campesinado de la zona. La hegemonía del poder regional se concentra en tres poderes fácticos que llevan adelante una política de despojo del patrimonio nacional: el Gobierno de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas nacionales y un sector empresarial estrechamente ligado a los intereses del imperio. La conjunción de estas tres fuerzas se ha visto obligada, en los últimos tiempos, a orquestar *elecciones democráticas* —absolutamente digitadas— de las cuales han surgido gobernantes que defenderán, con rostro de legalidad, los intereses de la burguesía y del invasor yanqui. Napoleón Duarte, en El Salvador; Suazo Córdova, en Honduras, y quien surja de las próximas elecciones guatemaltecas, son los fieles exponentes de Gobiernos hechos a la medida de los Estados Unidos en elecciones promovidas y preparadas por los Estados Unidos. Pero si bien es cierto que los tres países simulan un mejoramiento de imagen de cara a la opinión internacional, y a una prensa extranjera, a veces cómplice en no disimular en lo interno ni su coste social ni el descontento creciente, ni la presencia de movimientos guerrilleros que ya tienen voz propia —y territorios liberados— en cada uno de esos países. En cuanto a Costa Rica —el cuarto país— puede

considerarse por sus viejos hábitos democráticos como una excepción a la regla del procedimiento antes mencionado. Aunque —debido a las presiones norteamericanas y a su deficitaria situación económica— cumple un triste papel como el resto: ser base de agresión al territorio de Nicaragua. La presencia de Edén Pastora y sus contrarrevolucionarios, quienes ostentan una cómoda y publicitada movilización en ese territorio, ilustra ampliamente nuestra afirmación.

Nicaragua agredida

En este marco queda para el final el país que se ha convertido en blanco de agresión constante y creciente por parte de los Estados Unidos: Nicaragua. Un Estado que luego de cuarenta y cinco años de dictadura fascista y de un modelo de economía típicamente dependiente se ha convertido —luego de Cuba— en ejemplo de liberación regional y continental.

El proceso nicaragüense ha ido adelante contra viento y marea, contra puertos minados por la CIA y contra mercenarios que ingresan en su territorio auspiciados por la complicidad de los países limítrofes. Ha ido adelante a pesar del aislamiento a que lo somete el imperio y a los cuestionamientos constantes de una comunidad europea que lo apoya formalmente pero que en los hechos sigue los patrones del imperialismo. De todas maneras el pueblo de Nicaragua, ant imperialista como su héroe César Augusto Sandino, consciente de la situación a que está sometido internacionalmente y sabedor de los progresos que, en casi todas las áreas, ha experimentado el país, es el mejor velador de esas conquistas irrenunciables. Y como la Historia tiene su lógica perfecta e ineludible, sabe que del mismo modo que antes se combatió contra el pirata Walker hoy debe combatir contra el Presidente Reagan. Ni el rostro norteamericano ni sus procedimientos han cambiado mucho. Pero, en cambio, las estrategias liberadoras pasan por temperaturas regionales diferentes. Los pueblos han madurado. Centroamérica, en fin, a partir de Nicaragua, tiene ya conciencia de que la etapa feudal está al borde de su final, definitiva decadencia.



CRISTIANISMO Y LIBERACION

Jordi López Camps

LA *Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación*, publicada recientemente por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, versión moderna del antiguo Santo Oficio, conjuntamente con la apertura del proceso inquisitorial, denominado eufemísticamente coloquio, contra el teólogo brasileño Leonardo Boff y el anuncio de otras actuaciones similares sugieren que el Vaticano ha decidido combatir frontalmente las experiencias cristianas surgidas al amparo de la Teología de la Liberación, tanto en lo que aquéllas representan de aportación particular al cristianismo como por la práctica política por ellas impulsada. Tras unos tímidos intentos de descalificación, emprendidos durante el pontificado de Pablo IV, que como mucho se limitaron a recomendar precaución y prevenir de los posibles errores contenidos en esta nueva reflexión teológica, con la llegada al papado de K. Wojtyła estos recelos se han cohesionado, formulado y complementado con un control, que en algunos casos reviste formas de verdadera persecución, de la labor de los teólogos que da la impresión de vivir en un verdadero estado de excepción ideológico en el seno de la Iglesia católica.

La teología no es neutral

Sin ser estas páginas el lugar idóneo para realizar una discusión teológica de esta *Instrucción*, sí que es necesario referirse, aunque breve y únicamente para sostener el análisis posterior, a algunos de los juicios que están en la base de las afirmaciones

contenidas en este documento de la Congregación romana. Una primera consideración nos remite a la posición teológica en la cual se sitúa el cardenal Ratzinger, al igual que aquellos cristianos que combaten ferozmente la Teología de la Liberación. Estos, frente al *aggiornamento* que sacudió a la Iglesia tras el Concilio Vaticano II y temerosos por los cambios que éste provocó, se han refugiado en el dogma y la tradición preconiliar para realizar su labor teológica y pastoral. Mientras tanto, en el Tercer Mundo surgió una nueva reflexión teológica que, por opción metodológica, tal como se dice en la Declaración de la IV Conferencia de la Asociación Euménica de los teólogos del Tercer Mundo: *Hacer teología tiene que nacer del empeño prioritario de defender a las víctimas de la opresión en la lucha por la liberación. Esta concepción metodológica deriva de la revelación a través de los profetas y de Jesús, documentada por los autores bíblicos, revelación de la presencia de Dios en las luchas históricas de los pobres y oprimidos hoy. No se puede objetar en modo alguno que las teologías de la liberación reducen la teología a ideología (...). Ninguna teología puede ser neutral (...). La teología es inseparable de la comunidad cristiana, de la cual emerge y ante la cual se acredita (...). De esta manera, el sujeto fundamental de la teología es la comunidad cristiana con su testimonio en la continua presencia de Dios en la historia y en la cultura de los oprimidos.* Impresionantes y lúcidas palabras que de algún modo son una respuesta a los interrogantes que, poco antes de su muerte, nos formulaba Alfonso Carlos Comín: *¿Dónde se vive la fe? ¿Cómo se vive la fe? ¿Por qué y para qué se vive la fe?*

La teología, ante estos retos, no puede ser concebida como un lujo

academista y distante del dolor del pobre y oprimido. El propio lenguaje del teólogo debe incorporar con nitidez la historia, la cultura y las necesidades de los pueblos que luchan por su liberación, sabiendo en todo momento expresar el carácter de estas luchas y recordar las esperanzas allí contenidas. Aquí radica el núcleo fundamental del conflicto de la Teología de la Liberación con los teólogos tradicionalistas y la propia jerarquía eclesial. Así lo reconoce claramente la propia *Instrucción*: *Esta (la Teología de la Liberación), en consecuencia, debe ser criticada, no en tal o cual de sus afirmaciones, sino a nivel del punto de vista de clase que adopta a priori y que funciona en ella como un principio hermenéutico determinante.* La confrontación aparece y se formula en sus justos términos cuando unas comunidades cristianas, mayormente localizadas en los países del Tercer Mundo y preferentemente en América Latina, descubren que el imperativo ético de liberar a los pobres y luchar por la justicia, forjados en una singular experiencia religiosa surgida en una Iglesia de pobres, es insuficiente para explicar las causas determinantes de la pobreza y discernir cuáles son los caminos más eficaces para superarla.

En el horizonte de estos cristianos surge el marxismo como un instrumento de análisis social sugerente, útil y fecundo para comprender los mecanismos de opresión y dominación existentes en el Tercer Mundo y para elaborar las estrategias políticas necesarias para vencer tales situaciones. Gracias a este encuentro del cristianismo con el marxismo, la propia Iglesia se convirtió en objeto de análisis y con él los propios cristianos reinterpretaron, en profundidad, cuál es el papel social de aquélla.

La lucha de clases no es un invento de la Teología de la Liberación, ésta se piensa desde una dramática experiencia de lucha de clases y por ello se interroga sobre sus mecanismos. Por estas razones, además del conflicto teológico soterrado, la Teología de la Liberación es anatematizada por sus relaciones con el marxismo. Así se refleja en las *Instrucciones* vaticanas, donde el interés funda-

mental es el atraer la atención (...) sobre las desviaciones y los riesgos de desviación, ruinosos para la fe y para la vida cristiana, que implican ciertas formas de Teología de la Liberación que recurren, de modo insuficientemente crítico, a conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista (porque) creyendo aceptar solamente lo que se presenta como un análisis, resulta obligado aceptar al mismo tiempo la ideología. Es tanta la preocupación que despierta esta cuestión en las instituciones eclesíásticas que el documento bien podría titularse, y con ello quizá se reflejase mejor el verdadero trasfondo, *El marxismo, azote de Dios*.

¿De qué marxismo nos hablan?

El marxismo, cuando las bases cristianas creían que era una cuestión superada por un fecundo debate dialogal y por la misma práctica política de los últimos años, vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones de la curia vaticana. El texto de la Sagrada Congregación contiene aseveraciones tan contundentes como: *El pensamiento de Marx constituye una concepción totalizante del mundo en la cual numerosos datos de observación y de análisis descriptivo son integrados en una estructura filosófica-ideológica (...). Los a priori ideológicos son presupuestos para la lectura de la realidad social. En otro fragmento se dice: Sería ilusorio y peligroso (...) aceptar los elementos del análisis marxista sin reconocer sus relaciones con la ideología, entrar en la práctica de la lucha de clases y de su interpretación marxista dejando de percibir el tipo de sociedad totalitaria a la cual conduce este proceso. El pánico al marxismo se fundamenta en que, tal como se deduce de la Instrucción, el ateísmo y la negación de la persona humana, de su libertad y de sus derechos, están en el centro de la concepción marxista. Esto y la lucha de clases, que conduce a la ilusión mortal en creer que las nuevas estructuras por sí mismas darán origen a un hombre nuevo (...) y a la inversión por la violencia de las estructuras generales de injusticia, conduce irremediablemente a regímenes totalitarios y ateos (que son) la vergüenza de nuestro tiempo.*

Ante estas afirmaciones es preciso destacar que en ellas hay una defor-

mada e interesada interpretación del lugar que ocupa el marxismo en la Teología de la Liberación. La editorial de un reciente número de la revista de los religiosos claretianos, *Misión Abierta*, afirma, con toda contundencia: *Es una falsedad y, por lo mismo, una calumnia afirmar que los teólogos de la liberación, al utilizar el análisis marxista como instrumento de mediación científica para mejor conocer la realidad social, hacen suya la filosofía marxista. En esta misma línea, los hermanos Boff, Leonardo y Clodovís, dicen: El marxismo siempre fue tomado como mediación para algo mayor que es la fe y sus exigencias históricas. El esclarece y enriquece algunas nociones principales de la teología: pueblo, pobres, historia, lo mismo que praxis y política. No es que se haya reducido el contenido teológico de estas nociones dentro de la forma marxista. Por el contrario, se clarificó el contenido teórico válido (o sea, verdadero) de las nociones marxistas dentro del horizonte teológico.*

Delante de tal sentir, fiel reflejo del estado de opinión de buena parte de los teólogos de la liberación, nos preguntamos: ¿a qué marxismo se refieren los redactores del documento vaticano?, ¿qué Teología de la Liberación puede identificarse en el marxismo dibujado en esta Instrucción? Para los celadores del dogma cristiano, dando muestras de una gran pobreza y superficialidad teórica y de un gran anacronismo en sus juicios, únicamente existe el marxismo que aprende al dictado de los manuales de la Academia de Ciencias Sociales de Moscú. Con una sorprendente falta de rigor crítico, impropio en una persona de la categoría intelectual de Ratzinger, las Instrucciones soslayan analizar el gran debate en que hoy está inmerso la teoría y práctica marxista. Con total frivolidad intelectual en estas Instrucciones ni se menciona que una de las respuestas dada en este debate es el denominado *marxismo cálido*, en el cual, situándose en las antípodas del *marxismo escolástico*, adquiere una especial significación la negación de todo dogmatismo y que se proyecta, como práctica política, en la construcción de un socialismo democrático, pluralista, tolerante y laico. No pocos cristianos que se proclaman marxistas, ni pocos marxistas provenientes de otras tradiciones culturales, se sien-

ten identificados con el modelo de marxismo propuesto en este libelo antimarxista del Vaticano.

¿Acaso la militancia comunista en nuestro Partido va asociada a la adscripción a una determinada filosofía y cosmovisión marxista violentando las íntimas creencias personales?, ¿tal vez el carácter marxista del Partido prefigura algo más que un instrumento científico del análisis de la realidad social? Si esto es una realidad en los países del *socialismo real*, no es menos cierto que la dinámica de los partidos que desarrollan una estrategia eurocomunista no se orienta en esta dirección. En los documentos políticos aprobados en el XI Congreso del PCE, cuando se habla sobre el carácter de la renovación, existe una descripción pedagógica a cerca de cuál es la identidad colectiva del Partido y cuál es el lugar del marxismo en ella. Se dice allí: *En la tradición de los partidos comunistas se comenzaba asociando el mantenimiento y garantía del carácter de clase, marxista revolucionario, del Partido a la asunción de este pensamiento como doctrina, como condición previa de todo militante para ingresar en el Partido. La laicidad del Partido implica que cualquier hombre o mujer pueden militar en sus filas, con los mismos derechos y deberes, "independientemente de su fe religiosa y de sus convicciones filosóficas" (...); no se renuncia ni pelagra por ello el carácter de clase, marxista revolucionario, del Partido, pues éste se garantiza por el análisis marxista a la hora de configurar las propuestas programáticas. Para los redactores del documento del Vaticano éstas nuevas realidades del marxismo, fruto de un profundo movimiento de renovación en el seno del movimiento comunista, son inexistentes. Para aquellos curiales el único marxismo existente y posible es aquel que nace y se hunde en la propia ideologización de la teoría de Marx.*

Documento inoportuno y beligerante

Estas instrucciones han causado perplejidad, por cuanto representan una clara involución en el modo como unas autoridades eclesíásticas abordan los problemas del marxismo. Cuán lejos está este texto de aquella carta que el padre Arrupe dirigió a los jesuitas en 1981. Por el to-

no de guerra fría de estas *Instrucciones*, que se complementa con el uso político que del mismo harán las fuerzas sociales y económicas que oprimen los países del Tercer Mundo, hace de estas *Instrucciones* un texto vergonzante. Con este documento, el Vaticano nuevamente vuelve a suministrar al sistema capitalista la posibilidad de utilizar el sentimiento religioso, ampliamente arraigado en la conciencia popular de muchos de los pueblos del Tercer Mundo, a fin de legitimar sus intereses. Cuanto más fuerte y combativo es el compromiso de buena parte de las Iglesias, tanto católicas como protestantes, en los países pobres a favor de la justicia y la paz, el Vaticano, pensando en clave centroeuropea y manteniendo un pulso particular con los países del Este por la cuestión polaca, vuelve a agitar el fantasma del marxismo.

La acusación de marxista o comunista que el texto vaticano hace a la Teología de la Liberación puede poner en serias dificultades a los cristianos comprometidos en las luchas populares de liberación. La resistente Nicaragua no deberá luchar únicamente contra los fusiles de la CIA: el Vaticano ha dado importantes argumentos ideológicos para aglutinar y armar de juicios a los intereses reaccionarios que combaten en la retaguardia. En otros países, donde la toma de conciencia de la injusticia y opresión a que están sometidos es, en gran medida, fruto de una paciente labor de concienciación catequética de las comunidades cristianas, la pretendida descalificación de la Teología de la Liberación por medio del *tabú marxista* puede confundir y dificultar el proceso de concienciación popular. Por todo ello, estas *Instrucciones* de ningún modo pueden valorarse como un documento políticamente neutral. Más allá de la última razón teológica o eclesial de los autores del texto y del propio Juan Pablo II, estas *Instrucciones* participan de pleno en la lógica que sustenta la división del mundo en bloques y que agudiza el dramático conflicto Norte-Sur, países ricos-países pobres.

Roma se enfrenta a la periferia cristiana

Diversos aspectos del documento evidencian algunas de las constantes preocupaciones del pontificado de K. Wojtyla. Aparte de las cuestiones anteriormente mencionadas, sobresalen de un modo especial el tema del ateísmo, la existencia de un con-

flicto permanente entre la Iglesia romana y las iglesias locales y la prefiguración, entroncando con el ideal de las antiguas épocas de cristiandad, de la Iglesia católica como sociedad perfecta. La ortodoxia romana no está dispuesta a tolerar la aparición y consolidación de experiencias particulares en las iglesias locales que puedan romper el buen desarrollo del proyecto restauracionista auspiciado desde el Vaticano. Para romper este pluralismo religioso, la Roma católica apela de nuevo a la unidad en torno a un único magisterio eclesial, elemento aglutinador de un proyecto de Iglesia que se dibuja, en la mente de Juan Pablo II, como única salvación de los problemas de la Humanidad y que atribuye a K. Wojtyla el papel de nuevo mesías redentor.

En el seno de la propia Iglesia, este documento no ha despertado demasiado entusiasmo, más bien ha sido calificado de inoportuno, ambiguo y desafortunado. No obstante, algunos sectores cristianos, que también se reclaman entroncados con la Teología de la Liberación, se esfuerzan en señalar como positivo el hecho que desde el Vaticano se valore que *la poderosa y casi irresistible aspiración de los pueblos a una liberación constituye uno de los principales signos de los tiempos*. Ensimismarse con estas palabras, u otras similares, es dilapidar la gran novedad de la Teología de la Liberación: el articular una práctica cristiana que, partiendo de criterios éticos y morales —los denominados imperativos evangélicos—, reclama una praxis política eficaz y coherente con el anuncio de liberación proclamado a los pobres y oprimidos. La ausencia de esta coherencia es una de las principales acusaciones que los teólogos de la liberación latinoamericanos dirigen contra la Iglesia romana. En unas poéticas palabras que el obispo P. Casaldáliga pone en boca de un imaginario Francisco de Asís se retoma esta acusación: *Si Francisco de Asís viviera hoy en América Latina (...) posiblemente iría a Roma, de grumete en un navío, para recordarle al Papa la intolerable atrocidad de las masacres de El Salvador y Guatemala, mucho más intolerables que los conflictos de Beagle o las Malvinas y mucho más que la dura situación de la Polonia papal. De paso intentaría convencer al Papa de que la revolución sandinista es mucho más cristiana que todos los Gobiernos democristianos o las católicas repúblicas del continente que no tienen ningún conflicto diplomático con la Santa Sede*.

Es posible que algunos teólogos europeos aprovechen estas *Instrucciones* para distanciarse prudentemente del análisis marxista, en el cual se sienten incómodos y no ven perspectivas, y reivindiquen como propio de la Teología de la Liberación únicamente la originalidad de los imperativos éticos latentes en la opción por los pobres. Sin embargo, afirmar que el oprimido y el pobre están en el centro de la experiencia cristiana no es únicamente una opción ética, es esto y mucho más. Si de la opción ética no se avanza, a través de la mediación política, hacia una práctica liberadora, se volverá a reproducir, aunque en un contexto diferente, el paternalismo y asistencialismo de la institución eclesial tantas veces criticado por estos mismos teólogos. La Teología de la Liberación no puede reconocerse como tal si ella no es capaz de proyectar a los cristianos a la lucha por una nueva sociedad edificada sobre unos principios éticos y unos valores sociales y políticos diferentes a los del capitalismo. En esta perspectiva, la opción por el socialismo no es vivida como una práctica ajena a la misma experiencia cristiana animada por la Teología de la Liberación. La gran novedad de la Teología de la Liberación es que nos alerta de la imposibilidad de mantener un dualismo entre fe y mundo, entre Dios y los pobres, y por ello no es coherente con esta teología instalarse en el empeño de que este quehacer teológico se desentienda, en cuanto a reflexión sobre una experiencia vital, de las vías emprendidas para vencer la opresión y miseria.

Más allá del envite conservador para frenar la gran novedad que representa la Teología de la Liberación en el seno de la Iglesia católica, surgen numerosas comunidades que no están dispuestas a renunciar a su compromiso con los pobres. Estas comunidades, que han conocido el martirio por asesinato o desaparición de sus miembros, siguen afirmando con su práctica que se mantienen fieles al lado de los oprimidos, que combaten por su causa, se solidarizan con sus esperanzas y están empeñadas en la conquista de una nueva sociedad más justa y fraterna.

C

OSA mostrada hasta la saciedad es que las clases poseedoras que han sido y son a lo largo de la Historia, tal la burguesía hoy en su fase imperialista, han necesitado siempre, junto al ejercicio de la violencia del Estado, violencia más o menos sofisticada, más o menos brutal, una cierta justificación ideológica, ya de orden filosófico, ya de orden religioso, que permita legitimar el orden establecido en sectores, los más amplios posibles, de las fuerzas populares.

Dos corrientes en la Iglesia

Cierto es que la religión, en este caso la católica romana, no se manifiesta exclusivamente a través de las tomas de posición concretas de las jerarquías eclesásticas de cada país, sínodos de obispos, concilios o declaraciones papales. Puede decirse que siempre, en el transcurrir del tiempo, dos corrientes se han manifestado en la Iglesia. La llamada constantina y la llamada profética.

La primera, absolutamente dominante, Iglesia de los ricos, instalada en el poder y, al tiempo, apoyatura ideológica del mismo. La segunda corriente, que al modo de río Guadiana aparece y desaparece según pintan los avatares temporales, orientada a obrar en el mundo en defensa de los valores humanos derivados del Evangelio y unida, en muchos casos, a movimientos populares. Iglesia marginada, perseguida a veces, continuadora, en cierto modo, de aquel cristianismo primitivo al que Engels calificara de movimiento de hombres oprimidos. Ciertamente aquel cristianismo en lo que tenía de protesta contra la dominación romana, contra el sistema de clases y castas, se alzaba contra la propiedad privada y el Estado.

El papado y demás instituciones eclesásticas, ciertos teólogos, metidos de lleno en el poder temporal a través de la alianza entre el trono y el altar, justificaron la esclavitud en la antigüedad, en la Edad Media la servidumbre de la gleba y aunque condenaron la revolución política que en su día supuso la Revolución francesa, pronto se acomodaron a la sociedad capitalista. Ello no es de extrañar dado el poderío económico que siempre tuvo la Iglesia. Hoy día, cosa sabida es, el Vaticano y las Iglesias nacionales que de él dependen disponen de bienes materiales cuantiosos, dinero de los creyentes y, en muchos casos, de los Estados por vía de sus presupuestos generales, tierras, empresas industriales y de servicios, medios de comunicación, Bancos y entidades financieras.

Así pues, hay toda una teología del dólar expresada hoy en la figura de monseñor Marcinkus y en las relaciones de la Banca vaticana con la logia masónica P-2 y la mafia siciliana. El miedo guarda la viña del Banco Ambrosiano.

Mitad monjes, mitad soldados

Siempre que la Iglesia jerárquica ha visto en entredicho su poder ideológico o temporal, o cuando ha sido requerida por el trono, es decir, por las clases dominantes, ha lanzado a la arena política a sus teólogos de combate, a sus teólogos mitad monjes, mitad soldados. En

TEOLOGOS

el concilio de Trento se trataba de salvaguardar, frente al protagonismo emergente, tanto los intereses religiosos y materiales de la Iglesia romana, como los intereses religiosos y materiales del imperio español. La hegemonía española en Europa estaba en peligro, dado que los protestantes cuestionaban, armas en la mano y el libre examen como método, el poder de Carlos I y de Felipe II. La teología de Trento, sus siete dogmas, servían al Papa en su lucha con Lutero y era, al tiempo, la que convenía a los feudales y aristócratas españoles. El Rey Felipe, pertrechado con la dogmática conciliar, podía, en nombre de Dios y de su Iglesia católica, apostólica y romana, enviar a sus tropas a reconquistar los países herejes al tiempo que combatía a los erasmistas españoles dando carta blanca a la Inquisición.

Hoy, claro está, se trata de otra cosa. No se trata de Trento, el libre examen y el protestantismo. No del imperio español, sino del norteamericano. No del sistema feudal, sino del capitalismo. La ideología a batir es la de la clase obrera, la del socialismo científico, el marxismo, el comunismo. Si en el siglo pasado Marx y Engels, en el *Manifiesto comunista*, hablaban del fantasma del comunismo que recorría Europa y de la Santa Alianza formada para combatirlo, en nuestros días cabe afirmar que la capacidad revolucionaria del comunismo está presente, de manera directa o indirecta, en cuantas transformaciones se han producido y se producen en el mundo. Existe un campo socialista, existen partidos comunistas en los países capitalistas y existen movimientos de liberación nacional que están influidos, en mayor o menor grado, por el pensamiento y la práctica marxista.

El comunismo, desde la Revolución de octubre de 1917, ha encarnado en la Historia. Y también hoy como ayer la Santa Alianza libra combate con él. Si entonces, en 1848, eran el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes, hoy cabría cambiar el nombre de Pío IX por el de Juan Pablo II, el del Zar por el de Reagan, y los de Metternich, Guizot y los radicales franceses por los de Pinochet, Stroesner y compañía, acompañados todos ellos por los dirigentes europeos de la OTAN. La Central Americana de Inteligencia sustituiría, con ventaja, a los polizontes alemanes.

La lucha de clases, los movimientos de liberación nacional, el marxismo como ideología y los países socialistas como realidad están en el punto de mira de la curia vaticana y del imperialismo americano. El Vaticano II ha sido un interregno en la guerra fría y Karol Wojtyla está presto a enterrarle. Se trata de hacer volver a la Iglesia por donde solía. De ahí la recaída en la tentación constantiniana, de ahí esos afanes restauracionistas, esa nostalgia de Trento que se conjuga muy bien con el anticomunismo teocrático, un tanto delirante, formulado por Reagan en la convención republicana de Dallas.

En dicha convención electoral el Presidente Reagan ha presentado a su partido como si fuera la milicia de Dios y a los Estados Unidos como el pueblo elegido, tal como lo fuera el antiguo Israel. La mezcla de economía capitalista, religión y política es, obviamente, una mezcla

DEL DOLAR

López Salinas

explosiva. Cultivando la defensa de los valores del llamado mundo libre, el de la sociedad dividida en clases, ligando este a un nacionalismo con ribetes fascistas, dando cobijo gubernamental al miedo al rojo que hay debajo de la cama de cada buen americano afiliado al Ku-Klux-Klan o a la The Moral Majority, manipulando los sentimientos religiosos del pueblo frente al Satanás socialista, se puede continuar la carrera de armamentos, aumentar los presupuestos de defensa, militarizar el espacio o enviar marines allá donde haga falta, Granada o a Nicaragua si es necesario.

Al tiempo, las actitudes de la curia romana y del Papa Wojtyla encajan bastante bien en los designios de la política norteamericana. Son un apoyo a ésta, a la campaña electoral de Reagan y al sistema capitalista en el momento de mayor agresividad imperialista. El documento publicado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, antiguo Santo Oficio, y titulado *Instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación*, tanto o más que condenar a esta teología trata de sentar en el banquillo de los acusados al marxismo y a los países socialistas.

Predicar o dar trigo

Todo está bien, se desprende del documento, cuando nada se hace, cuando todo queda en palabras, en gratificaciones morales acerca de la injusticia que anida en el corazón de los hombres. Pero cuando la palabra se une a los hechos a través de la lucha de clases y antiimperialista, cuando el marxismo aparece ante el pueblo trabajador, creyente o no creyente, como el método más lúcido para el análisis de la sociedad dividida en clases, para la elaboración concreta de plataformas políticas que conduzcan al cambio social, la Iglesia jerárquica vuelve a las andadas de su nefasta política social. Política que consiste, una cosa es predicar y otra dar trigo, en afirmar que las injusticias no tienen solución en la vida terrenal, sino en el cielo, con lo cual se perpetúan las infamias de este mundo.

Sin duda, el documento publicado con las firmas de Ratzinger y el Papa, los viajes y declaraciones de este último, son una bendición, un golpe de hisopo a la política imperialista de los EE. UU., a la que se concede el primado en la lucha anticomunista. La condena vaticana de la teología de la liberación, la incompatibilidad reafirmada entre cristianismo y marxismo, viene a sustentarse en las palabras que Rockefeller dirigiera a la Trilateral no hace demasiado tiempo, dicha concepción teológica ponía en peligro los intereses de la economía capitalista en América Latina.

Se quiere introducir en el seno del pueblo, a través de la manipulación de los sentimientos religiosos de una gran parte de la población, la división del mismo, su ruptura. Se quiere yugular, o al menos mediatizar, la colaboración, en la práctica, entre marxistas y cristianos, buscando una base de masas que pastoreada por la jerarquía caiga, por activa o por pasiva, en la aceptación resignada del orden social y político existente. La lucha

de clases se ha instalado también en el interior de la Iglesia, y eso es algo que el antiguo Santo Oficio no puede soportar.

La razón por la cual el Vaticano se enfrenta a los creyentes del Tercer Mundo, y no sólo a los creyentes, especialmente a los latinoamericanos, a los que practican la teoría teológica de la liberación, es el temor, el miedo al cambio social, a la instalación de regímenes socialistas. La cosa está clara. En Nicaragua —también se podrían poner otros ejemplos—, la revolución sandinista, a pesar del pluripartidismo realmente existente, a pesar de su economía mixta, no sólo tiene que combatir contra la agresión norteamericana apoyada por sus satélites en la zona, sino también contra una jerarquía eclesiástica que colabora, más o menos públicamente, con las bandas somocistas. Monseñor Ovando, cara a las elecciones del 4 de noviembre, apoya las posiciones políticas de la proamericana Coordinadora Ramiro Sacasa. Ovando viene a plantear algo parecido a lo que Tuñón de Lara recuerda en su libro *El hecho religioso en España* fuera dicho por el cardenal Pizzardo a un grupo de nacionalistas vascos. En las elecciones de febrero de 1936, buscando el apoyo a la CEDA, afirmaba que las elecciones se iban a librar *entre el Cristo y Lenin*.

El solio pontificio se ha convertido de nuevo en una tribuna política, en un mitin derechista en el que bajo la teoría de que el lobo marxista quiere devorar a la oveja católica, oveja descarriada por el materialismo histórico, se vierten argumentos políticos e ideológicos en defensa de intereses bastardos cuyo objetivo es perpetuar la pobreza en muchos países. Verdadera Iglesia del silencio es la vaticana, que ignora o parece ignorar el hambre y la sed de justicia de millones y millones de seres. Con la llamada imperativa a la vuelta al redil de los disidentes, la Iglesia se convierte en un sistema autoritario que atropella, vergonzosamente, la libertad de los pueblos para elegir su propio destino.

Entre teólogos de la derecha anda el juego, el barajar. Bien haría, pienso yo, la grey católica en guardarse de Roma y de Washington, de la policía ideológica de la Congregación de la Fe y de la Central de Inteligencia americana. El marxismo, el comunismo, no plantean en el centro del debate histórico el tema de la religión, sino el de la necesidad de acabar con la explotación del hombre por el hombre.

El documento de la Congregación tiene, sin duda, ya lo he dicho, los ojos puestos en el Tercer Mundo, sobre todo en América Latina. Pero también cabe leerlo, y es recomendable, en clave europea. La colaboración entre cristianos y marxistas es cosa relativamente común en Europa frente a la crisis y el paro, frente a un rearme enloquecido que pone en peligro la paz y la seguridad mundiales. Dicha colaboración se va a ver coartada por una política vaticana que toma posición en favor de los intereses capitalistas y en contra del socialismo. Un documento que, por ejemplo, podría servir para atizar los rescoldos de la crisis polaca, un documento que, tras la victoria electoral del PCI podría significar que el Papa Wojtyla y la curia romana harán lo imposible para que los comunistas italianos no lleguen al Gobierno. Lo mismo que quieren los EE. UU.

En España, en el Parlamento, Fraga ha hablado de materialismo y espiritualismo. Lo que quizá quería decir es que nos está preparando una manifestación empresarial contra la Ley de Enseñanza.

ADOLFO PIÑEDO Y JUAN MORENO

Adolfo Piñedo, secretario general de la organización de Madrid del PCE, y **Juan Moreno**, secretario general de la unión de Madrid de CC. OO., son los interlocutores de los **Diálogos Comunistas** de este número de NUESTRA BANDERA. Ambos forman parte del Comité Central del Partido Comunista; en él suelen disentir cuando allí se deciden opciones que no hacen la unanimidad.

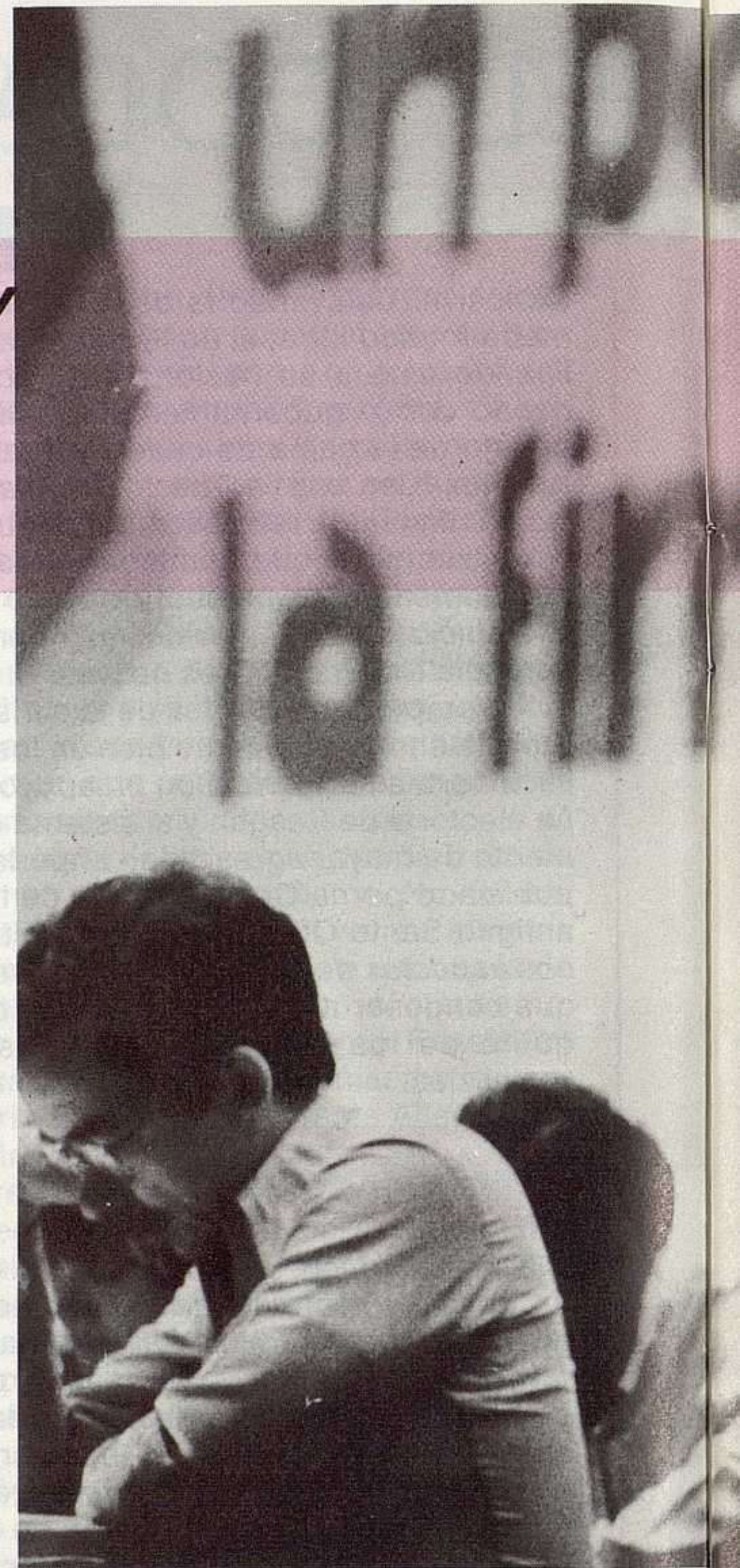
Piñedo: Mientras este Partido no tenga una línea política y mientras no consolide, a partir de esa línea política, la unidad interna, no existirá recuperación. Tenemos que plantearnos una política que nos distancie claramente del PSOE, tenemos que plantearnos un giro a la izquierda.

Moreno: Cuando los socialistas ganaron las elecciones, sabíamos que no iban a solucionar los problemas de los trabajadores y se dijo pese a ello que, dado el respaldo popular con el que eran elegidos, teníamos que adoptar una posición reservada; en la dirección, entonces, hubo unanimidad en votar a favor de la investidura de Felipe González. Eso ocurría antes de la Conferencia Nacional, antes incluso del momento en que se elige a Gerardo Iglesias como secretario general.

Piñedo: Es que el problema no es de ahora. Hemos tenido una línea equivocada tres años antes de la elección de Gerardo Iglesias. Yo he dicho en el XI Congreso que hay un error político en la orientación del Partido en el setenta y nueve, error que consistió en que concebimos la unidad de socialistas y comunistas como un paso previo a la política de concertación nacional. Eso nos condujo a una desviación pro-PSOE. Hoy

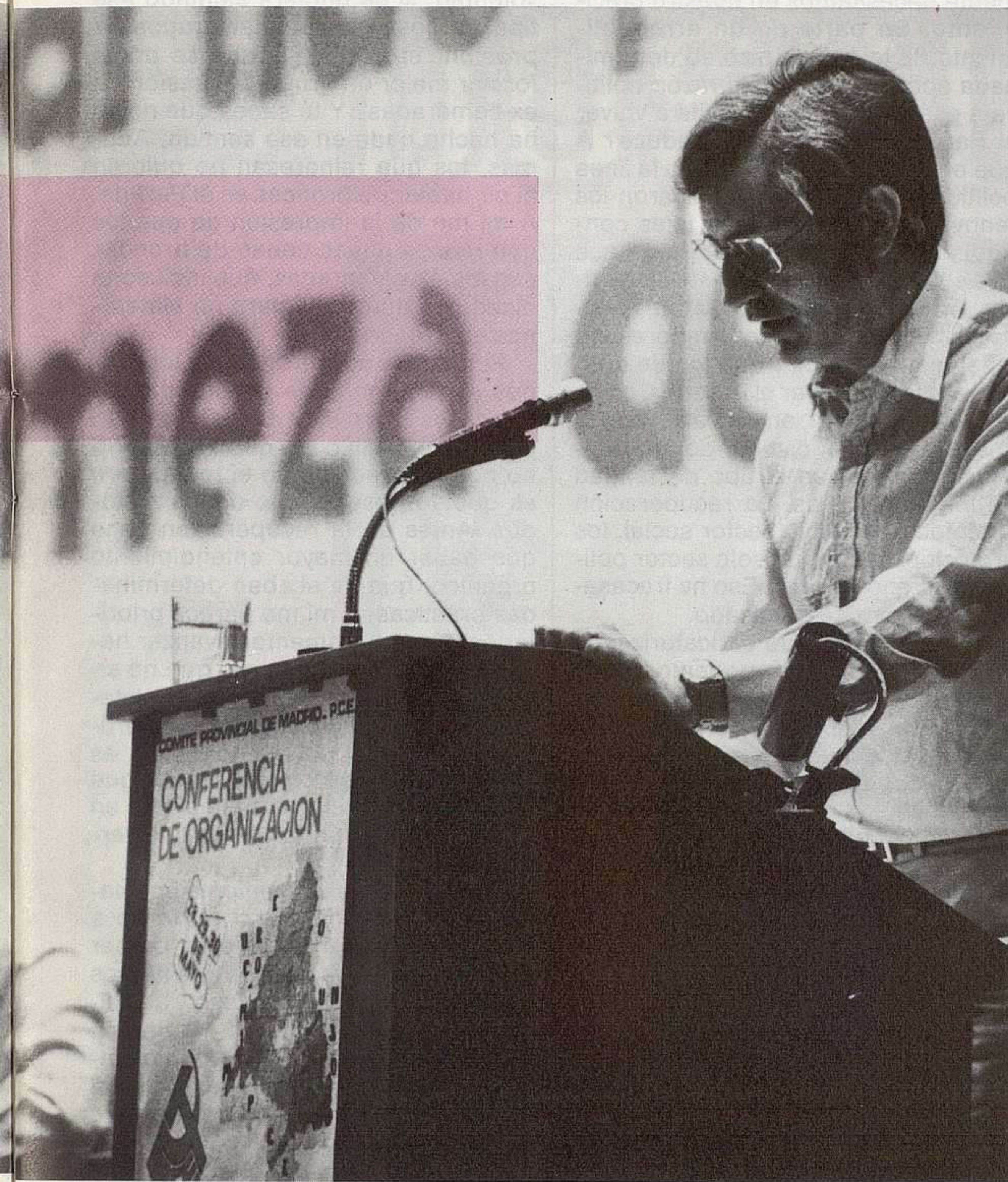
en día seguimos sin distanciarnos del PSOE, o lo hacemos contradictoriamente. Es contradictorio, por ejemplo, plantear oponerse al PSOE al mismo tiempo que en lo orgánico se plantea una política de acercamiento a los renovadores; es una contradicción que revela la falta de una línea política. Lo mismo podría decir de la política de Convergencia de la izquierda. Desde luego, yo estoy en contra de que el Partido vaya en el ochenta y seis en una coalición electoral, y la coalición electoral es el trasfondo que está detrás de la política de Convergencia. En mi opinión, la política de Convergencia no es más que una fuga hacia adelante, basada en la idea equivocada de creer que si vamos a las elecciones sin las siglas obtendremos mayor credibilidad.

Moreno: Lo que a mí me parece una fuga hacia adelante es hablar ahora de las formas concretas en las que se va a dar nuestra participación electoral en el ochenta y seis. A mí me parece que el problema actual es prever un desgaste del Gobierno a partir de su política económica, de su política de cara a la OTAN; un desgaste, además, en su izquierda que nuestro Partido tiene que capitalizar, evitar que se traduzca en desencanto, dar una alternativa. No podemos poner el carro antes que los bueyes: no podemos adelantar cuál va a ser la forma electoral que traduzca y canalice el descontento; antes tienen que producirse determinadas movilizaciones, un clima de resistencia a todas esas cosas... Y eso es la Convergencia: hoy se concreta en iniciativas de cara a la OTAN, como la Mesa por el Referéndum, etcétera. A mí, ahora, polemizar sobre la forma de ir a las



elecciones me parece absurdo; equivaldría a plantear la forma de ir a las elecciones como una cuestión de principios, y, la verdad, como cuestión de principios me da absolutamente igual ir en las elecciones del ochenta y seis en coalición o ir solo el PCE con la hoz y el martillo. Creo que esa no es una cuestión de principios.

Piñedo: Pero Juan, lo que estás diciendo me demuestra, una vez más, que estamos sin línea política. Porque lo que no se puede hacer en política es estar especulando y diciendo "si pasa no sé qué, haré no sé cuánto, y si no, no". Todos los políticos en este país apuestan: Fraga apuesta a ser la alternativa en el ochenta y seis, Roca a serlo él porque piensa que Fraga no lo puede ser, el PSOE a ganar las elecciones; y tú vas y me dices: ya veremos. Eso es táctica, pero no línea política.



Moreno: Podemos permitirnos ir en unas condiciones o en otras. Pero lo que no podemos permitirnos, vayamos como vayamos, es no estar en condiciones de recoger el desgaste del Gobierno por la izquierda. Si me dices: si hay una coalición electoral, no va a darse un fortalecimiento del Partido, porque los resultados los van a capitalizar no sé qué personalidades extrañas al Partido y no el PCE, pues no lo entiendo bien.

Piñedo: El problema es que tú tienes que predecir, tienes que arriesgarte. Lo que digo es que un órgano de dirección no puede quedarse en decir "si en el ochenta y seis se han creado las condiciones para no sé qué, pues hacemos esto...". El problema es: ¿para qué trabajar?, ¿para que haya coalición electoral en el ochenta y seis, o para que el Partido presente sus listas?

Moreno: Creo que hay obsesiones: por ejemplo, hay quienes están diciendo que incluso, aunque no haya Frente Electoral, hay que asegurar ya que determinadas personas no puedan ir en listas del PCE y se piensa en ex militantes.

Piñedo: No es mi caso. Mi posición ha sido siempre la misma: el Partido en sus listas puede llevar independientes.

Moreno: Según tú, ¿podrían ir en las listas del Partido antiguos dirigentes que se fueron del Partido y que no piensan volver, pero que están en posiciones de izquierda?

Piñedo: Perfectamente. Para mí, la única condición para el ochenta y seis es ir bajo la hoz y el martillo y con las siglas del PCE. Ahora, claro, lo que no acepto son imposiciones: que determinado independiente diga: "Yo voy de número uno en la lista" o "yo

voy, pero no acepto el programa del Partido". Además, volviendo a la Convergencia de Izquierdas, tengo otro argumento: de la Convergencia de Izquierda y del Frente Electoral no se habló en el XI Congreso. Y no se habló porque entonces no estaba en la mente de nuestros dirigentes. Y cuatro meses después, una vez conocidos los resultados de las elecciones catalanas, se saca el tema de la Convergencia de Izquierdas: es una fuga adelante producto del fracaso electoral del Partido en Cataluña. Es un tema que tenemos que despejar rápidamente, porque no se puede tener al Partido dos años o año y medio en la inopia de si Ramón Tamames va a encabezar la lista de Madrid o no.

Moreno: Lo que estamos hablando me sugiere un tema distinto, vinculado a todo lo que estamos hablando, pero distinto, que yo quería plantear: la recuperación de militantes. A mí me parece que no estamos en una situación de auge revolucionario que empuje a nuevas generaciones a afiliarse al Partido. Sin embargo, creo que hay una importante cantera de ex militantes que no se han afiliado ni al PSOE ni al grupo de Ignacio Gallego; sin embargo, estos ex militantes, por muy diversas razones, son difíciles de reintegrar. ¿Qué opinas?

Piñedo: Parto de una piedra sillar: mientras no tengamos una política distinta, no habrá recuperación. Se está intentando una recuperación sobre la base de hacer concesiones a los renovadores; es la política de la Conferencia Nacional, que hoy ya se puede afirmar que ha resultado un fracaso. Yo no hablo de recuperar; hablo de crecer. La experiencia que tenemos en Madrid es que en el crecimiento del Partido en lo que va de año hay tantos ex militantes como nuevos ingresos. Y la Juventud Comunista está creciendo. O sea, que las nuevas generaciones se están afiliando. No creo que sea obligatorio dirigirnos a los ex militantes.

Moreno: Insisto en que para mí, en la práctica, crecer es recuperar. Ya es significativo que en Madrid el cincuenta por ciento de los nuevos ingresos sean ex militantes... El desangre del Partido fue un problema de años. Recuperar camaradas que se marcharon desde una posición renovadora o que se marcharon en una posición leninista.

Piñedo: Pero, en realidad, la política de recuperación que se diseña en

la Conferencia Nacional va dirigida hacia el sector de los renovadores y, además, prioritariamente hacia el sector de los profesionales: se han hecho cenas con artistas, médicos, arquitectos, economistas, y no sé cuántos sectores profesionales más. ¿Cuántas se han hecho con militantes del movimiento obrero? Que yo sepa, lo de CASA y una con sindicalistas en Santísima Trinidad. Creo que la orientación práctica de la llamada política de recuperación ha sido alentar a los renovadores a que volvieran al Partido. Y, además, darles la razón.

Moreno: Pero, ¿hay ahí un sector de camaradas que siguen siendo comunistas y que no están en otra organización? Quiero insistir, porque creo que hay una cultura comunista, hay un trabajo de Partido de años, hay gente formada, hay cuadros... Me decías que hay ingresos de jóvenes en la Juventud Comunista. Estupendo. Pero nosotros lo que sobre todo necesitamos, y lo tenemos en aquel sector de ex camaradas, son cuadros para las batallas sindicales y políticas.

Piñedo: Juan. Te haría una pregunta: ¿cuántos delegados sindicales de Comisiones hay en Madrid?

Moreno: Unos once mil.

Piñedo: ¿Cuántos son comunistas? ¿El diez por ciento, el veinte por ciento?

Moreno: Ni idea...

Piñedo: Pues yo calculo que no más de la cuarta parte. ¿Y no es esa una cantera fundamental? ¿No debíamos priorizar el crecimiento entre los delegados de Comisiones, por ejemplo?

Moreno: Pero es que precisamente entre esos delegados muchos son ex comunistas, conocen al Partido, se fueron en una u otra etapa y te aseguro que no todos ni mucho menos se fueron por la izquierda o por el prosovietismo.

Piñedo: No hago distinciones entre unas cosas u otras. Lo que digo es que si nos planteamos una recuperación orgánica del Partido, la prioridad hay que darla hacia el movimiento obrero. Y la segunda prioridad tiene que ser la juventud.

Moreno: En eso no te puedo contradecir: un partido obrero empieza haciéndonos comunistas a los obreros. Pero el problema para mí es que parece que hay una resistencia a recuperar ex comunistas.

Piñedo: El proceso de recuperación diseñado en la Conferencia Nacional no se asienta sobre la base de definir una línea política, ni de decir qué sectores son los que prioritaria-

mente necesitamos en nuestro crecimiento. Se parte de un arrepentimiento de lo que se hizo en determinada época, se les da la razón política a esa gente y se les invita a volver al Partido. Eso, ¿a qué conduce? A que en el fondo das la razón a la línea política que en su día predicaron los renovadores, lo cual crea tales contradicciones en el Partido que hace que el Partido objetivamente se debilite. Además, no tenían razón. Yo sigo opinando que los renovadores estaban equivocados y que lo que querían era transformar el Partido Comunista en otra cosa, en un Partido de la nueva izquierda, distinto de un partido comunista con el tipo de unidad de los comunistas. La recuperación se enfoca a un solo sector social, los profesionales, y a un solo sector político, los renovadores. Eso ha fracasado, Juan, eso ha fracasado.

Moreno: Creo que caricaturizas la crisis del Partido: no podemos decir ahora que los problemas del Partido se reducían a que había un sector derechista que quería desnaturalizarle ideológicamente. Porque lo que había era un descontento generalizado, porque se consideraba derechista la línea del Partido. Ahora dices que parece que hay gente de la dirección que no quiere hablar de oposición al PSOE; pero es que en otro tiempo nos decían que no debíamos ser un Partido de oposición a UCD; eso generó que muchos camaradas se fueran. Había un profundo descontento con la derechización progresiva en la que el Partido estuvo metido hasta las elecciones andaluzas. Otra caricatura es decir que el XI Congreso o la Conferencia Nacional hayan dicho a los renovadores: "Venid que llevabais la razón en todo". No ha sido así. Ha habido una autocrítica; pero una autocrítica medida, matizada.

Piñedo: En la recuperación se ha llevado una práctica absolutamente errónea. Se ha permitido que ex militantes formen grupos de presión hacia la dirección constituida. Se ha planteado la recuperación en clave interna y, claro, se han ido más de los que han vuelto. Eso ha ocurrido en varios sitios. En Madrid, no, porque hemos pasado del tema. No se puede concebir la recuperación como que un sector del Partido promueve los reingresos con el mensaje: "Venir a ayudarnos a combatir a otro grupo del Partido", "Volver a ayudarnos a combatir a los carrillistas".

Moreno: Conozco Madrid. En Madrid, que es donde está la flor y nata de esos sectores que se marcharon del Partido, si se hubiera tenido esa

voluntad, si se hubiera alentado ese tipo de cosas, de formar grupos de presión, etcétera, ¿dónde se podía formar mejor un grupo de presión de ex camaradas? Y tú sabes que no se ha hecho nada en ese sentido. Además, los que reingresan no quieren ni oír hablar de broncas en el Partido. A mí me da la impresión de que los que menos ganas tienen de broncas son los ex camaradas, que incluso te dicen "no entramos para no alinearlos en broncas".

Piñedo: No se han alentado los grupos de presión en la generalidad de los casos; pero hay casos y se han permitido. Insisto en que en Madrid no nos ha preocupado el tema, pero es que yo paso mucho de los métodos. Antes de la recuperación tiene que haber un mayor entendimiento orgánico, que se acaben determinadas prácticas. A mí me parece prioritario en estos momentos avanzar hacia la pacificación interna, que no siga habiendo una segregación sistemática de un sector dentro del Partido. Para poner un ejemplo, que es una anécdota, pero significativa: que a Santiago Carrillo no se le siente en la segunda fila en la Fiesta del Partido.

Moreno: Sería conveniente una pacificación interna, pero en torno a qué: a mí me parece que en primer lugar en torno a la política que hemos elaborado en el XI Congreso y a la dirección que allí elegimos. Y también en torno a las direcciones que elegimos en los demás sitios: en Madrid, por ejemplo, y me reconocerás que también es duro, Adolfo, para muchos camaradas de Madrid el que aquí haya una dirección del Partido que refleja solamente a poco más de la mitad del Partido de Madrid: te estoy hablando a partir de los propios datos de la Conferencia de Madrid. Pues bien, pese a eso, soy de los que digo que la dirección del Partido en Madrid es la que hay, que hay que colaborar con ella a tope.

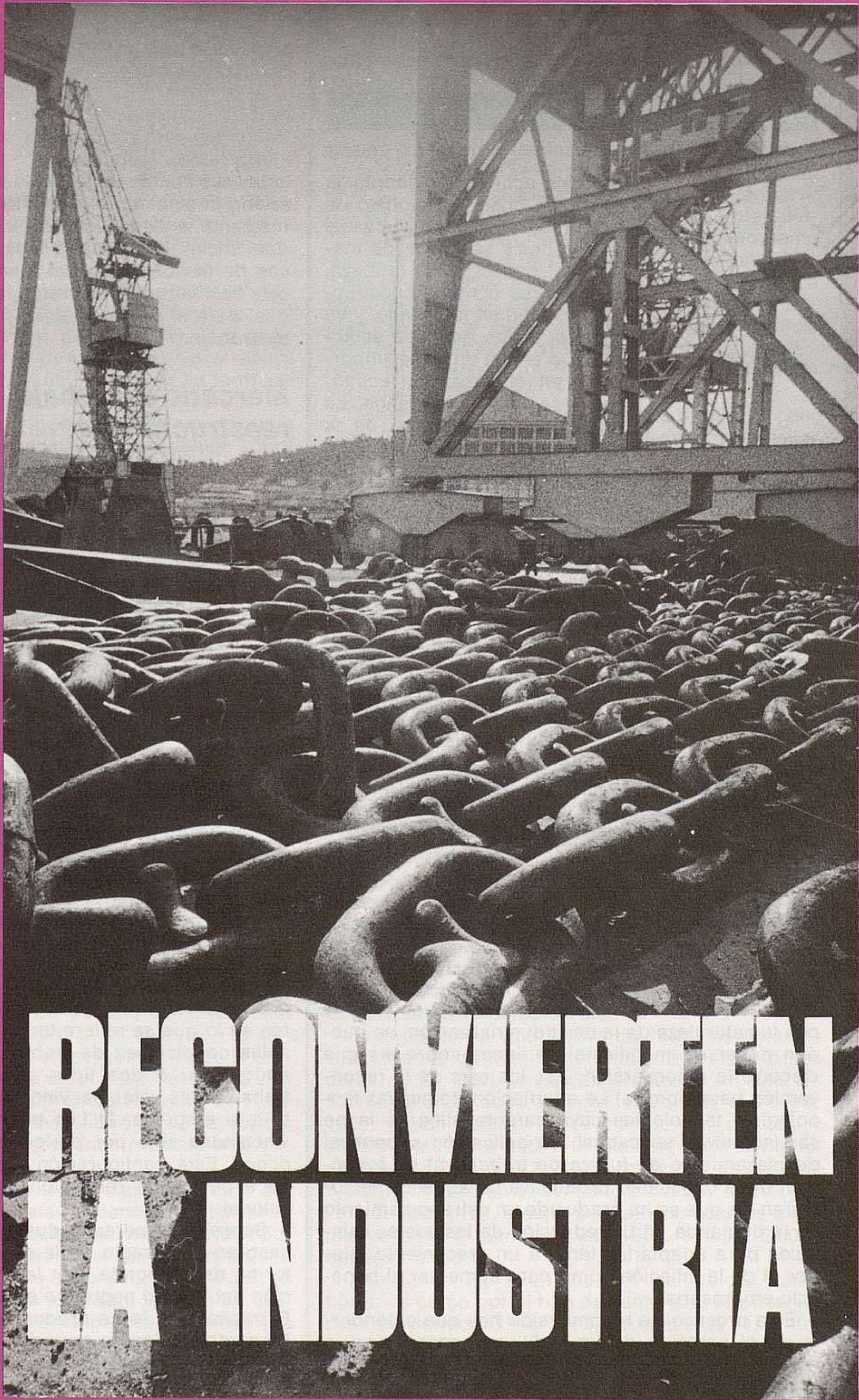
Piñedo: Una última consideración que resume muchas cosas: el Partido Comunista no va a ser alternativa de Gobierno en el ochenta y seis en ningún caso. Si eso es así, no te plantees alcanzarla; tu caso es el de ser alternativa de política, no alternativa de Gobierno del PSOE.

Moreno: Lo que me planteo es quitar votos comunistas al PSOE.

Piñedo: Yo también. Votos comunistas; insisto, comunistas.



DOSSIER



**RECONVIERTEN
LA INDUSTRIA**

DOSSIER

RECONVERSION INDUSTRIAL Y CLASE OBRERA

Andrés Bilbao



A crisis económica adopta la forma de crisis del modelo de industrialización. No es casual que la crisis se ponga de manifiesto, con especial crudeza, en sectores como la construcción y la industria pesada, y en general todos aquellos sectores que tenían un papel importante en el desarrollo económico de los últimos años. La subida de los precios de la energía, en 1973 primero y en 1978 después, acentuaron las

dificultades del sector industrial; el encarecimiento de la energía no podía dejar de incidir sobre un modelo basado en la utilización intensiva de energía. Hoy podemos hablar de desindustrialización como contenido modular de la crisis económica.

La desindustrialización se caracteriza por: 1) La reducción, tanto en términos absolutos como en términos relativos, del empleo industrial; es consecuencia del hecho de que existe una parte de este empleo que, por diversos motivos, no es rentable. 2) La participación del sector industrial en el PIB es cada vez menor. 3) Y por último, un creciente desequilibrio en la balanza comercial; este desequilibrio tiene su origen en el hecho de que la desindustrialización supone el que el sector manufacturero es cada vez menos competitivo a nivel internacional; en consecuencia se produce una caída de las exportaciones.

Reconvertir porque se desindustrializó

La reconversión industrial es la respuesta al problema de desindustrialización. Consecuentemente con la naturaleza de la desindustrialización, se pueden poner de manifiesto las líneas sobre las que discurre la reconversión. Así, los ejes de la reconversión pasan por: a) La adaptación de nuevas tecnologías, tecnologías cuya característica es la de ser intensivas en capital; su aplicación supone el desplazamiento de fuerza de trabajo. b) La reducción de la capacidad productiva de aquellos sectores en los que se ha producido un estrangulamiento de la demanda. c) La reducción de los costes salariales para adaptarlos tanto a un crecimiento inferior al de la inflación como para aumentar el beneficio empresarial.

Este proceso de reconversión hay que entenderlo en el contexto de las políticas encaminadas a reconstruir el funcionamiento del capitalismo. Por una parte, mediante la reducción del salario en

todos sus componentes; es decir, se reduce tanto el salario directo como el salario indirecto, esto último mediante la disminución de los costes de la Seguridad Social. En segundo lugar, mediante las políticas de flexibilización del mercado de trabajo; con esta flexibilización se pretende reducir las rigideces que, para el capital, presenta la utilización del factor trabajo.

Mercado de trabajo reestructurado

La reconversión industrial se articula en realidad sobre una completa reestructuración del mercado de trabajo. En esta reestructuración han venido a converger, por una parte, la acción del Estado como las prácticas empresariales. Aquél, mediante una acción legislativa que tiende progresivamente a la configuración de un nuevo ordenamiento jurídico laboral, ordenamiento que algunas veces ha sido adjetivado como un nuevo derecho del trabajo en emergencia. (Vid. Aurelio Desdentado, Ignacio García: *Las medidas laborales en la reconversión industrial*, en *Economía Industrial*, n.º 232, julio-agosto 1983.)

En la medida en que el proceso de reconversión no ha sido acompañado de un proceso de reindustrialización, se ha producido primero un crecimiento del desempleo y, en segundo lugar, una reestructuración del mercado de trabajo. Este se configura por su dualidad: por una parte existe un mercado interior desarrollado por las empresas y dirigido de forma corporativa a una parte de los trabajadores; este mercado se caracteriza, fundamentalmente, por la estabilidad jurídica del trabajador. Por otra parte, existe un mercado exterior, caracterizado por la inseguridad jurídica de los trabajadores en lo que se refiere tanto a la estabilidad como a las condiciones de trabajo. Estos cambios han dado lugar a dos tipos de trabajadores: 1) Los trabajadores estables, vinculados permanentemente a la empresa. 2) Los trabajadores no estables, vinculados sólo por períodos limitados al trabajo activo. Esta configuración del mercado es la que hace posible la reducción generalizada del coste salarial.

Sobre este mercado dual se superpone un proceso en desarreglo de la economía irregular. Esta forma de economía, con la correspondiente aparición del trabajo negro, no es un fenómeno reciente. El capitalismo la ha producido en todas sus fases. Lo característico en períodos de crisis como el actual es su mayor extensión y, sobre todo, el proceso de legalización, impuesto por las nuevas condicio-

nes de la valorización del capital. La economía irregular está compuesta tanto por empresarios sumergidos como por trabajadores sumergidos.

Estos dos procesos, la reestructuración del mercado de trabajo y el crecimiento y legalización parcial de la economía sumergida, han hecho posible importantes cambios en la relación jurídico-laboral. Relación que se trata de sistematizar y adecuar, desde el Estado, a través de la formulación de un nuevo ordenamiento jurídico laboral.

La reconversión industrial es la respuesta al proceso de desindustrialización, toda vez que es la forma central de expresión de la crisis. Así pues, la reconversión es uno de los ejes estratégicos de la política de salida de la crisis.

Si el proceso de reconversión, acerca de cuya oportunidad, al menos en términos muy genéricos, existen escasas divergencias, hubiera estado vinculado a un proceso de reindustrialización, se podría afirmar que se ha optado por una salida de la crisis, convergente con los intereses de todas las clases sociales. La vinculación entre reconversión y reindustrialización hubiera permitido mantener el empleo, o en todo caso conseguir que el desempleo tuviera un carácter transitorio. Las propuestas del Plano de Solidaridad por parte de CC. OO. están claramente vinculadas a la asociación entre reconversión y reindustrialización. Incluso se ha formulado, en plena coherencia con estas propuestas, la tesis de hacer de la reindustrialización un proyecto sindical activo. (N.: Ver los distintos trabajos sobre este tema de Tomás Parra Baños.)

Sin reindustrialización

Sin embargo, lo cierto es que el proceso de reconversión industrial ha estado desvinculado de un proceso alternativo de reindustrialización. Desde una perspectiva tecnocrática, se ha afirmado la inviabilidad de esta vinculación. UCD primero y el PSOE después, el Gobierno, se han empeñado en la política de reconversión sin ningún tipo de alternativa. Responsables económicos de una y otra formación, coreados por Coalición Popular, han insistido repetidas veces en el carácter inevitablemente traumático de la reconversión. Especialmente el Gobierno actual, surgido de la nada ideológica y en pleno descubrimiento de la miseria tecnocrática, parece convencido de la inviabilidad de la reindustrialización y en términos generales de cualquier política basada en la solidaridad.

Actualmente, los dirigentes socialistas, con verdadero candor de neófitos legalizados, esgrimen con arrogancia la asepsia de los cuadros macroeconómicos como justificación del alto coste que está pagando la clase obrera por la reconversión industrial, arrogancia que, sin embargo, recuerda el atolondramiento del elefante en una cacharrería. Quizá nunca es más cierto como ahora el rótulo de tonto útil para calificar la gozosa entrega de la cúpula dirigente socialista a una política radicalmente antiobrera.

Ahora bien, este ascenso al cielo del poder del circo de payasos moralistas y tecnócratas titiriteros tiene su clave en las sucesivas derrotas sufridas por el movimiento obrero en estos últimos años. La reconversión industrial no es un proceso natural, es decir, no tiene una única forma de legalizarse. Hubiera sido posible que este proceso hubiera ido acompañado de un proceso de reindustrialización que hubiera implicado el mantenimiento del pleno empleo, aunque evidentemente acompañado de

una política de austeridad. Pero para que esto hubiera podido suceder, hubiera sido necesaria la existencia de un movimiento obrero fuerte y organizado.

Débil resistencia

Y es que, a partir de 1983, se ha producido un ataque escalonado a la estabilidad de la clase obrera. Un ataque que se ha desarrollado de forma concéntrica: desde los sectores más débiles a los sectores más organizados; un ataque frente al cual las organizaciones representativas de la clase obrera han ofrecido una débil resistencia. Las razones de esta falta de resistencia hay que inscribirlas, en primer lugar, en el desmantelamiento organizativo de la clase obrera realizado por el franquismo. El viejo caudillo de la España de pandereta tenía razón en pensar que todo quedaba atado y bien atado. Su liderazgo en defensa del capitalismo sentó las bases para que esto pudiera recomponerse a costa de la descomposición de la clase obrera. Y en segundo lugar, no hay que olvidar tampoco el fracaso del diseño estratégico de las organizaciones obreras, traducido en su incapacidad para instalarse en las nuevas condiciones que imponía la dinámica del capital.

Este ataque escalonado a la clase obrera ha consistido en la progresiva sustitución del empleo estable por empleo inestable (trabajo precario en todas sus variantes). Esta sustitución ha supuesto tanto el debilitamiento de las organizaciones de la clase obrera como el desarrollo de ilusiones en su interior. Resulta unilateral y limitado el referirme al proceso de reconversión industrial como un proceso que se inicia a partir de la promulgación, en 1982, de la Ley de Reconversión Industrial. Ya se ha señalado el carácter modular de la desindustrialización en la configuración de la crisis. En consecuencia, la reconversión empieza en el mismo momento en que se empieza la crisis. La Ley de Reconversión Industrial señala un momento importante de este proceso, pero en modo alguno su origen.

Los mecanismos de esta desestabilización concéntrica de la clase obrera han sido básicamente tres: 1) La vía judicial. 2) Los expedientes de crisis. Y 3) La reconversión industrial, entendida estrictamente como proceso que se aglutina en torno a las medidas que darán lugar a la Ley de Reconversión Industrial. Cada uno de estos mecanismos tiene repercusiones diferentes, pudiéndose establecer entre ellos una relación en espiral. Cada uno de ellos ha afectado de distinto modo, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, a la estabilidad de la clase obrera.

La importancia cuantitativa de cada una de estas vías se pone de manifiesto mediante los siguientes datos: 1) En 1981 se habían producido un total de 1.617.000 despidos, de ellos 1.225.000, el 75 por 100, habían tenido lugar por la vía judicial, y 392.000, el 25 por 100, lo habían sido por la vía del expediente de crisis. 2) La reconversión, es decir, el proceso situado en el contexto de la Ley de Reconversión Industrial, afectó, según estimaciones efectuadas para el período 1982-1985, a unos 65.000 empleos directos.

Analizando los despidos por vía judicial, tanto por años como por el tipo de sentencia, se observa, para el período 1974-1979, lo siguiente: 1) Entre 1974 y 1979 ha aumentado el recurso a esta vía; así, en 1974 sólo el 6 por 100 de los despidos tuvo lugar por la vía judicial, mientras que en 1979 el

porcentaje se eleva al 34 por 100. 2) A medida que el número de despidos por la vía judicial crece, disminuye el número de sentencias y aumenta el número de conciliaciones. En 1974 fueron conciliados el 49,3 por 100, mientras que en 1979 lo fueron el 67,8 por 100. Esto significa que la vía judicial, que originariamente había sido un mecanismo para la regulación de las relaciones laborales, se ha ido convirtiendo en una vía para la rescisión de contratos.

Precisamente como resultado de esta transformación surge, a partir de 1979, el *Instituto de Mediación y Arbitraje y Conciliación* (IMAC). Su aparición, prevista en el Estatuto de los Trabajadores, supone la escisión del procedimiento judicial en dos organismos diferentes. A partir de 1979 existen dos instancias: Una primera, donde se establece la conciliación: es la instancia del IMAC. Otra posterior, a la que van aquellos casos en los que no se alcanza la conciliación. Esta escisión en dos organismos especializados significa la institucionalización de la vía del despido individual mediante el procedimiento jurídico. Así, a partir de 1981 aumenta vertiginosamente el despido para esta vía.

La utilización de esta vía disuelve la dimensión colectiva del conflicto: el trabajador se enfrenta de forma individual al empresario. Al individualizarse el conflicto, el trabajador entra en el universo jurídico; con ello, el conflicto se objetiva en la esfera de las normas jurídicas, liquidando el conflicto como expresión del radical enfrentamiento entre capital y trabajo. Al objetivarse el conflicto, éste se objetiva en manos de sujetos profesionalizados: abogados de las partes, magistrados, quienes transforman la dialéctica del enfrentamiento en un discurso procesal. En este momento el trabajador pierde su conciencia de clase y es un ciudadano en busca de justicia.

En el proceso judicial, la lucha de clases se concreta y a la vez se oculta. Se oculta en cuanto que sólo admite contendientes individuales, jurídicamente iguales en cuanto que las propias reglas de procedimiento son la expresión de previas relaciones de dominación. Capital y trabajo se tratan como iguales, unificados por un mismo expediente. En el hecho del despido por vía judicial, se vulnera el principio de presunción de inocencia. Por el contrario, el despido es la imposición unilateral de una sanción, frente a la cual sólo le queda al trabajador el recurso a la legalidad.

La vía judicial es una "vía silenciosa" frente a la cual las organizaciones sindicales no han podido oponer resistencia, limitándose a sancionar su funcionamiento. Esta vía ha implicado la reconversión de muchos empleos fijos en empleos precarios, abriendo camino en ocasiones hacia la subcontratación y la economía oculta.

El segundo mecanismo lo constituyen los expedientes de crisis que han cumplido una doble función. Por una parte permiten reducir el empleo, y por otra flexibilizan el mercado de trabajo. La evolución del número de trabajadores afectados por los expedientes de crisis pone de manifiesto lo siguiente: 1) Comparados con la vía individual, su importancia es más limitada, aproximadamente un tercio. 2) Esta vía alcanzó su máxima utilización en el período 1977-1980, y a partir de este momento desciende su importancia. 3) El descenso de su importancia coincide con un aumento de la regulación de empleo por la vía del IMAC. Comparando ambos procedimientos, se puede observar la siguiente relación:

	Vía IMAC (%)	Vía expediente (%)
1974	100	100
1975	134	104
1976	174	160
1977	300	204
1978	431	264
1979	554	300
1980	906	240
1981	940	184
1974 = 100 por 100		

El expediente supone un planteamiento colectivo del conflicto y lleva consigo una intervención institucionalizada de los sindicatos. La razón del abandono de esta vía es la posibilidad que han tenido los sindicatos, mediante las movilizaciones, de impedir numerosos expedientes de crisis. Esto ha supuesto el que, paralelamente a su descenso, se privilegiase aún más la vía del IMAC.

Ante los expedientes de crisis, los sindicatos, y más concretamente CC. OO., adoptaron sucesivamente dos posiciones: una primera, de negación absoluta de cualquier posibilidad de expediente de crisis, se inscribía en una política de choque, en una política de resistencia; sin embargo, ante el hecho de que seguían produciéndose, la actitud de los sindicatos se orientó hacia la negociación, buscando una racionalización en su aplicación, lo que dio lugar a una política de negociación y de movilización; los resultados de esta política permitieron paralizar parcialmente la vía del expediente, aun cuando no consiguieron parar la pérdida de empleo, se debió a que, cuando los sindicatos estuvieron en condiciones de frenar los expedientes de crisis, se potenció la vía individual.

Mediante la vía judicial y la vía del expediente de crisis se lleva a cabo un proceso de reducción y de precarización del empleo. Los sindicatos sólo han mostrado capacidad para frenar, y sólo parcialmente, el proceso de regulación mediante expedientes de crisis en la medida en que permitía un tratamiento colectivo del conflicto.

Contra el núcleo organizado

El último acto de la escalada lo constituyen los proyectos de Reconversión Industrial. Desde un punto de vista cuantitativo afectan a un reducido número de trabajadores: la pérdida de empleo se estima en unos 65.000 puestos. Sin embargo, tienen una gran importancia desde un punto de vista cualitativo, ya que ataca al núcleo más organizado de la clase obrera.

De todos los sectores sujetos a reconversión, el principal foco de resistencia lo representa el sector del metal, donde aproximadamente el 65 por 100 de los puestos de trabajo que van a perderse corresponden a grandes empresas. La fuerte nucleización es la condición de la resistencia y de la persistencia del conflicto.

La radicalidad con la que se planteó la resistencia a la reconversión (Sagunto, Aceriales, Astilleros, etcétera) ha sido interpretada como el comienzo de una recuperación del movimiento obrero, cuando en realidad cabe interpretarlo en un sentido contrario. Esta lucha tiene lugar cuando el grueso de la clase obrera ha sido ya reestructurado y se ha reformulado un nuevo mercado de trabajo.

Este ataque escalonado ha tenido como consecuencia transformar la estructura de la clase obrera. Si en el periodo anterior el trabajador en la fábrica constituía el eje en torno al que se vertebraba la clase obrera, hoy este eje ha sido quebrado. A medida que se produce la desarticulación del trabajo estable se están quebrando las bases de afiliación de las actuales organizaciones obreras.

El proceso de reconversión ha significado un cambio en la composición técnica de la clase obrera. Actualmente, bajo la denominación de clase obrera coexisten colectivos heterogéneos en sus intereses. Así, junto a los trabajadores estables de las grandes fábricas coexisten los trabajadores de pequeñas empresas cuyas condiciones de trabajo son precarias. A un lado se sitúan los trabajadores eventuales, los que trabajan en la economía subterránea, los parados, que no constituyen un grupo homogéneo, etc... Cada uno de estos colectivos tiene intereses divergentes, y sólo algunos de ellos se encuentran representados por los actuales sindicatos.

De hecho, el movimiento obrero organizado sólo ha sido capaz de movilizarse cuando la reconversión ha alcanzado a sectores en los que se daba, por las características del proceso de producción, una gran concentración de trabajadores estables. Pero incluso en estos casos, especialmente el caso de Sagunto, la reacción frente a la reconversión ha resultado problemática. La radicalidad del conflicto en Sagunto ha ido disolviéndose en el ahondamiento de las divergencias entre los propios trabajadores. En este sentido, es importante llamar la atención sobre dos hechos: 1) La falta de solidaridad

que otros colectivos de trabajadores mostraron ante las movilizaciones de Sagunto, especialmente notoria es la pasividad de los siderúrgicos del Norte, atrapados en la defensa corporativa de su puesto de trabajo y para los que la reestructuración de Sagunto se presentaba como la garantía para el mantenimiento de su propio puesto de trabajo. 2) Las progresivas diferencias que se fueron estableciendo, primero entre los trabajadores y el conjunto de la población de Sagunto y, en segundo lugar, entre los propios trabajadores, primero de acuerdo con su localización en la planta y después de acuerdo con su condición jurídico-laboral. La negativa de una parte de la plantilla a que los trabajadores eventuales participaran en el referéndum señala un punto culminante en esta división. Ambos fenómenos hay que achacarles a la incapacidad para establecer una mediación entre los distintos colectivos de trabajadores que superara las fisuras que origina la lógica de la situación.

Así pues, la reconversión hay que interpretarla como un proceso que afecta a la estructura de la clase obrera. La incapacidad de las organizaciones obreras para adaptarse a esta nueva composición técnica ratifica la debilidad de la clase trabajadora frente a este proceso.

Debilidad que es el origen de la incapacidad para imponer un proceso de reconversión distinto al que se está realizando.



LA REESTRUCTURACION INDUSTRIAL CON EL GOBIERNO SOCIALISTA

Juan Ignacio Marín

A política industrial contemplará un ajuste positivo e integral que supere las actuaciones parceladas, defensivas y coyunturales, de modo que la asignación de recursos para la reindustrialización se realice integrando las tareas de reestructuración, reconversión y creación de nuevas actividades industriales".

... "Los socialistas propugnamos la puesta en marcha de procesos de planificación económica que sirvan de orientación y marco de referencia a la iniciativa privada"...

... "Los socialistas concebimos las empresas públicas como instrumentos fundamentales para la creación de puestos de trabajo y el logro de un desarrollo estable"...

... "Nos comprometemos a la creación en el seno de las empresas públicas de instrumentos que hagan posible el reciclaje profesional de la mano de obra empleada en actividades obsoletas".

Del programa electoral PSOE (octubre 1982)

Política económica y reconversión industrial

El PSOE ha optado en política económica. Sus enfoques de actuación ante la crisis —el propio Gobierno lo reconoce— no difieren de las políticas aplicadas por los Gobiernos conservadores en Europa (1). Lejos de una mera explicación tecnocrática, lo que en el fondo subyace es una opción ideológica, de mayor profundidad: su renuncia a transformar, su aceptación de las reglas de juego de la derecha, con ardor y entusiasmo dignos del neófito.

Y han grabado a fuego en su cerebro eso de que "sólo la iniciativa privada crea empleo". A pesar de lo tozudo de la realidad, siguen gobernando con ese

frontispicio. Por eso no es extraño que, medida tras medida, todas ellas apunten a hacer de nuestro país un paraíso empresarial, en el que a fuerza de dosis masivas de confianza (que se miden siempre en dinero), los puestos de trabajo algún día crezcan como hongos.

No con ánimo de reiterar lo conocido, sino de recordar lo imprescindible, conviene pasar revista a lo que han sido y son los ejes de esa política de "facilidades al sector privado", de los que el AES y los PGE 85 no son sino un paso más:

a) Descenso de los costes salariales directos por la vía del tope y la ejemplificación en el sector público.

b) Descenso paulatino de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, en paralelo al aumento de las de los trabajadores.

c) Abaratamiento de la contratación laboral, abriendo el paso a la eventualización generalizada y al despido colectivo libre.

d) Aumento sostenido de las desgravaciones fiscales al capital.

e) Deterioro progresivo de las prestaciones sociales en el camino de la privatización de las áreas más rentables.

f) Renuncia al ejercicio de la planificación pública, incluso de la "competencia" del sector público en actividades industriales, financieras y comerciales.

g) Liberación masiva de recursos para el sector privado, vía reducción drástica del déficit público a costa de inversiones y prestaciones.

En este marco, la política industrial del Gobierno es "coherente". También en este tema abrazan las teorías de la derecha. Para ellos, la reconversión tiene poco que ver con el empleo, con el entramado industrial, con la reindustrialización. El único criterio son las cuentas de resultados.

Cada vez aparece más claro el riesgo de la desertización industrial, de la tercermundización de nuestra economía. Parece que la apuesta es convertir a España en el Singapur de Europa: fuerza de trabajo barata, campo abierto a las multinacionales, renuncia al ejercicio público de la planificación democrática.

Los efectos de esta política son claros: el ajuste industrial se realiza en su mayor parte de forma "incontrolada". Miles de empresas cierran, cientos de miles de trabajadores pierden su empleo (un millón de puestos de trabajo industriales se han destruido en nuestro país en estos años). Pese al esfuerzo sindical, a la búsqueda de iniciativas para mantener empresas, la reestructuración en su globalidad se produce de forma salvaje, sin mayor repercusión política debido a la desagregación, a la parcialización, también a la insuficiente organización sindical en la pequeña empresa.

La norma legal

¿Por qué, entonces, se recurre a una normativa legal para la reconversión? Muy sencillo: en la gran empresa, en los sectores básicos de la producción, la fuerza sindical es más importante. Hay, pues, que establecer un marco que permita neutralizarla. Frente a los intentos sindicales de conseguir una norma amplia (no sólo para los grandes sectores) que garantice la intervención de los sindicatos, la negociación y el acuerdo; que simultanee la destrucción con la creación de empleo; que parta del acuerdo en lo industrial, introduciendo elementos de planificación junto a la defensa del empleo; que permita un marco de tratamiento integrado de la PYME; frente a todo

ello, el objetivo de la ley es muy distinto. Se limita a establecer un marco legal favorable para proceder al tratamiento de plantillas en función de las decisiones patronales y a un sumario de beneficios económicos que, sobre la base del trasvase de recursos públicos a las empresas, permita que se refloten manteniendo intacta su propiedad.

En efecto, por un lado se renuncia a que las sociedades de reconversión, figura interesante en abstracto como posible instrumento planificador, cuenten, por un lado, con peso decisorio de la Administración y participación sindical, y por otro, con la opción de inclusión en el sector público de las empresas saneadas a costa de fondos del Estado y esfuerzos de los trabajadores. Muy al contrario, el poder básico de decisión está en las propias empresas privadas y, de entre ellas, en las más fuertes. Y téngase en cuenta que son estas sociedades las que toman las decisiones operativas de tipo industrial, financiero, de mercado, laboral, etcétera, a pesar de que formalmente sean las Comisiones Ejecutivas de los planes las encargadas de hacerlo. En todo caso, los sindicatos no aparecen en ningún centro de decisión.

Por otro lado, el papel que se asigna a los sindicatos es de mera comparsa. Los planes industriales y financieros, que son la clave de las decisiones de política industrial, se hacen en la práctica entre empresarios y Administración. A los sindicatos sólo les cumple aplicar en lo laboral las decisiones. En otras palabras, se les "deja" discutir cómo los trabajadores van a la calle o cómo se cierran las empresas.

Para todo ello se revela necesario un colchón que amortigüe los cierres drásticos y los despidos masivos: los fondos de empleo. Presentados como tales, pueden hacer creer que, efectivamente, están proyectados en función de la recolocación de los trabajadores excedentes. Sin embargo, el análisis de los textos, de la propia práctica, revela que no es así. En realidad están concebidos como mero fondo de prestaciones, al no contar con proyectos industriales aparejados, al confiar exclusivamente en que las Zonas de Urgente Reindustrialización cumplan el papel reindustrializador, lo que es imposible al renunciar a la iniciativa pública y a la planificación, quedando reducidas a mecanismos de beneficios comparativos para los empresarios privados que quieran instalarse en estas zonas.

Ciertamente, el fondo de empleo supone una prestación de desempleo algo superior a la del "parado normal", a costa, claro está, de la aceptación del carácter de "excedente estructural", sin garantía de empleo posterior ni de reingreso en la fábrica, aparte del obligatorio depósito de la indemnización legal por despido que al trabajador le corresponda.

Por eso, en la jerga sindical se conoce este mecanismo —que ya fue propuesto por la UCD y los sindicatos rechazaron— como "bolsa de paro". Puede ser interesante, incluso, aclarar a este respecto lo que ha aparecido como "gran logro" de UGT en algunos casos. Me refiero a la discusión rescisión-suspensión de contratos para pasar a las bolsas. Ciertamente es que, en situación normal, sindicalmente siempre es preferible que el contrato sea suspendido. Pero el problema no reside ahí, sino en la diferencia práctica, en este tipo de empresas, que existe en relación a la conservación del puesto de trabajo. Si la suspensión se produce por tres años, sin garantía alguna de reingreso (muy al contrario con el acuerdo sindical, de que el trabajador es un excedente estructural) ni de reemplazo (sin proyecto alguno de industria alternativa), la diferencia es más que nada psicológica. En otras palabras, la modificación del carácter

del acto administrativo ni resuelve la situación de fondo (el empleo) ni garantiza una mejor situación al final de los tres años de duración del fondo, en el que el trabajador quedará en ambos casos sin prestación de desempleo por tenerla agotada. Esta es la clave de las diferencias sindicales en Aceriales. Este es también el clavo ardiendo al que UGT se agarra en ocasiones, aunque el Gobierno, a veces no le permita ni esa salida por la tangente.

¿Qué se pretende en definitiva con los "fondos de empleo"? Sobre todo, hacer aparecer a los afectados por la reestructuración ante el resto de los trabajadores como "privilegiados" ¿Con qué objeto? Con el de enfrentarles con el resto, con el de poner trabas a la solidaridad de clase.

Afortunadamente, sin embargo, la lucha por impedir la reducción de capacidad industrial, por impedir la pérdida masiva de empleo, se ha impuesto, neutralizando estos intentos y colocando también en lugar destacado el impacto dramático sobre el empleo inducido que territorialmente produce esta política.

Más allá de la lucha específica de los trabajadores afectados, buscando las alianzas necesarias, se ha producido una extensa contestación a los planes gubernamentales.

Las experiencias concretas

No es extraño que cuando se habla de reconversión industrial aparezcan de modo destacado los problemas relativos a la siderurgia y al sector naval. De hecho son los sectores clave de acción comunitaria y, en general, los típicos en los que el tratamiento industrial y de empleo han producido y producen los más significativos enfrentamientos de clase en los países de nuestra área y en el nuestro. Sin embargo, no son los únicos en los que ya ha actuado (dentro y fuera del marco normativo de la Ley de Reconversión).

Puede ser útil hacernos una idea de la magnitud del problema de empleo a partir de las cifras de expectativa de destrucción de puestos de trabajo en grandes empresas del metal, con la intención sobre todo de poner de manifiesto la necesidad de una política de reindustrialización planificada y acordada con los sindicatos.

El cuadro adjunto muestra cómo la previsión gubernamental conduce —exclusivamente en grandes empresas con tratamiento específico de reconversión— a una pérdida de empleo estimada en más de 50.000 puestos directos, con el efecto multiplicativo correspondiente.

La experiencia sindical en el tratamiento de la reconversión viene de antiguo, y no es lugar aquí de analizarlo. Sólo constatar los avances sindicales que supusieron acuerdos realizados entre los años 78 y 82, en los que se logró evitar la reestructuración por decreto, los despidos y los cierres masivos. Arma fundamental para los trabajadores era entonces la unidad de los grandes sindicatos, rota al plegarse UGT a la política del PSOE, a partir de su instalación en el Gobierno. Las consultas del otoño pasado para la Ley de Reconversión que sustituirían a la Ley Bayón desembocan en el veto a CC. OO. y en el desacuerdo de UGT y ELA.

Surgen como símbolos las luchas de los siderúrgicos, con resultados desiguales y también significativos: Aceriales termina en un acuerdo —que CC. OO. no suscribe— en el estricto marco de la política del Gobierno, una vez rota la unidad por UGT y

PREVISIONES DE DESTRUCCION DE EMPLEO EN GRANDES EMPRESAS DEL METAL 84/87 (*)

1. SECTORES EN RECONVERSION SEGUN LEY	
— Siderurgia integral	10.505
— Naval	20.000
— Aceros especiales	1.752
— Material eléctrico automoción	1.000
— Gama blanca	5.000
— Cobre	700
	38.957
2. PLANES DE EMPRESA CON AYUDA PUBLICA	
— Grupo ITT	2.400
— Talbot	2.000
— Babcock and Wilcox	800
— Mercedes-Benz	400
	5.600
3. OTRAS PREVISIONES	
— Bienes de equipo eléctrico	3.500
— Material ferroviario	3.000
	6.500

(*) Las previsiones se hacen sobre cifras avanzadas por el propio Gobierno o en contactos de prenegociación con las empresas o sectores afectados.

ELA. Se consagran las bolsas de paro, los sindicatos firmantes aceptan como excedentes estructurales a quienes las empresas designen y el Ministerio de Trabajo juega su papel: extinción previa de los contratos, cambiada a última hora por suspensión, pero sin garantía alguna de empleo posterior.

La lucha de Sagunto, punto de referencia durante meses de la oposición de los trabajadores a las opciones industriales defensivas del Gobierno y a la propia Ley de Reconversión PSOE, termina con un acuerdo, que CC OO. pilota, en el que se desborda favorablemente el marco de la Ley. Agotadas las posibilidades prácticas de "desobediencia", la batalla industrial la gana el Gobierno, pero se consigue imponer el concepto de reindustrialización simultánea, de fondo de empleo como paso intermedio a la recolocación, de participación sindical en todo el proceso.

Cuestión aparte es el grado de cumplimiento que sea posible alcanzar, tras el reciente intento del Gobierno de imponer por la vía administrativa el cierre de la cabecera de AHM sin haber cumplido sus compromisos previos de creación de empleo y otros. La nueva fase que se abre estará, a buen seguro, sembrada también de dificultades.

La inclusión de un trabajo específico sobre la siderurgia en este mismo número permite hacer una referencia algo más amplia al sector naval, que conoce en estos días una nueva etapa de su lucha de años por una industria naval suficiente y una reconversión negociada sin despidos. La huelga de Astilleros del 12 de julio, que en Galicia se convirtió en huelga general, no fue sino un punto y seguido que cerraba momentáneamente el proceso.

Pasemos rápidamente revista a los elementos esenciales en que se sustentan las propuestas de CC. OO. que, dicho sea de paso y como después veremos, son asumidas por la abrumadora mayoría

de los trabajadores, empujando a otros sindicatos a variar de posición en este período.

Cuando el Gobierno PSOE acomete la aplicación del Libro Blanco en el sector naval, ya se ha producido una reducción de capacidad en el sector de un 30 por 100 (de un millón de TRBC/año se ha pasado a 700.000), con una pérdida más que proporcional del empleo en el período 78-82, con la salvedad de que se produce de forma negociada, sin despidos, protegiendo a los sectores más débiles de los trabajadores (contratas y eventuales).

Dicha reducción de capacidad es comparable a las producidas en los países comunitarios. Sin embargo, y aparentemente sin presión de la CEE, se plantea una nueva y distinta reducción en prácticamente un 50 por 100 (pasar a una dimensión del sector de 400.000 TRBC).

Hay razones industriales de peso para nuestra oposición sindical. En efecto, con las propias previsiones de demanda mundial del Gobierno, si España apostase por mantener nuestra cuota de participación en el entorno de lo producido en el quinquenio 75-80, que equivale a un 6 por 100, las previsiones, y por lo tanto la "apuesta" industrial, deberían situarse en las cifras que se detallan:

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Revisiones demanda mundial de TRBC	11,7	12	13,2	15,9	17,1	17,9
Producción en MTRBC manteniendo cuota mundial	0,707	0,721	0,793	0,955	1,027	1,075

42

Mantener la capacidad actual (0.7 M TRBC) resultaría conservador, incluso aceptando un progresivo traslado de esta actividad a terceros países.

En cuanto a la competitividad, los propios datos patronales reconocen que ya hoy somos competitivos en nuestra área, que es el mercado europeo. Compararnos con Taiwan o Singapur sería hacernos trampas en el solitario, puesto que nadie piensa en salarios de hambre para los trabajadores ni jornadas dobladas.

Sin embargo, no se mantiene una opción industrial coherente, con ausencia de planificación industrial alguna. Mientras las mentes más sensatas apuestan por una salida a la crisis industrial en España sobre la base de las tecnologías medias, modernizadas, desarrolladas, aprovechando nuestras ventajas diferenciales, la apuesta socialista es la desertización.

Cierto es que la industria naval en toda Europa (y en Japón) está subvencionada y que en muchos casos la producción depende del nivel de recursos públicos que se pongan a disposición. Y mucho tiene que ver en la negativa al apoyo a la industria naval el hecho de que en su gran mayoría es hoy una industria pública.

El impacto en las plantillas es impresionante. De los propios datos de las empresas resulta un excedente bruto de 20.000 trabajadores. Aplicando la jubilación anticipada a los cincuenta y cinco años, aún quedarían más de 13.000 trabajadores sin expectativa de empleo posible.

Frente a todo ello, por interés nacional también, aparece cada vez con más claridad la necesidad de un plan de flota que garantice nuestro comercio exterior y el futuro de nuestra industria naval; la necesidad también de proceder a una verdadera negociación que por ahora no se ha dado.

Puede ser útil aclarar que CC. OO. no ha bando-

nado en ningún momento la mesa de negociación. Es el Gobierno quien ha marginado ilegalmente al sindicato más representativo, en práctica que ya está consistiendo en habitual, utilizando un pretexto demasiado burdo: la división de la negociación en tres fases.

El objetivo de la primera de ellas era obligar a asumir a los sindicatos los elementos esenciales de la política de reconversión del Gobierno, es decir, plenos poderes al empresario para reducir las plantillas a su conveniencia y recurso a las bolsas de paro sin garantía alguna de recolocación para los trabajadores.

Lógico es que CC. OO. no aceptara estos principios, pues hubiera tenido las manos atadas en las fases posteriores (planes subsectoriales y de empresa). Sin acabar, pues, la negociación, y contradiciendo incluso la propia Ley de Reconversión, el Gobierno prohíbe a CC. OO. e INTG la permanencia en la mesa para el resto de la negociación. UGT y ELA-STV aceptan los planteamientos del Gobierno.

Los recientes episodios vienen a dar la razón a CC. OO., al tiempo que afloran las contradicciones en el seno de UGT y ELA.

La segunda fase (asignación de tonelaje global a

los subsectores) cuenta con el apoyo de estos últimos sindicatos en el plan subsectorial de pequeños y medianos astilleros, mientras que no son capaces de asimilar el de los grandes, con lo que las negociaciones de estos últimos quedan rotas sin acuerdo sindical. Y todo ello a pesar de que la reducción de capacidad y los criterios de tratamiento de empleo son exactamente iguales en uno y otro caso.

¿Por qué, pues, esa diferencia de actitud? Muy sencillamente, porque el Plan de Grandes Astilleros implica el cierre de dos grandes fábricas: Astano y Euskalduna.

Sería bueno buscar la coherencia sindical donde sólo aparece más bien oportunismo (los pequeños astilleros pueden desaparecer sin hacer mucho ruido, piensan algunos).

La batalla continúa. ELA sube al carro de la movilización. Y UGT queda cada vez más aislada, mientras los trabajadores siguen luchando organizadamente (afiliados de UGT incluidos) en torno a las alternativas de CC. OO.

No se puede ocultar que es y va a ser una lucha dura. Que el relevo en el INI tiene un significado de endurecimiento gubernamental ante las presiones de una derecha que declara: "En esa línea estamos de acuerdo, pero más de prisa".

La lucha por una reconversión negociada aparece hoy como una batalla de clase de primer orden en la medida que supone uno de los pilares esenciales de la política económica del Gobierno. Por otro lado, la extensión entre la población por su carácter cada vez más claramente política, cuestionador de lo global de una actuación gubernamental.

No son extraños editoriales como el del *Diario 16* del 18 de octubre, que sólo denotan nerviosismo (2). No harían falta más comentarios si no fuera porque el día anterior se producía la ruptura definitiva de

ELA-STV, con declaraciones cuyo contenido, en boca de cualquier dirigente comunista, merecería primeras páginas y rasgueo generalizado de vestiduras (3).

Simultáneamente, en sectores como la Gama Blanca, la ceremonia de la confusión alcanza su grado máximo: lo que se negocia con los sindicatos son los estatutos de los fondos de promoción de empleo. Los planes industriales vendrán al final. Lo del carro y los bueyes sería poco si no tuviera también su truco: se trata de ultimar el mecanismo con los sindicatos, para luego no volver a contar con ellos.

Mientras tanto, y puede que en vista de la experiencia, el Gobierno renuncia al tratamiento de sectores enteros que incluso había comprometido en el Libro Blanco. Así, el sector de material ferroviario, condenado por la parálisis del Plan de Inversiones de Renfe; el de material eléctrico para energía, dos de cuyas empresas (General Eléctrica y Westinghouse) se han visto abandonadas por las multinacionales americanas GECO y WELCO; el de la motocicleta, la máquina herramienta, la herramienta manual, y un largo etcétera.

La técnica es la de costumbre: dejar que las empresas se caigan, que se llegue a una situación límite, negarse al tratamiento sectorial, para al final aparecer como salvadores de los restos del naufragio.

La empresa pública merecería un trabajo específico. Escalofriantes son las decisiones últimas del Gobierno, que el nuevo Presidente del INI se ajusta a llevar adelante: La consigna es: "cerrar lo que da pérdidas, privatizar lo rentable". Para el lector atento: una vez "saneadas" las empresas públicas en reconversión, a costa de los trabajadores y de fondos

públicos, se pondrán a la venta siguiendo el ejemplo de la señora Thatcher o del señor Kohl.

NOTAS

(1) "En macroeconomía hay pocas diferencias. Si se examinan las conductas de Gobiernos socialistas, como el sueco, el francés, el italiano o el español, las diferencias de instrumentos de política económica con Gobiernos conservadores como el inglés o el alemán no son grandes. Confrontados a los mismos problemas de balanza de pagos e inflación, Gobiernos de ideologías distintas usan las mismas soluciones técnicas". (Miguel Boyer en **El País**, 14-10-84.)

(2) "Comisiones Obreras, con toda claridad, está haciendo en el sector naval una exhibición de fuerza, como demostración de poder tras su autoexclusión táctica del Acuerdo Económico y Social. Pero nadie puede pensar que sus móviles son altruistas: se trata de una estrategia política, con orígenes en el Partido Comunista, que pretende poner cerco al PSOE, con la idea de conseguir, por la vía de la radicalización, el retorno de un electorado que lo abandonó en 1982.

Esta estrategia es condenable. No lo sería, lógicamente, si su pretensión fuera lograr para los trabajadores la solución menos traumática. Pero de lo que se trata es de otra cosa, que el Gobierno socialista viene sospechando y temiendo desde hace algún tiempo. Se trata de echar arena en los engranajes de un proceso necesario, con la vista puesta en objetivos políticos. De este modo, los supuestos beneficiarios de la agitación, los trabajadores, se convierten en instrumentos, en su mayor parte inconscientes, de una política de agresión al Gobierno, cuyo decidido afán por la reconversión merece el apoyo debido a las iniciativas políticas valientes".

(3) "Las barricadas son el único camino que nos han dejado". (Juan Olascoaga, secretario general del Metal de ELA-STV.)

RECONVERSION INDUSTRIAL A LA ESPAÑOLA: EL CASO SIDERURGICO

Eliseo Blasco

A política de reestructuración industrial (mal llamada reconversión) llevada a cabo en nuestro país en los últimos años, ha pasado por diversas fluctuaciones con los diferentes Gobiernos UCD y con el actual del PSOE, aunque en general sigue un mismo hilo conductor, que es la consecución de una reducción, normalmente drástica

de la capacidad de producción de nuestros sectores productivos con vistas a un "suave" ingreso en el Mercado Común, entrada que se ha convertido en la obsesión del actual Gobierno.

Tres fases

Ha habido, por tanto, tres grandes fases claramente diferenciadas: la primera con Abril Martorell en el Gobierno, cuyo planteamiento a la crisis industrial generalizada fue el de promover ayudas a

las empresas en dificultades sin abordar programas sectoriales. La segunda, con la entrada de Bayón en el Ministerio de Industria del Gobierno de UCD, dio un giro de 180 grados, pasándose a abandonar las ayudas empresa a empresa, tratando de dar un carácter sectorial a la política de reestructuración.

Fruto de esta nueva estrategia fue que, a partir de 1979, se empiezan a realizar, por parte de la Administración, estudios de los sectores más "tocados" por la crisis, como son el siderúrgico, el naval, el de electrodomésticos, el textil, siguiéndose posteriormente con la casi totalidad de los sectores industriales.

El Gobierno de UCD fue tremendamente respetuoso con los agentes sociales y partía del convencimiento de que había que negociar y acordar dichos planes con lo que entonces se llamó las *cuatro patas de la estructura del sector*, a saber, los acreedores, los accionistas, la Administración y los sindicatos, tratando de que cada palo aguantase su vela.

Los acuerdos, conseguidos más o menos trabajosamente (en el caso siderúrgico se consiguió tras casi un año de duras negociaciones), se caracterizaban por lo siguiente:

- Saneamiento financiero, con determinados compromisos de los acreedores, empresas y Administración para reducir las elevadísimas cargas financieras de las empresas, debidas en su mayor parte a una mala gestión y que, al no ser cambiados los gestores, ha continuado siendo un fracaso. Por ejemplo, en el sector siderúrgico se partió de un 18 por 100 de cargas financieras, tratando de llegar al 8 por 100 y terminando con un 16 por 100 al final del plan.
- Cierre de instalaciones obsoletas y reducción de capacidad, con el consiguiente impacto sobre el empleo. Sin embargo, UCD no se planteó, por miedo a los conflictos sociales previsibles, un cierre generalizado de plantas, solamente de aquellas instalaciones obsoletas, pero manteniendo la actividad principal en cada zona o región.
- Programa de inversiones básicas y complementarias para adecuar las estructuras productivas a las necesidades del mercado. En realidad era la única solución a medio y largo plazo, pero salvo honrosas excepciones, no se llevaron a cabo dichas inversiones básicas y ni tan siquiera todas las complementarias. Así, en el sector siderúrgico las inversiones básicas, por valor de 130.000 millones de pesetas (dos Acerías y el famoso Tren de Bandas en Caliente), no se llegaron a hacer, y de los 25.000 millones de pesetas para inversiones complementarias no se llegó ni tan siquiera a la mitad, desviándose parte del dinero estatal a financiar otras cuestiones como repuestos, materias primas, etc.
- Absorción del desempleo generado de forma no traumática por medio de jubilaciones anticipadas en buenas condiciones, para que no hubiera gran resistencia por parte de los sindicatos.
- Fuertes reducciones de salarios reales para acomodar la relación salarios/facturación a niveles prefijados por la Administración, de acuerdo con los niveles de la CEE. En la siderurgia integral, como las empresas no cumplieran con los objetivos de facturación (debido una vez más a la mala gestión y a la endebles de la demanda interior), a pesar de la bajada de salarios y de la reducción de plantillas no se pudieron conseguir los objetivos previstos.
- Subida de tarifas y ordenación de la oferta para evitar competencias desleales. Este punto, fuerte-

mente defendido por las empresas, fue concedido por la Administración sin rechistar y sin poner las correspondientes condiciones para racionalizar las políticas de compra, exportación, calidad de productos, etc.; es decir, se cedió a las subidas de precios (que han provocado una mayor debilidad de la demanda) y no se mejoró un ápice la gestión de las empresas.

En el sector siderúrgico integral los anteriores acuerdos, que podemos llamar Acuerdos de 1981, fueron ampliamente incumplidos por el Gobierno de UCD, entre otras cosas por la falta de decisión política de enfrentarse a la CEE y de ideas claras de qué hacer con la siderurgia española, lo que provocó que no se pusieran en marcha las necesarias inversiones de reindustrialización de las empresas, ni se avanzara en la necesaria coordinación interempresas o inclusive su fusión, a la vista de que eran fundamentalmente los fondos estatales y los créditos del Banco de Crédito Industrial los que contribuyeron al saneamiento del sector (el INI tuvo que avalar, con 50.000 millones de pesetas, a la empresa privada Altos Hornos de Vizcaya sin que se variara ni incluso su Consejo de Administración).

Este tema de la fusión de las tres empresas ha chocado frontalmente con la política de UCD, lo cual era lógico, pero también con el Gobierno PSOE, lo cual es otra muestra de la política tremendamente conservadora que lleva hasta el momento el PSOE. Baste decir que el Estado deberá gastarse más de medio billón de pesetas en el nuevo saneamiento del sector y, sin embargo, ni tan siquiera se plantea que en el Consejo de Administración de Altos Hornos de Vizcaya haya un interventor gubernamental, como existe por ejemplo en Telefónica.

En resumen, la segunda etapa de la reconversión tipo UCD se clausuró con una fuerte reducción de plantillas (se pasó de 41.323 trabajadores en 1978 a 34.479 en 1983, año en que finalizaron los Acuerdos del 81, con una reducción de 6.844 puestos de trabajo desaparecidos, un 16,6 por 100), un insuficiente saneamiento financiero, un grave incumplimiento en las inversiones básicas y en las previsiones de facturación, y un mantenimiento de la estructura de propiedad y de las tres plantas integrales (UCD pensaba santificar a Sagunto cuando se entrara en el Mercado Común, pero no antes).

La etapa PSOE

La tercera etapa, en la que nos encontramos, es la marcada por el PSOE. Cuando las fuerzas sociales esperaban que el Gobierno de los 10 millones de votos diera un tremendo impulso, tanto en la realización de las inversiones básicas como en una mejora drástica de la gestión, de acuerdo con los planteamientos de los socialistas cuando eran oposición, nos encontramos que no sólo no se cambia la política UCD, sino que se acomete una drástica reducción de la capacidad productiva del sector: al Mercado Común se le ofrecen sin contrapartidas aparentes una disminución de 2,5 millones de toneladas de acero común, acompañada de una aún más drástica reducción de plantilla, en torno a los 10.000 puestos de trabajo, que añadidos a los anteriores 6.844 provocarían una reducción total del 40 por 100 de los efectivos de 1978. Si comparamos con las cifras de pérdidas de puestos de trabajo en la CEE, con una capacidad de acero muy superior a la española (baste decir que mientras España tenía unos 8 millones de toneladas de capacidad de acero integral, la Alemania Federal tiene más de 50

millones de toneladas; Italia y Francia más de 20 millones de toneladas cada una), observamos que el empleo en la siderurgia comunitaria era en 1978 de 698.700 personas y se redujo a 494.000 en 1983, es decir, un 30 por 100. Por tanto, el Gobierno español ofrece una reducción en el sector integral superior a la de la media del Mercado Común.

Al mismo tiempo, el plan industrial elaborado por el Ministerio de Industria se realiza sin tener en cuenta ni los Acuerdos del 81 ni los estudios anteriores, tanto de empresas independientes como el famoso informe Kawasaki, como los planes que hasta ese momento habían elaborado las mismas empresas.

Solamente se hace caso de las peticiones de Altos Hornos de Vizcaya y se abandona la instalación de una nueva Acería, cambiándose por la remodelación de la vieja (con la gravísima limitación a convertidores de 100 Tm., que actualmente se pueden considerar totalmente insuficientes con el tamaño medio de convertidor que existe en la propia Comunidad, superior a las 200 Tm.), y se elimina la inversión de un nuevo TBC para que AHV pueda remodelar su tren de 1964.

Objetivos del Ministerio de Industria

Dicho plan industrial, realizado por el Ministerio de Industria, tiene solamente cuatro objetivos:

1. Cierre de la cabecera de Sagunto al coste que sea. Parece un compromiso a fecha cierta (1 de octubre) contraído con el Mercado Común (reducción del primer millón de toneladas de capacidad), y por ello se llegaron a tergiversar las cifras de producción de Ensidesa diciendo que a partir de 1984 produciría 4,6 millones de Tm., cuando la realidad es que en 1983 produjo 3,8 millones y en este año alcanzará a duras penas los 4,1 millones de Tm.; se manipularon las cifras de demanda ocultando que, aunque es verdad que el consumo de acero en el país está estancado, el acero laminado en bobina ancha tiene cada vez mayor demanda, habiéndose reducido los perfiles, material de vía, chapa gruesa, etc.

El resultado ha sido que, a pesar de haber dicho a bombo y platillo que el acero saguntino era caro y sobraba, gracias a que la factoría ha seguido funcionando con dos hornos altos hasta abril y con uno hasta octubre, el déficit de acero que tiene Altos Hornos de Vizcaya sólo ha sido de 125.000 toneladas (cinco meses de funcionamiento de Sagunto), además de que se le ha concedido una licencia de importación de 40.000 Tm. este verano.

Además, el coste total del cierre de la cabecera, que no ha sido muy claramente explicitado, pero se acerca a los 60.000 millones de pesetas y contrasta con la inversión de 16.000 millones que los trabajadores y técnicos de Sagunto pedían para rentabilizar dicha cabecera. Estos 60.000 millones se van a enchufar a los Presupuestos del Estado, y así se va a dejar una Altos Hornos del Mediterráneo-Laminación en Frío totalmente saneada y lista para ser vendida a un socio extranjero, francés a ser posible.

2. Nuevo saneamiento financiero y realización de inversiones en Altos Hornos de Vizcaya. Dichas inversiones, remodelación de la Acería y del Tren de Bandas en Caliente, van a suponer 68.000 millones de pesetas, sin contar la reconstrucción de un horno alto, cifradas en otros 5.000 millones de pesetas.

Teniendo en cuenta que AHV está prácticamente descapitalizada y con un aval de 50.000 millones de pesetas del INI, resulta claro que sólo los fondos estatales (vía Banco de Crédito Industrial, probablemente) pueden recapitalizar y sanear la empresa. Sin embargo, mientras con UCD se consiguió que la Banca privada, como accionista y acreedora de Altos Hornos de Vizcaya, se mojara algo, con el actual Gobierno ni se habla de estos temas, y parece que sin nacionalizar ni controlar se van a invertir un buen porrón de millones.

3. Prefiguración de Ensidesa como la única gran integral española del futuro, si hay fondos para ello. Se permite que realice una nueva Acería de 2,7 millones, ampliable a 5 millones en un futuro, lo que sumado a la Acería de Veriña (de aproximadamente 2/2,5 millones de Tm.) haría que Ensidesa se pudiera poner por encima de los 7 millones de toneladas.

El problema que tiene Ensidesa es que no puede, ni de lejos, acometer unas inversiones básicas superiores a los 100.000 millones de pesetas, a las que hay que sumar otros 90.000 millones para las de reposición y complementarias, con la cifra de pérdidas anuales en torno a los 30.000 millones de pesetas/año y con la deficiente estructura financiera de esta empresa.

Es decir, que, o bien se acomete un ambicioso plan de saneamiento financiero que supondría, al menos, una aportación del orden de 50.000 millones de pesetas/año durante ocho o diez años, o es inviable cualquier gran inversión del orden de la que solicitan la empresa y los sindicatos de la región. Ante las serias dudas de la que la nueva Acería llegue alguna vez a completarse, el INI y la Administración sólo dan buenas palabras e incluso cambian de ideas y de planes periódicamente, y lo que para un vicepresidente del INI era inviable, para la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas es totalmente necesario, aunque en una revista económica Eduardo Santos, actual director general, ha dicho que si no se acomete una reestructuración financiera en profundidad, el Mercado Común nos va obligar a cerrar una de las siderurgias integrales, en lo que parece una clara alusión a Ensidesa.

El INI, por el contrario, ha estado posponiendo la cuestión de las inversiones en la empresa asturiana, y de hecho se lleva provocado un retraso de casi tres años según los planes iniciales de la empresa, que contemplaba el arranque de la nueva Acería a mediados de 1987 y parece probable que se atrase hasta finales de 1988. Ultimamente, sin embargo, quizá debido a las próximas elecciones sindicales a realizarse en Avilés a primeros de noviembre, se han contratado, a un coste que parece excesivo (12.000 millones de pesetas), las obras de acondicionamiento de terrenos para la nueva Acería, pero dudamos que el resto del proyecto e incluso la ingeniería básica estén completamente definidos y que Ensidesa siga haciendo el tradicional tejer y destejer a que los gestores de dicha empresa nos tiene acostumbrados. Curiosamente, Ensidesa planea cerrar una moderna Acería con convertidores de 100 Tm. igual que la que quiere hacer Altos Hornos de Vizcaya.

4. Renuncia a la instalación de un nuevo Tren de Bandas en Caliente, con lo que nuestra competitividad frente al Mercado Común va a estar fuertemente cuestionada.

En resumen, la actual estrategia del PSOE con respecto a la reconversión siderúrgica es la siguiente:

— Supeditación de nuestros intereses a la entrada

en el Mercado Común. España, que podía ser competidora en siderurgia, se va a convertir en mero comprador de productos siderúrgicos europeos. Si a esto se añade la posible venta del tren en frío de Sagunto a una firma comunitaria (la mejor colocada sería Solmer), el futuro español estaría visto para sentencia.

— Potenciación de la empresa privada a corto plazo. Altos Hornos de Vizcaya es la única que está realizando las inversiones previstas por el Consejo de Ministros y por lo tanto está en condiciones de que, incluso antes de la entrada en el Mercado Común, pueda obtener beneficios a corto y medio plazo. Altos Hornos de Vizcaya, al no acometer una Acería nueva del tamaño actual en Europa, está diciendo que su plan de viabilidad es para una década, tiempo suficiente para que la Banca privada pueda recuperar sus créditos.

— Rompimiento de los Acuerdos de 1981 entre Administración, empresas y sindicatos, a pesar de que eran válidos hasta 1985. Así, por ejemplo, las jubilaciones anticipadas en 1984 han sido no según lo acordado anteriormente, sino vía despido con expediente de regulación de empleo. El cierre de la cabecera de Sagunto y la no realización de las

inversiones básicas previstas en dichos acuerdos (acuerdos que sólo se han cumplido en lo referente a reducción de plantillas y salarios) provocaron la antinatural defunción de ellos, y actualmente el Gobierno ha conseguido la ruptura del sector y que cada empresa actúe por su cuenta y con sus planes. De hecho ha comenzado una guerra comercial entre Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya, que ha provocado importantes tensiones entre ambas.

Por último, la imagen que el Gobierno PSOE ha tratado y trata de crear ante la opinión pública es la de la necesidad imperiosa de sanear los sectores en reconversión; pero no hablan de los métodos y fines. Con respecto a los fines, parece claro que es una reducción de capacidad sin contrapartidas, y con respecto a los métodos, ya se están viendo las negociaciones con los sindicatos (salvo con su afín UGT): son del más puro lenguaje impositivo, se da un documento para decir amén y se pone una fecha, después de la cual sale el correspondiente Decreto para corroborar la postura oficial.



46

LA RENOVACION DE NUESTRO SISTEMA CIENTIFICO-TECNICO, OTRA OCASION PERDIDA

Adolfo Hermida



A necesidad de potenciar la política de innovación y desarrollo basándose en una elevación notable de las tareas de investigación, ha sido una de las propuestas clásicas de la izquierda española. Ello suponía no sólo elevar el nivel de los recursos asignados y mejorar la coordinación de los pocos medios existentes, sino, fundamentalmente, la creación de un nuevo clima más favorable a la cultura científica que

tanto la ideología como el modelo de desarrollo adoptado tras la guerra civil se habían encargado de impedir.

Algunos datos

Las ya tópicas cifras sobre la pobreza de los recursos dedicados a investigación y desarrollo quedan recogidas en las tablas siguientes:

Países	Pagos por compra tecnología/PIB (%)	Gastos en I + D/PIB (%)
Francia	1,06	1,78
Inglaterra	1,77	2,05
Alemania	1,55	2,07
Japón	1,98	1,86
Estados Unidos	0,14	2,49
España	3,68	0,30

PROPORCION DE PATENTES NACIONALES Y EXTRANJERAS EN LOS PRINCIPALES PAISES INDUSTRIALIZADOS

(Porcentajes)		
	Patentes de origen nacional	Patentes de origen extranjero
Estados Unidos	68	32
Inglaterra	40	60
Francia	31	69
Alemania	50	50
Italia	23	77
Japón	87	13
España	21	79

Al comparar la situación española con la de los países industrializados con los que hemos de competir, se observa nuestra fortísima dependencia tecnológica del exterior, unida a nuestro escaso esfuerzo en investigación y desarrollo (I + D). No sólo es escaso el nivel de recursos, sino también el de personal dedicado a estas actividades.

PERSONAL DEDICADO A I+D	
País	(% sobre población activa)
EE. UU.	13
RFA	12
Japón	10,5
Francia	10
Italia	4,5
España	2,5

Todo ello se ha traducido, además, en un incremento exponencial del déficit de nuestra balanza de pagos, como puede verse en los siguientes datos:

Millones de pesetas			
	Pagos	Ingresos	Déficit
1970	9.364	1.119	8.245
1975	17.299	2.887	14.412
1980	34.800	5.600	22.200
1984	—	—	100.000

(Estimación MINER.)

La dependencia tecnológica del exterior se agrava por el hecho de estar concentrada en un número muy reducido de países, que son nuestros principales suministradores de tecnología. Así, podemos ver que en los últimos cinco años los compromisos

de pagos contraídos proceden de los siguientes países:

	%
RFA	33
EE. UU.	27
Francia	14
Gran Bretaña	7
Italia	6

Ante este panorama, no es extraño que el programa del PSOE recogiese como uno de sus ejes fundamentales de actuación la propuesta: "I + D, motor del cambio". Este objetivo parecía suficientemente claro en unos momentos en que la crisis económica hacía patente ya que sólo un amplio esfuerzo en este terreno permitiría a nuestro país remontar su situación de dependencia y asegurar una presencia activa en los mercados internacionales, pasada ya la época en que nuestras exportaciones habían sido impulsadas por el bajo coste relativo de la mano de obra.

Esta tarea suponía un enfoque totalmente diferente al desarrollado hasta ese momento por el franquismo y por los diferentes Gobiernos de UCD y que, para muchos observadores, planteaba hablar no de la ausencia de una política científica, sino una opción deliberada por un modelo de dependencia tecnológica ligada a la dependencia económica con que se afrontó nuestro desarrollo.

La propia OCDE, en su informe *La política científica de los años 80*, recogía como un factor fundamental en el diseño de cualquier política de I + D la necesidad de la más amplia concertación social como único elemento capaz de integrar la enorme influencia que la tecnología había ido introduciendo en todos los órdenes de la actividad social y económica: políticas de reindustrialización, emergencia de las denominadas tecnologías sociales, cambios en la estructura ocupacional de la mano de obra, ocupación del ocio, etc. Se destacaba el papel que los consejos económicos y sociales, en sus diferentes modalidades, habían jugado a la hora de configurar la política de I + D de todos los países miembros de la organización.

Situación de partida

La necesidad de concertación social era, si cabe, mucho más necesaria en nuestro país, puesto que los niveles de paro se situaban en una cifra que duplicaba la media de los países de la OCDE, los cuales, además, habían absorbido ya, a consecuencia de su mayor nivel tecnológico, gran parte del incremento del paro que conlleva la introducción de nuevas tecnologías. El programa electoral del PSOE recogía estos planteamientos y anunciaba la creación de un organismo al más alto nivel, encargado de la formulación de la política de prioridades en I + D y en el que iban a estar representados los interlocutores sociales (sindicatos, empresarios, asociaciones de consumidores, entes autonómicos, etcétera).

El PSOE se proponía igualmente la elaboración de una Ley de Ciencia y Tecnología que asegurase, entre otros, los siguientes objetivos:

— Coordinación entre los diferentes organismos públicos que ejecutan tareas relacionadas con I + D.

— Programación de las actividades prioritarias de investigación, basada en las necesidades sociales de nuestro país.

— Optimización de los recursos asignados mediante un mayor control de los resultados.

Estas tareas se encuadraban en el objetivo de duplicar las cifras de recursos económicos y humanos dedicados a I + D, así como a asegurar un trasvase eficaz de los logros de la investigación a nuestros productos industriales y a la mejora de la calidad de vida de los españoles (sanidad, enseñanza, cultura, vivienda, etc.).

La situación de partida era la existencia de una multiplicidad de organismos de coordinación, una confusión entre los diferentes centros destinados a la programación, evaluación, financiación y gestión de las actividades de I + D, que se recogen en la tabla adjunta:

ORGANOS E INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL SISTEMA DE I + D

Carácter	Denominación
ORGANOS DE PLANIFICACION GENERAL DE LA INVESTIGACION	<ul style="list-style-type: none"> ● Comisión Delegada del Gobierno de Política Científica. ● Comisión asesora de Investigación Científica y Técnica. ● Dirección General de Política Científica.
ORGANOS PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO GENERAL	<ul style="list-style-type: none"> ● Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica. ● Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
ORGANOS DE COOPERACION INTERNACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> ● Dirección General de Cooperación Técnica Internacional. ● Secretaría General Técnica de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. ● Dirección General de Política Científica. ● Instituto de Cooperación Iberoamericana.
INSTITUCIONES DE EJECUCION DE LA INVESTIGACION	<p>1) DE CARACTER GENERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ● Departamentos Universitarios. <p>2) DE CARACTER SECTORIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. ● Centro de Estudios Constitucionales. ● Junta de Energía Nuclear. ● Instituto Geológico y Minero de España. ● Centro de Estudios de la Energía. ● Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. ● Instituto Español de Oceanografía. ● Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales. ● Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. ● Instituto de Tecnología de Obras Públicas y Edificación. ● Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones. ● Instituto Nacional de la Salud.
SECTOR EMPRESAS	<p>1) PARTICIPACION ESTATAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Instituto Nacional de Industria. <p>2) SUBSECTOR PRIVADO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Empresas. ● Asociaciones. ● Fundaciones.
INVESTIGACION MILITAR	<ul style="list-style-type: none"> ● Dirección General de Armamento y Material. ● División de Investigación y Desarrollo. ● División Técnica de Industrias Aeroespaciales.

La coordinación de este conjunto de organismos exigía la creación de un organismo central, con categoría de Ministerio o adscrito a la Presidencia del Gobierno, que asegurase la capacidad ejecutiva suficiente para lograr la integración de las labores de los diferentes organismos en una política común. La Ley de Ciencia y Tecnología debería eliminar las barreras que han impedido hasta ahora la coordinación de las actividades de más de treinta organismos públicos diferentes de investigación, adscritos hasta ahora a media docena de Ministerios (Educación y Ciencia, Industria, Sanidad, Defensa, Agricultura, Hacienda y Comercio). El potencial de recursos humanos y técnicos que poseen estas instituciones (8.000 investigadores y técnicos cualificados, una red de centros que cubren toda la temática de la investigación), unidos a los que proporcionan los departamentos universitarios (más de 20.000 profesores dedicados, al menos parcialmente, a la investigación), serían los instrumentos básicos de ejecución de unos programas prioritarios de investigación, tanto por su carácter estratégico como por la necesidad de valorizar los recursos naturales de los que dispone el país. Estos programas estarían centrados en temas como industria agroalimentaria, energía, comunicaciones, biotecnología, microelectrónica, etc.

La política de programación debería ir precedida de un análisis en profundidad de nuestra potencialidad y dependencia tecnológica en cada una de las ramas industriales, de manera que se pudiesen detectar los cuellos de botella que condicionan nuestro desarrollo tecnológico. En base a esta información debería diseñarse la política de reconversión y de reindustrialización que el país necesita con urgencia.

En tal proceso debe considerarse el ritmo de introducción de nuevas tecnologías, a fin de limitar los efectos nocivos que tecnologías no adecuadas a nuestro entramado industrial podrían tener sobre las cifras de paro y sobre los niveles de destrucción de sectores industriales clásicos; estos efectos nocivos son particularmente graves si se considera que, excepto en aquellos países de economía ampliamente diversificada y de elevado nivel tecnológico, la introducción de nuevas tecnologías se ha traducido siempre en un incremento espectacular de las cifras de paro. El caso de la informática y de la robótica es ya clásico, puesto que sólo aquellos países que disponen de una adecuada tecnología a todos los niveles son capaces de compensar los incrementos de productividad originados y el consecuente descenso de la mano de obra necesaria en cada sector, con los nuevos puestos de trabajo que generan las industrias fabricantes de componentes electrónicos y ordenadores, así como el sector de servicios.

Una vez elaborado el modelo de desarrollo tecnológico adecuado a nuestro país y diseñados los programas prioritarios, el programa del PSOE planteaba como crucial la integración entre el sector público de investigación y el sector público de la producción (INI, Patrimonio Nacional). Esto permitiría asegurar un desarrollo real de las innovaciones introducidas por la investigación y su actuación general, al estar el sector público más al abrigo de la dependencia tecnológica que otros sectores. Si se considera, además, que el potencial de investigación del sector privado se sitúa en unos niveles muy reducidos, como se recoge en la tabla siguiente, y en el hecho de que no existen más de cincuenta empresas que dispongan de laboratorios de investigación propiamente dichos, es evidente que el

sector público tenía que ser el protagonista fundamental del proceso de innovación en este país.

RELACION ENTRE LOS GASTOS EN I + D EN EL SECTOR EMPRESARIAL DE VARIOS PAISES Y SUS PAGOS POR TECNOLOGIA EXTRANJERA

Países	Gastos empresariales en I + D. Pagos tecnología exterior
Estados Unidos	200,0
Suecia	11,4
Canadá	7,7
Alemania	5,5
Francia	5,0
Japón	4,3
Noruega	2,8
Bélgica	1,7
Italia	1,3
España	0,5

Las propuestas de la izquierda planteaban, igualmente, la necesidad de fijar un presupuesto único plurianual que reflejase todos los gastos originados por las actividades de I + D, así como incrementar el número del personal investigador hasta duplicar sus efectivos en el período 1982-86. Lo anterior, unido a la elaboración de un Estatuto del Personal de Investigación del sector público que asegurase la movilidad y la carrera profesional del personal de los diferentes organismos públicos, dotaría a los equipos de investigación de la masa crítica y de la necesaria flexibilidad para hacer frente a la programación.

Dos años después

A dos años del triunfo socialista, puede decirse que no sólo no se están cubriendo los objetivos previstos, sino que se ha dado un giro importante en los planteamientos. De una actitud favorable a la planificación democrática y a la actuación preferente del sector público se ha pasado a unos planteamientos ultraliberales, basados en una preponderancia del sector privado frente al sector público, en concordancia con la política económica adoptada por el Gobierno socialista.

En efecto, no sólo no se han puesto en marcha las reformas legislativas antes defendidas, sino que las dotaciones presupuestarias y el incremento del personal investigador no siguen el ritmo previsto. La Comisión interministerial que inició, a comienzos de 1983, los trabajos para la redacción de la Ley de Ciencia y Tecnología ha sido incapaz de efectuar su trabajo, y en estos momentos la Ley parece relegada en el calendario de medidas legislativas. Una vez más la dinámica propia de la Administración, basada en los enfrentamientos por ocupar mayores parcelas de poder entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el de Industria, ha hecho fracasar este proyecto, imprescindible para alcanzar la funcionalidad necesaria de nuestro sistema científico-técnico. Las durísimas críticas que el PSOE y el PCE realizaron contra UCD por su intento de legislar por separado las labores de investigación y las de innovación tecnológica pueden aplicarse ahora, con mayor énfasis, al PSOE. Si esta división es particu-

larmente grave en cualquier situación, lo es más en unos momentos en que la necesaria reindustrialización del país exige un aporte científico-tecnológico de la mayor envergadura.

Con una Ley paralizada, la actuación en ciencia y tecnología se está limitando a una política de parcheo que no puede remover ninguno de los obstáculos tradicionales. Cada organismo público de investigación vuelve a desarrollar la política científica que le parece más adecuada; así, por ejemplo, el CSIC, que con 5.000 investigadores y un presupuesto superior a los 15.000 millones de pesetas es el mayor organismo público de investigación y del que han surgido los mayores proyectos renovadores en el área científica de nuestro país, va a afrontar su programación para el próximo cuatrienio sin que el Gobierno haya sido capaz de presentarle unos criterios mínimos que orientasen su programación.

El presupuesto de investigación para 1985 y 1986 sigue sin recoger los incrementos necesarios para duplicar los recursos en I + D. Las cifras asignadas para estos dos años (61.000 millones de pesetas para 1985 y 63.000 en 1986) suponen reducir del 0,8 al 0,7 por 100 el porcentaje de participación de los gastos de investigación y desarrollo en el presupuesto total.

Ello se traduce en un estancamiento en el ritmo de crecimiento del tanto por ciento del PIB destinado al I + D, que ha evolucionado como sigue:

	1970	1974	1979	1984
% PIB	0,21	0,30	0,38	0,44

Y de seguir así, va a impedir alcanzar el objetivo de duplicar esta magnitud para acercarla al valor del 1 por 100, base que se considera mínima para cualquier país que persiga situarse entre los países industrializados.

La Ley de Medidas Urgentes de la Función Pública acaba con las expectativas del Estatuto Personal de Investigación Pública, al consagrar la división del personal entre los diferentes organismos públicos de investigación.

El Consejo Económico y Social no ha sido constituido y tampoco en el controvertido AES se recogen los mecanismos de participación de los trabajadores y consumidores en lo referente a la introducción de nuevas tecnologías.

La CEOE interviene

El balance más claro del cambio de orientación que se ha producido en el PSOE lo tenemos al observar cómo los planteamientos de la CEOE han sido progresivamente asumidos por el Gobierno socialista. La patronal, que no lanzó su primer documento sobre la situación tecnológica de la empresa española hasta 1980, ha iniciado a lo largo del último año una intensa campaña de concienciación del empresariado sobre las actividades de I + D, consciente de que la dependencia tecnológica constituye el tendón de Aquiles de cualquier futuro industrial para nuestro país. Esta toma de conciencia, aunque tardía, podría considerarse positiva si no fuera porque intenta cambiar los esquemas de actuación previstos en el programa del PSOE.

Así, en el Forum sobre Innovación y Empresa

celebrado en noviembre de 1983 en Madrid, con una asistencia multitudinaria de empresarios y representantes de las patronales europeas, se concretaron las tesis que suponían la rentabilización del sector público de investigación por el sector privado. De esta forma podía escucharse a Ferrer Salat pronunciar frases como la de que *el empresario español va a desarrollar la verdadera revolución, la revolución científico-técnica*, que cuadraba perfectamente con las declaraciones de Felipe González en el mismo acto, afirmando que *el empresariado no debe esperarlo todo del "papá Estado" que, a lo sumo, puede ayudar a eliminar los riesgos consustanciales a cualquier tarea de innovación tecnológica*.

Desgraciadamente, los hechos no parecen confirmar este supuesto dinamismo del sector empresarial. En los últimos años la participación del sector privado en la financiación de tareas de I + D ha disminuido hasta sólo un 20 por 100 del total de los gastos, que alcanzaron en 1984 la cifra de 120.000 millones de pesetas. Se redujo así su cuota de participación desde el 50 por 100 en 1974, que lo situaba en la media de los países de la OCDE. Todo a pesar de los estímulos fiscales directos y las subvenciones encubiertas que suponen los programas del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial y la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (más de 10.000 millones de pesetas para 1984). El número de peticiones de los planes concertados de investigación financiados al 50 por 100 por el Gobierno se ha reducido de forma significativa, pasando de una media de 60 en el trienio 1980-82 a 35 para 1983.

A pesar de la evidencia de estos hechos, el Gobierno insiste de forma suicida en sus tesis liberales, y cuando se le plantea, por ejemplo, la necesidad de un mayor control ejecutivo de la política de compra de tecnología desarrollada por las empresas, para restringir o, al menos, orientar nuestra dependencia tecnológica, responde, al unísono con la CEOE, que ésa es una política estatalizadora. Pero estos planteamientos gubernamentales parten del supuesto de considerar que la actividad de I + D es fruto de una acción voluntaria por parte del empresariado, cuando lo cierto es que el empresario, desde su lógica opción, sólo investiga cuando los gastos y riesgos le suponen un incremento de los beneficios. En estas condiciones, ¿por qué se va a investigar en unos momentos en que la disminución de los costes de la mano de obra o la facilidad del despido les permiten obtener sus beneficios vía costes laborales o simplemente mediante la compra de bienes de equipo o tecnología en el exterior?

En esa contradicción radica el problema de la investigación en España. El respeto a la libre iniciativa empresarial fue el que determinó que en la España de la autarquía no se investigase; en efecto, ¿por qué iba a correr riesgos una clase empresarial que tenía a su disposición un mercado totalmente desprovisto de mercancías y sin competencia? ¿Por qué, con la política liberalizadora de 1956, se iba a investigar, si el acceso a los mercados internacionales de tecnología le permitía disponer de tecnología barata de segunda mano, para atender la demanda creciente del consumismo español? Lo que se olvida es que esa cadena de decisiones "lógicas", de respeto a la libre iniciativa empresarial, ha conducido a una situación de dependencia tecnológica global de nuestro país que afecta a los intereses del conjunto de la sociedad española. Si la unión suicida del beneficio a corto plazo ha ca-

racterizado el comportamiento del empresariado español, ¿puede confiarse la responsabilidad de determinar nuestro futuro en el campo de I + D? Evidentemente, no; la Historia ha demostrado tajantemente el error de sus apreciaciones.

Los acontecimientos que se vienen sucediendo vienen demostrando que el Gobierno sigue insistiendo en esa línea de confianza ciega en el empresariado y de asunción de sus propuestas.

Así, la Ley de Reforma Universitaria facilita la contratación directa de investigación entre el profesorado universitario y las empresas privadas, propiciando el que los departamentos universitarios se conviertan en empresas de consulting, cuyo beneficio y orientación dependen solamente de los intereses individuales del profesorado universitario.

Igualmente, la patronal ha pasado a ocupar un lugar relevante en los organismos de planificación y de gestión de la investigación, mientras se rechaza la participación de las centrales sindicales.

Este mecanismo de primacía de los intereses privados acabará por configurar dos prioridades en materia de investigación: pasará de la promoción de la investigación en terrenos que suponen una mejora en las condiciones de vida de la sociedad española, a líneas de investigación que priman los intereses a corto plazo de las empresas o, lo que es peor, que rentabilizan para las empresas multinacionales los recursos públicos de investigación.

En este cambio de prioridades hay un elemento grave a destacar, y es la progresiva influencia de los gastos de I + D en Defensa, en deterioro de toda otra serie de prioridades. Este fenómeno se ha incrementado de forma espectacular en casi todos los países de la OCDE, siguiendo las orientaciones de la política armamentista impulsada por el Gobierno Reagan.

En la misma línea, se ha argumentado por USA y el Gobierno español que los gastos de Defensa suponen en definitiva la creación de puestos de trabajo. Al margen de las reservas de todo tipo que se oponen a este panegírico de la carrera de armamentos, la realidad, según lo muestran recientes informes tanto de los sindicatos americanos como de los ingleses, es muy diferente. La elevada tecnología que se introduce se hace a expensas precisamente de la mano de obra, y así, en los últimos diez años la industria de guerra británica ha visto descender sus efectivos de 250.000 a 150.000 trabajadores, precisamente en años en que los gastos de Defensa se incrementan.

Como se ha intentado exponer a lo largo de estas líneas, en el campo crucial de la investigación y el desarrollo tecnológico se está dando una de las batallas por cambiar los planteamientos que la izquierda y las centrales sindicales habían elaborado en el transcurso de nuestras luchas y experiencias. Su carácter estratégico para el conjunto de la actividad del país y de los trabajadores debe animarnos a proseguir en la defensa de unos criterios de interés colectivo en los que en buena medida se juega el futuro de nuestro país como miembro de la sociedad industrial avanzada.





C ONTROVERSA SOBRE LAS CONDICIONES DE LA REVOLUCION SOCIALISTA (II)

Adam Schaff/Traducción: Andrés Koszutski

H Nosotros vivimos más de un siglo después de Marx y Engels y no pocas batallas se libraron desde entonces en torno al problema de la revolución socialista. Tenemos incluso a un nuevo clásico del marxismo, un innovador de la teoría y la práctica marxistas, que dio comienzo al marxismo-leninismo: tenemos a Lenin. ¿Desdénó la tesis sobre las condiciones necesarias para la revolución socialista no sólo porque no conocía *La ideología alemana* sino, sobre todo, porque la práctica demostraba el desacierto de esa tesis? ¿No fue él quien llevó a

cabo victoriosamente la revolución socialista en una Rusia inmadura para el socialismo, demostrando con ello, en la práctica, que la moderación revolucionaria que aquí proclamamos no vale un comino? ¿No fue él quien llamó renegado a Kautsky —al que hasta entonces había considerado maestro del marxismo— cuando éste se opuso con Marx en la mano (el mismo Marx del citado *Prólogo a El Capital*) a la revolución socialista en un país “inmaduro”? ¿No lo apoyó en esto Rosa Luxemburgo —“el águila de la revolución”, como la llamó Lenin después de su muerte, acerada crítica de los métodos de la revolución socialista en su folleto *La revolución rusa*— que sostenía —oponiéndose a Kautsky— que el revolucionario debe arriesgar y por ello apoyaba al partido de Lenin y Trotsky? (En esta etapa de la revolución, nadie había oído hablar aún en Occidente de Stalin.)

DE la Revolución de Octubre aún hablaremos. Antes tenemos la aleccionadora historia de la revolución de 1905, que demuestra que Lenin era fiel discípulo de Marx y Engels y mantenía férreamente la opinión de éstos de que existen unas condiciones objetivas de la revolución socialista que deben ser respetadas: un ejemplo clásico de “moderación” revolu-

cionaria en los lemas de la revolución, unida a una lucha sin cuartel contra todos los intentos de embotar el filo del combate revolucionario contra los zares fue, precisamente, la actitud de Lenin en la revolución de 1905, a la cual hago siempre referencia en la crítica a los revolucionarios entusiastas que acometen *contra* el marxismo con Marx y Lenin en los labios.

¿En qué consistía esta actitud *marxista* de Lenin durante los acontecimientos de 1905? En que Lenin no lanzó entonces el lema de la revolución *socialista*, lema que combatió por pernicioso en la lucha revolucionaria del momento, cuando lo lanzaron los socialrevolucionarios; en que queriendo mantener la alianza con la masa decisiva del pueblo, los campesinos, propuso el lema *dictadura revolucionaria y democrática de los obreros y campesinos*, en el marco del régimen *burgués*. ¿A qué se debía esta “moderación”? El imperio zarista, *gigante con pies de barro*, se encontraba tambaleante a causa de la derrota que le había infligido el Japón y el creciente descontento de las masas obrero-campesinas. Hay que tener presente que Rusia (si bien muy atrasada con respecto a Occidente) poseía grandes centros industriales en la misma Rusia, en Ucrania, Polonia, Letonia, etc.; poseía grandes fuerzas de proletarios revolucionarios organizados; la agitaban las luchas de independencia precisamente en sus regiones más desarrolladas (por ejemplo, Polonia). Sin embargo, Lenin se opuso al lema de revolución *socialista*. Lo hizo porque era marxista y, aunque no conocía *La*

ideología alemana, pensaba en esos términos. Lenin escribió en 1905:

La socialdemocracia, como portavoz consciente de los anhelos del movimiento obrero, se plantea como objetivo la total liberación de las masas trabajadoras de toda opresión y explotación. El logro de este objetivo, la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción y la creación de una sociedad socialista, exigen un elevado nivel de desarrollo de las fuerzas productoras del capitalismo y una gran organización de la clase obrera. Sin libertad política es impensable un pleno desarrollo de las fuerzas productivas en la moderna sociedad burguesa, ni una amplia, pública y libre lucha de clases, ni una conciencia política, ni la educación y la cohesión de las masas proletarias. He aquí por qué el proletariado consciente siempre se plantea como objetivo una lucha decidida por la total libertad política, por la revolución democrática.

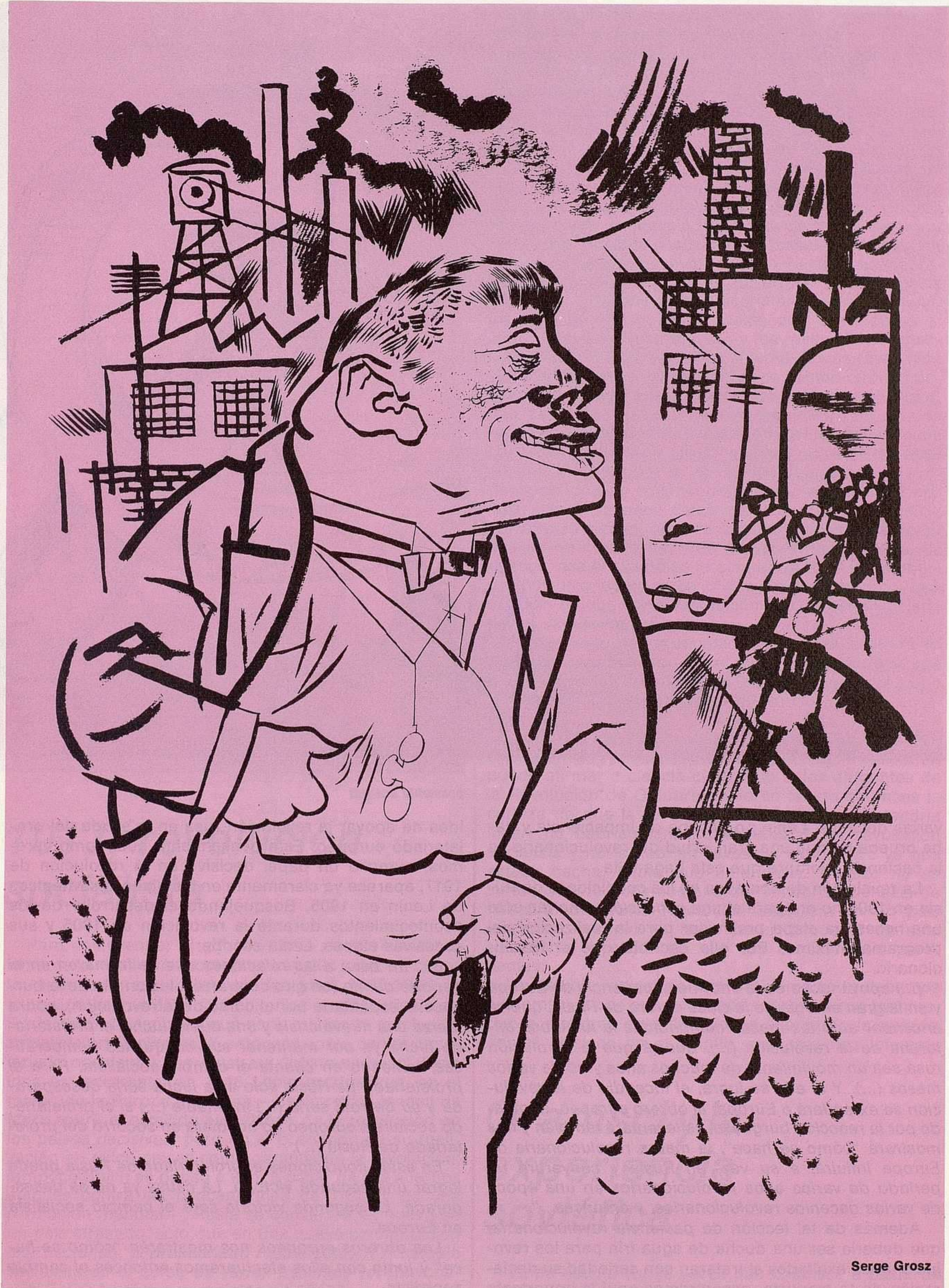
Es fácil percibir que Lenin, sin conocer *La ideología alemana*, repite las dos condiciones básicas de la revolución socialista mencionadas en esta obra. Lenin formula el lema de la revolución democrática, con el campesinado y la pequeña burguesía, a fin de poder preparar las condiciones para la ulterior revolución socialista. Lenin formula estas ideas con toda claridad y reprende a los “ultras” que no quieren entenderlas.

Si la socialdemocracia quisiera plantearse como objetivo un inmediato cambio socialista, sólo lograría ponerse en ridículo. Sin embargo, la socialdemocracia siempre combatió este género de ideas confusas y nebulosas de nuestros “socialistas revolucionarios”. Precisamente por ello siempre subrayó el carácter burgués de la revolución que espera a Rusia, por ello exigía una exacta delimitación entre el programa mínimo democrático y el programa máximo socialista.

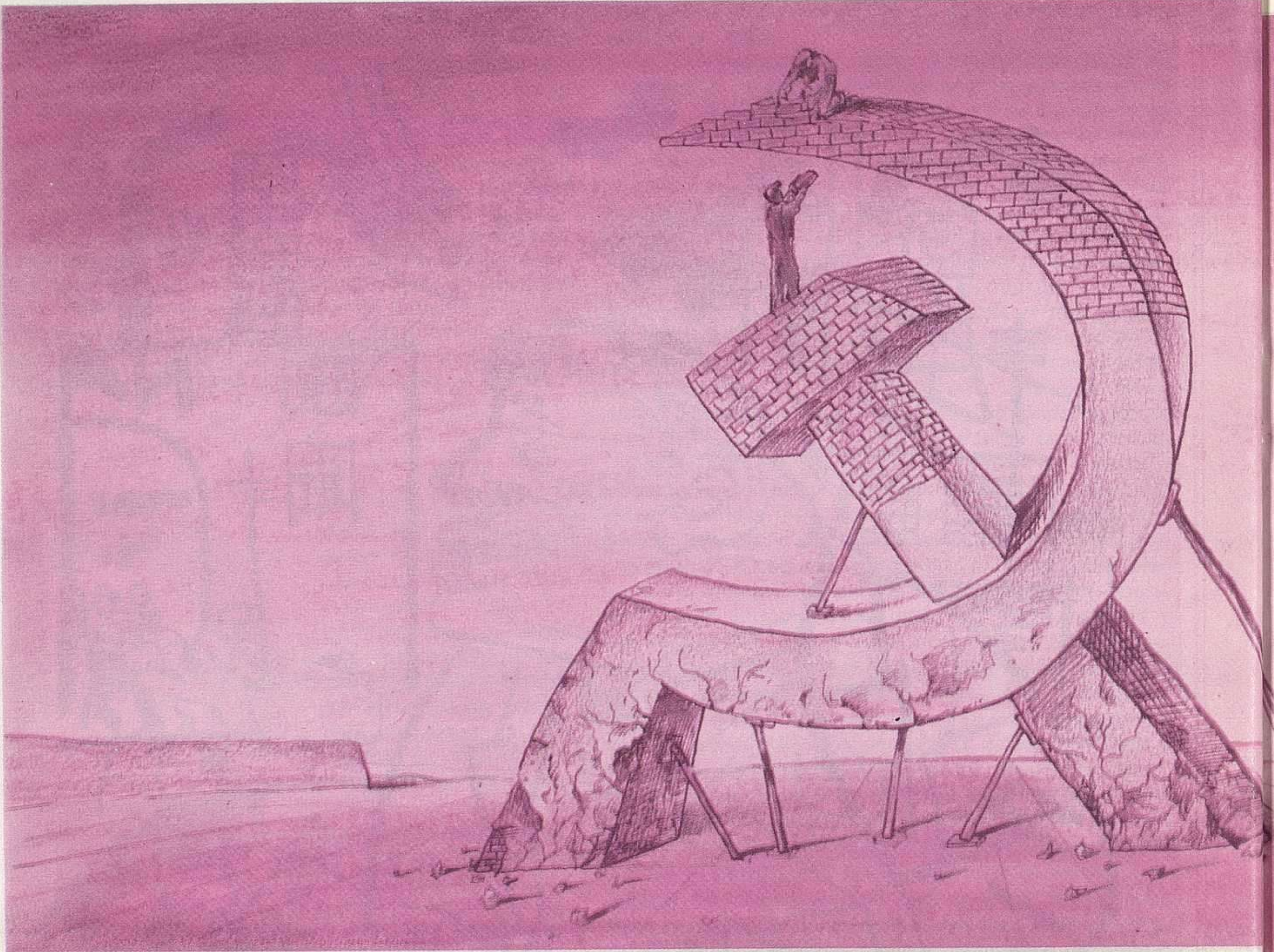
Sería de mucha utilidad que diversos “fanfarrones de la revolución”, como solía llamarlos Lenin, asimilaran el sentido de estas palabras y leyeran un poco a Lenin antes de llenarse la boca de “marxismo-leninismo”.

Repito: Rusia se encontraba entonces en muchos aspectos a un nivel mucho más elevado que distintos países que intentan hoy “quemar etapas” y construir el socialismo *contra* las recomendaciones del marxismo. El entusiasmo revolucionario y la voz estentórea de los propagandistas de esta actitud no pueden sustituir a la ciencia marxista y al simple sentido común. No es extraño que se llegue así a la ridiculización de la idea del socialismo, anunciada ya por Lenin, e incluso a catástrofes que se lamentan demasiado tarde. ¿No es más acertado calmar a los enardecidos y enseñarles *temperancia* revolucionaria, en lugar de animarlos a seguir por el mal camino? Fue Lenin precisamente quien enseñó que la revolución social, necesaria en algunas situaciones, puede adquirir distintas formas; que la revolución socialista no es la *única* forma de la revolución y que ésta es posible sólo cuando se dan ciertas condiciones bien determinadas.

Es evidente que Lenin, como marxista, no perdía de vista el objetivo final del movimiento obrero; es decir, el socialismo (programa máximo). Pero no vacilaba en postergar su realización cuando en un momento dado no se daban las condiciones para el mismo; se trataba de postergar la realización del programa máximo por



Serge Grosz



varias décadas. Lenin no pecaba de impaciencia y daba prueba de que una gran virtud del revolucionario es la paciencia, siempre que ésta haga falta.

La revolución democrática en las condiciones de Rusia en 1905 no era para él una *concesión*, sino tan sólo una necesaria etapa preliminar para la realización del programa máximo. Por ello escribía que el revolucionario

(...) apoyándose en la enorme experiencia de Europa y en la gran energía de la clase obrera de Rusia, querrá encender ante las masas confundidas la luminosa antorcha de la revolución (...), querrá que la revolución rusa sea un movimiento de muchos años y no de varios meses (...). Y si ello se logra, el incendio de la revolución se extenderá a Europa; el obrero europeo, agobiado por la reacción burguesa, se levantará también y nos mostrará "cómo se hace"; la marea revolucionaria de Europa influirá, a su vez, en Rusia y convertirá un período de varios años revolucionarios en una época de varios decenios revolucionarios, y entonces..."

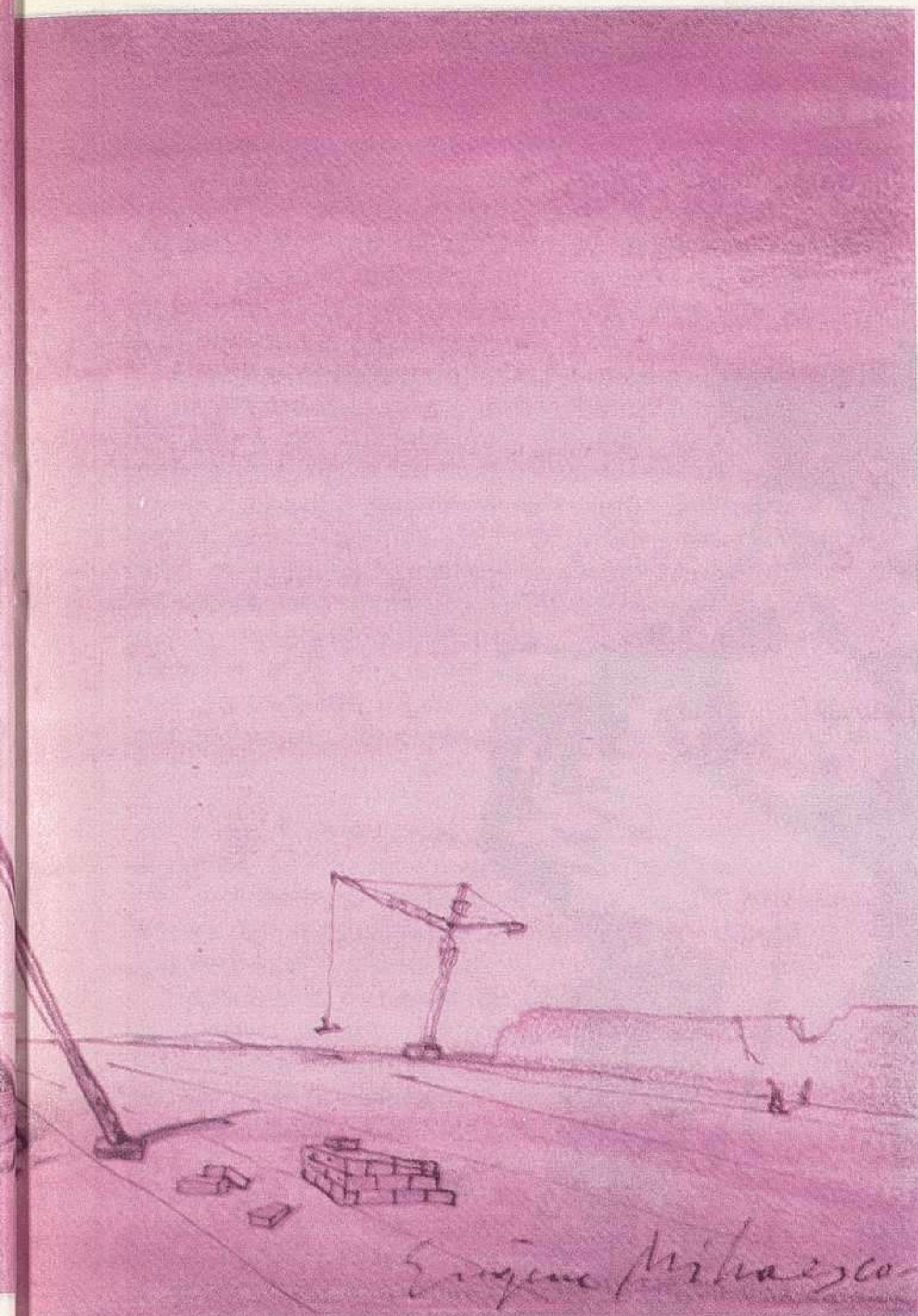
Además de tal lección de *paciencia revolucionaria*, que debería ser una ducha de agua fría para los revolucionarios exaltados si trataran con seriedad su declaración de fe marxista, encontramos aquí la importante

idea de apoyar la revolución rusa en la ayuda del proletariado europeo. Este pensamiento que, como veremos, cumplió un papel decisivo en la revolución de 1917, aparece ya claramente en los planes estratégicos de Lenin en 1905. Bosquejando el desarrollo de los acontecimientos durante la revolución de 1905 y sus sucesivas etapas, Lenin escribe:

6. *En base a las relaciones que se formaron en el período quinto (un giro contrarrevolucionario de la burguesía, espantada por el curso de la revolución), cobra fuerza una nueva crisis y una nueva lucha, el proletariado lucha ya por mantener sus conquistas democráticas, teniendo en cuenta el cambio socialista. Para el proletariado de Rusia solo esta lucha sería desesperada y su derrota sería (...) inevitable (...) si el proletariado socialista europeo no acudiera en socorro del proletariado de Rusia (...).*

En estas condiciones el proletariado de Rusia puede lograr una segunda victoria. La causa ya no es desesperada. La segunda victoria será el cambio socialista en Europa.

Los obreros europeos nos mostrarán "cómo se hace" y junto con ellos efectuaremos entonces el cambio socialista.



Eugene Mihaesco

1917, revolución socialista

Para comprender el giro de Lenin en 1917 hacia el lema de la revolución socialista, hay que tener en cuenta, ante todo, estas ideas de los años 1905-1906: la explosión *democrática* y la aniquilación del zarismo en Rusia serán la espoleta que hará estallar la revolución *socialista* en Occidente. Y entonces, junto con el proletariado occidental que mostrará "cómo se hace" (esta idea es recurrente: en 1918 Lenin escribe que, en el marco de la Europa socialista —Lenin revisó la idea de Marx sobre el estallido *simultáneo* de la revolución en los países *decisivos*, pero no el postulado de su realización en estos países como garantía de la revolución; tampoco Stalin se opuso a ello, a pesar de sus acerbos ataques contra las concepciones de Trotsky de una revolución mundial—, Rusia se convertirá de nuevo en un país atrasado, sólo que en una nueva configuración internacional), el proletariado ruso efectuará el cambio socialista en el curso de *varios decenios revolucionarios*, ¿revisó Lenin esta opinión en 1917?

De ninguna manera. La idea de la *espoleta rusa en la bomba revolucionaria de Occidente* sigue siendo una idea rectora, sobre todo ante la evaluación de que la situación general en Europa es revolucionaria, como lo demostraban los hechos.

No es éste el lugar para hacer una exposición detallada del desarrollo de la actitud de Lenin en 1917 con respecto a la revolución socialista en Rusia. Basta con recordar que Lenin y los bolcheviques no lanzan en 1917 el lema de la revolución socialista de manera inmediata y que este giro les fue en cierta manera *impuesto* por la reacción y la indecisión de los mencheviques. Durante cuatro largos meses (que eran entonces un período realmente *largo*), Lenin buscó febrilmente la posibilidad de un desarrollo pacífico de la revolución (una salida *más económica* desde el punto de vista social) en colaboración con otros partidos, sobre todo los mencheviques y los revolucionarios socialistas. No se oye entonces el lema de una revolución socialista. Cuando estos intentos se demostraron imposibles y se redoblaron las acciones contrarrevolucionarias, tiene lugar un cambio de frente. Pero no sin una fuerte oposición dentro del partido de los bolcheviques (Zinoviev, Kamenev y otros), quienes no están del todo convencidos de que la revolución socialista en Occidente acudirá en socorro del proletariado ruso; si eso falla, dicen, estamos condenados. Los partidarios de Lenin no lo niegan, pero consideran que en la situación que se ha creado hay que correr el riesgo (como ya dijimos, esa era también la actitud de Rosa Luxemburgo, por otro lado acerba crítica del bolchevismo, que también optaba por la revolución en Occidente iniciada por el *detonador* ruso).

El desarrollo de los acontecimientos fue distinto a lo previsto, pero incluso "a posteriori" hay que decir que la actitud de los bolcheviques fue entonces justa y que la decisión sobre la Revolución de Octubre fue acertada.

¿Modifica eso nuestra posición acerca de las condiciones de la revolución socialista? De ningún modo. Se puede afirmar a ciencia cierta que si los dirigentes de la Revolución de Octubre hubieran tenido entonces la certeza de que la revolución en Occidente no tendría lugar, no habrían lanzado el lema de la revolución socialista y no la habrían llevado a cabo. Pero ya que estaba hecha, había que defenderla. De ello no se infiere que no debemos analizar las consecuencias de haber efectuado la revolución socialista en un país *inmaduro* —Lenin se daba perfecta cuenta de esta situación— y sacar de ello las conclusiones pertinentes.

Un estudio radical de este problema se lo debemos a Gramsci, y con sus opiniones sobre el tema terminaremos nuestras consideraciones acerca de la opinión de los clásicos en el asunto que aquí nos interesa.

Gramsci y la experiencia soviética

Ya he escrito varias veces que Gramsci, a pesar de que se le menciona con frecuencia, sigue siendo un



pensador marxista insuficientemente conocido y apreciado, sobre todo en los países socialistas (existe seguramente la barrera del idioma, pero la causa principal es que sus opiniones son *incómodas*). Las ideas que aquí nos interesan están contenidas en sus *Cuadernos de prisión* y sería engorroso citarlas. Trataré, pues, de resumir las tesis de mayor interés para el caso. Recordemos que Gramsci conocía las experiencias soviéticas y, aunque por distintos motivos no lo dice, sus opiniones traslucen una clara crítica de por lo menos algunos de los síntomas.

El punto principal de las opiniones de Gramsci sobre el problema que nos interesa es su concepción de la dictadura del proletariado. En este sentido, Gramsci permanece fiel al postulado de Lenin de que sólo es marxista el que reconoce las opiniones de Marx, incluyendo la concepción de la dictadura del proletariado. Sólo que Gramsci entiende la dictadura del proletariado no como una dictadura administrativa y política sino como una hegemonía moral y política. No es difícil percibir un distanciamiento de la fórmula leninista de que se trata de un poder del proletariado sin ningún género de restricción legal. *Hegemonía* significaría tanto como papel dirigente, al cual la gente se somete de propia voluntad y de ninguna manera por compulsión y sin ningún coto jurídico, *hegemonía moral y política* significa, por lo tanto, acuerdo para el papel dirigente del proletariado en la realización de una política que deriva de la autoridad moral que se ha ganado la ideología del proletariado.

Es decisivo el hecho de que se trata de un acuerdo voluntario, de un acuerdo derivado del *consenso* social. Y aquí llegamos al núcleo de las ideas de Gramsci en torno al problema de las condiciones de la revolución socialista. A las condiciones objetivas formuladas por Marx, Gramsci agrega una importantísima condición *subjetiva*: se trata del consenso; es decir, el acuerdo social para llevar a cabo el cambio de régimen. Podemos decir con seguridad que no pretendía el acuerdo de *todos*: Gramsci no sólo era teórico, sino también dirigente de un movimiento de masas y entendía perfectamente lo que es el enemigo de clase y la lucha de clases; se refería al acuerdo de las principales fuerzas sociales: el proletariado, el campesinado y la intelectualidad, a la cual atribuía, como veremos, un papel particular.

En Marx este postulado no está formulado de forma expresa, ya que para él era evidente que estas clases sociales tenían que ser un vehículo de la revolución. Hoy día, aleccionados por la experiencia, sabemos que tal evidencia era una ilusión optimista y que Gramsci sabía por qué formulaba con tanto énfasis sus postulados del consenso. Además, está claro que no se trata sólo del consenso para derribar el viejo régimen, sino del consenso para la construcción del *socialismo*, con todas las consecuencias que de ello se derivan. Porque una cosa es el acuerdo social para aniquilar el zarismo y otra cosa diferente es el acuerdo para construir sobre sus escombros el socialismo, de lo cual se daba cuenta perfectamente Lenin en 1905. Lo demostraría posteriormente la rebelión de Kronstadt y la trágica resistencia de los campesinos contra la colectivización.

De modo, pues, que se trata de un consenso sobre la base de un reconocimiento voluntario de la razón de cambiar la formación económica y política de la sociedad. Este consenso requiere, sin embargo, una conciencia social de las masas adecuadamente formada, que no surge de manera espontánea. De ello era con-

sicente Lenin cuando repetía con Kautsky, y él mismo subrayaba esta *deuda*, que el movimiento socialista surge de la unión del movimiento espontáneo de las masas obreras con la conciencia traída a este movimiento *de afuera*; la clase obrera no lo puede hacer por sí misma, porque para ello hace falta un conocimiento científico que el proletariado no posee.

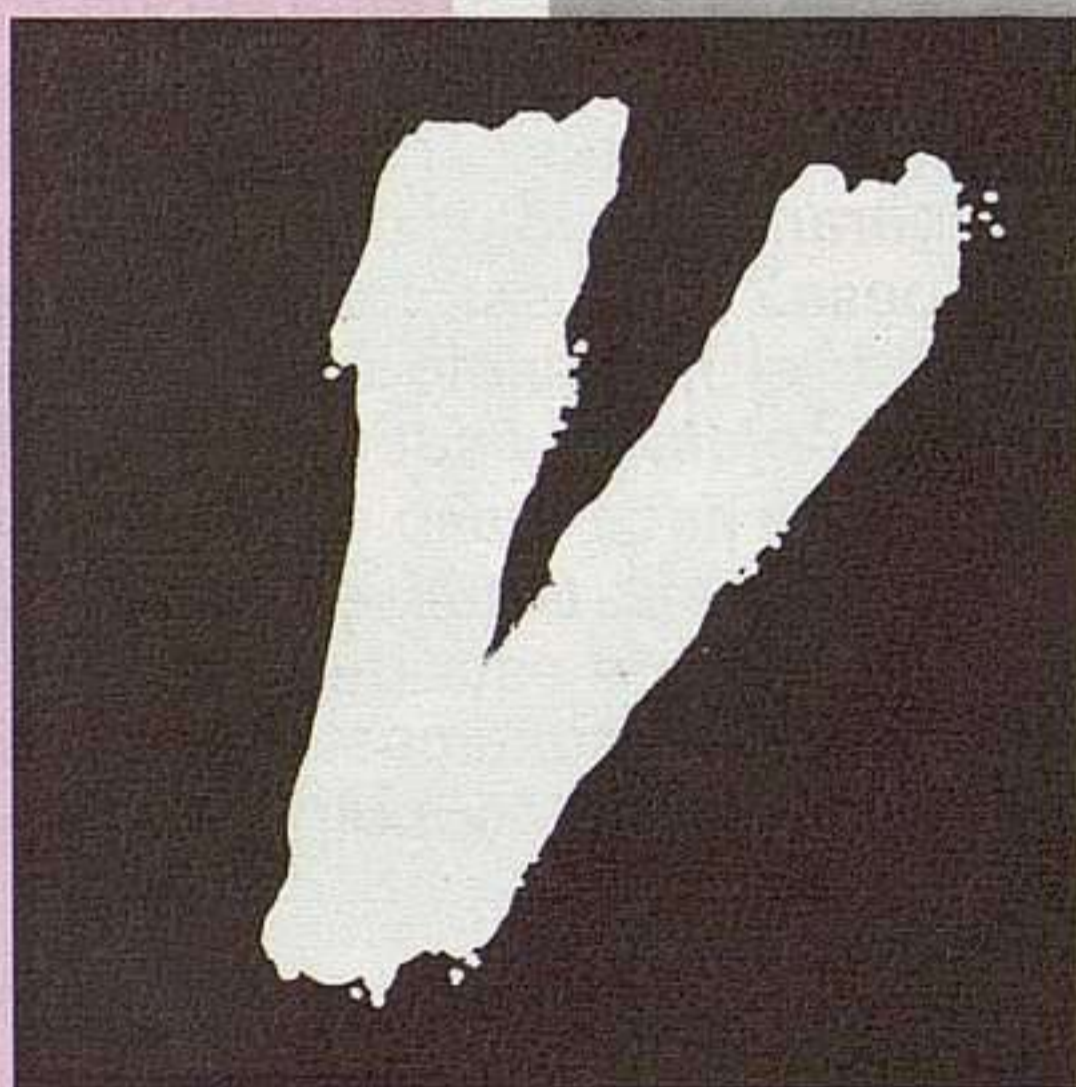
Es así como aparece la intelectualidad en tanto que factor necesario del socialismo (científico), lo cual aunque irrita mucho a algunos *ultras*, no confundía a Gramsci. Al contrario, su postulado del papel de la intelectualidad como clase social que aporta *de afuera* la conciencia socialista al seno de las masas es uno de los pilares de su teoría del consenso social. Incluso lo generalizó, recurriendo al ejemplo de Italia para demostrar el papel de la intelectualidad también en los movimientos no proletarios. Por supuesto, es mejor cuando éste *vehículo* de conciencia lo cumple una intelectualidad *orgánica*, vale decir proveniente de la misma clase y vinculada a sus intereses; pero ello puede tener lugar, sobre todo en el caso del proletariado, sólo con el tiempo cuando el proletariado forme su propia intelectualidad *orgánica*. Cuando ésta falta, la tarea recae sobre la intelectualidad en general, sobre sus elementos más avanzados, que han comprendido la situación y se han pasado al proletariado. Lo decían ya Marx y Engels en el *Manifiesto del Partido Comunista* y lo sabemos perfectamente de la historia del movimiento obrero. En el movimiento obrero alemán, que era el que daba la tónica en el siglo XIX, todos los dirigentes, a excepción única de Bebel, eran precisamente *de afuera*; en otros países ocurría lo mismo.

El trabajo ideológico requiere tiempo, la conciencia de la gente no se forma de un día para otro. Gramsci *compró* lo inevitable. Es un hueso duro de roer para los *impacientes*, que tratan cualquier llamamiento a la *temperancia* revolucionaria como una traición. Mal que les pese, para ser marxista hay que reconocer esta verdad: el marxismo exige que se respeten las condiciones *objetivas y subjetivas* de la revolución socialista. Se puede hacer caso omiso de este imperativo cuando el poder está *tirado en la calle*, pero la experiencia demuestra que esta desobediencia, después de la euforia inicial, resulta costosa. Lamentablemente, costosa no sólo para los culpables, sino también para el pueblo.



a PUNTES SOBRE LOS TRABAJADORES INTELECTUALES Y LA POLITICA

Daniel Lacalle



VOY a desarrollar las relaciones entre los trabajadores intelectuales y la política en cuatro pasos: en primer lugar, muy rápidamente, ver de

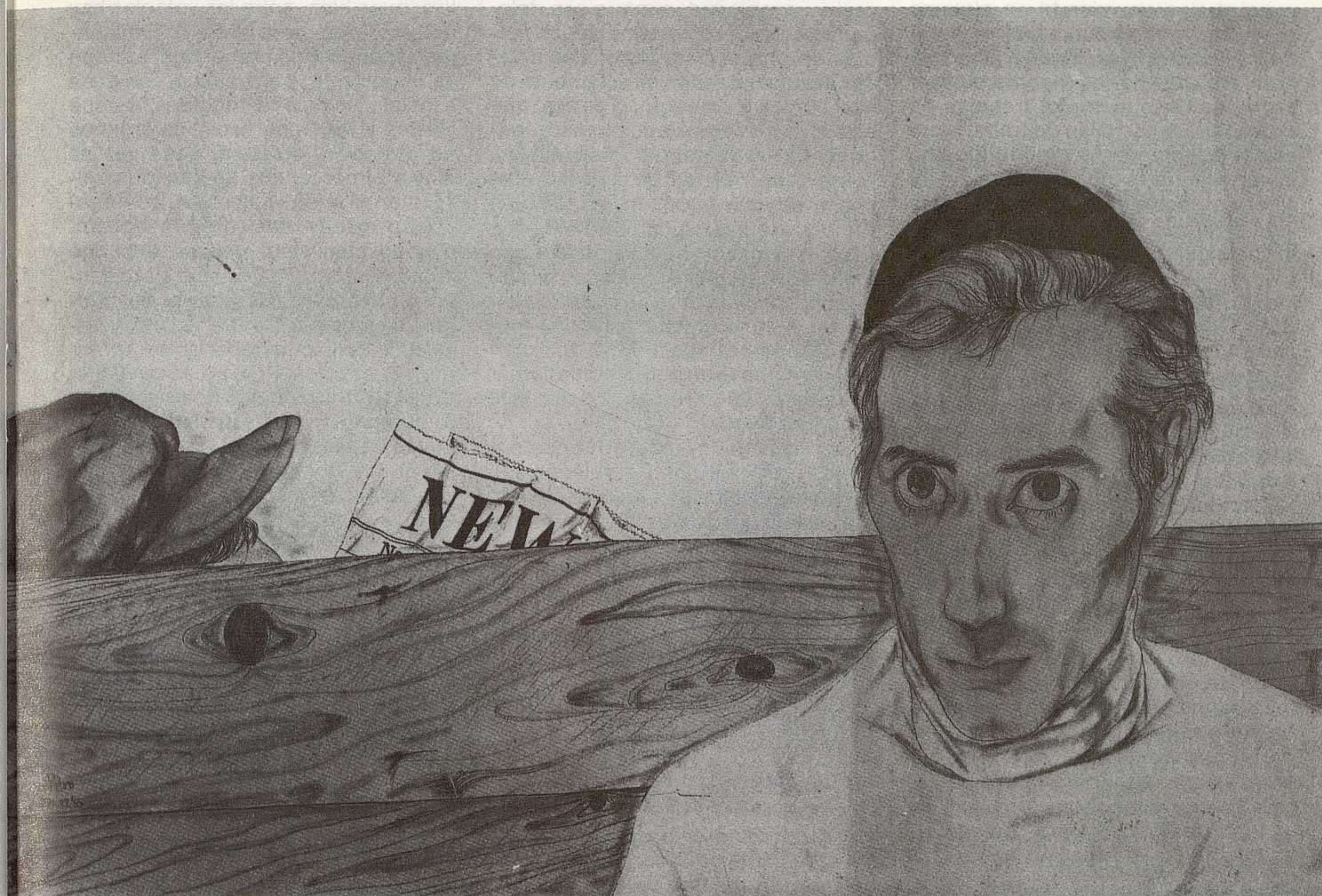
quién se está hablando; a partir de ahí, ver cuál es la posición social e ideológica que tienen en la sociedad, cuál ha sido y cuál es su actuación política y, por último, cómo está planteada la cuestión dentro del PCE, teniendo en cuenta que es un problema de estrategia, de transformación de la sociedad y no sólo una componenda para buscar unos apoyos dentro de sectores que, tradicionalmente, no están al margen del Partido.

Cuando hablo de trabajadores intelectuales me refiero a un conjunto bastante amplio. Más exactamente, a una serie de personas que no desarrollan un trabajo manual (eso es lo primero de todo); mi definición co-ge desde, por ejemplo, delineantes

proyectistas y jefes de administración (esos son los grupos más bajos) hasta ingenieros y directivos medios en las empresas, catedráticos, escritores, altos profesionales, médicos, etcétera. Es decir, que no sólo son los que normalmente se entiende por intelectuales, o sea, los que escriben tribunas en los periódicos o los pensadores y filósofos de élite. En líneas generales, en España pueden sumar un millón y medio.

Posición social e ideológica

Lógicamente, estos trabajadores no han surgido ahora, son un producto histórico de la división del trabajo. En la sociedad griega, por ejemplo, en la antigüedad, a través de un proceso de división del trabajo en manual e intelectual, se llegó, incluso, a que el trabajo manual lo realizaran esclavos y el trabajo intelectual hom-



Ilustraciones: Yoshitaro Isaka

bres libres (en un esquema muy grosero, sin matices). Eso produjo una separación, que viene arrastrada hasta hoy en día.

Dentro de la sociedad en que vivimos está mejor considerado el trabajo intelectual que el trabajo manual.

Aunque me voy a referir a la situación de España ahora, quería marcar que esa situación es un producto histórico, y que, por lo tanto, los que se llaman trabajadores intelectuales son un producto de la división del trabajo que no es una división necesaria en todos sus aspectos. Es decir, hay distintos trabajos que se complementan, eso se llama división técnica; pero hay también una división de clase; la sociedad de clases impone, pues, una serie de trabajos con unas jerarquías por razones técnicas y de clase. Partiendo de ahí puede contestarse a la pregunta, ¿cuál es la situación social de esos trabajadores intelectuales y cuál va a ser su situación política? Esta es la única forma en que un partido como el nuestro, que se

interesa por una transformación social en la cual tienen que intervenir todos, enfoque el tema. Por lo tanto, interesa dejar claro que la situación de los trabajadores intelectuales en la sociedad y su ideología vienen marcadas por ese hecho fundamental de la división del trabajo.

Cambios muy fuertes

Pues bien, lo más importante es que en los últimos quince-veinte años han sufrido unos procesos de cambio muy fuertes. Primero, de crecimiento: como decía antes estamos hablando de alrededor de un millón y medio de personas, cuando en los cincuenta no eran ni la tercera parte (con aumento de aproximadamente al 300 por 100). La inmensa mayoría de ellos viven sólo de su salario, independientemente de que normalmente su salario es bastante superior al de obreros y empleados, y cuanto más alta

sea su categoría, cuanto más alto sea su título, más ganan, en líneas generales. (Es cierto que todo el mundo conoce, por contra, abogados que ganan muy poco y obreros especializados que ganan mucho; pero la mayoría de los abogados ganan más que un obrero especialista, desde luego.)

Además ese salario se ha venido reduciendo muchísimo en los últimos años. Por ejemplo, se ha pasado de un abanico en que el ingeniero superior ganaba cuatro veces y media más que el peón hacia 1965, a 1984 en que como media, en el país y en salario convenio, no gana más que el doble. Ha habido un descenso relativo, aunque no absoluto, porque en realidad la cantidad de dinero que reciben les permite comprar las mismas cosas que antes.

También sus condiciones de trabajo se han deteriorado mucho; por dar un ejemplo de su reflejo social, antes el maestro o el farmacéutico o el médico o el ingeniero eran lo que se llamaban las fuerzas vivas, y ahora eso,

aunque siga ocurriendo en algunos pueblos, ya no es así ni en las ciudades de provincias. Desde luego, la gran mayoría de los ingenieros (por seguir con ese ejemplo) trabajan en proyectos, desarrollan un trabajo que está perfectamente delimitado, no tienen ningún mando sobre nadie, ni siquiera controlan sus tareas; antes los ingenieros eran jefes, ahora sólo lo son algunos.

A pesar de ello, en lo que respecta a su procedencia social, todavía la mayor parte de ellos son hijos de otros trabajadores intelectuales. Es decir, ha aumentado el porcentaje de hijos de obreros que está accediendo a la Universidad; pero, sin embargo, la mayoría de los trabajadores intelectuales son hijos de trabajadores intelectuales, y cuanto más se consideran carreras de titulados superiores eso surge más claro; el proceso que se llama de autorreclutamiento, un grupo que se recluta dentro de sí mismo, que se autoperpetúa, es muy fuerte.

Existen muchos más aspectos, datos y ejemplos, que harían esto inacabable, por lo que para acabar esta parte quisiera tocar otra serie de cosas que creo son importantes de cara a lo que debería ser una política cultural del PCE, además de conformar también la situación social y la actitud ideológica de los trabajadores intelectuales. En una sociedad de clases como es ésta, la cultura, en términos generales, tiene por un lado un carácter universalista y liberador, es decir, cuanto más culto es uno más posibilidades tiene de darse cuenta de la situación y por lo tanto más posibilidades tiene de liberarse; pero, por otro lado, la cultura en esta sociedad de clases es también una cultura de clase; además, una cultura de la clase dominante, no de la clase obrera. Lo que se entiende por cultura, por ejemplo, las secciones de cultura de los periódicos, incluido "Mundo Obrero", no tiene nada que ver con la clase obrera; debería serlo, pero no lo es; además, en muchos aspectos, ya no me refiero a "Mundo Obrero", pero sí a un diario de gran influencia entre los comunistas, como "El País", está absoluta y totalmente manipulada y controlada por individuos que están lanzando un mensaje que es opresor, aunque no nos demos cuenta.

Por otro lado, hay que partir de la base de que los trabajadores intelectuales en una sociedad como ésta son los que monopolizan la cultura. La cultura es un monopolio de ellos, es

casi su propiedad, aunque sea delegada por los propietarios de los medios de producción, los cuales a veces se desentienden directamente de ella; pero, sin embargo, sí es algo que está muy monopolizado por este conjunto de trabajadores intelectuales, sobre todo por los de élite, lo cual choca con que la cultura es también un foco de liberación; es decir, que esos trabajadores intelectuales son focos de expansión y de desarrollo de una cultura para todo un pueblo. Junto con el componente opresor y monopolizador, también tiene una connotación de lo que pudiéramos llamar desarrollo del carácter popular que la cultura tiene.

De este modo, más o menos enmarcada la posición de quiénes son y cuál es su situación en la sociedad, que como vemos es enormemente contradictoria, tiene unas partes que podemos considerar positivas o que pueden ayudar a un proyecto de emancipación, a cambiar la sociedad, y tienen otras que son regresivas, de mantenimiento de un "status" opresivo.

La actuación política

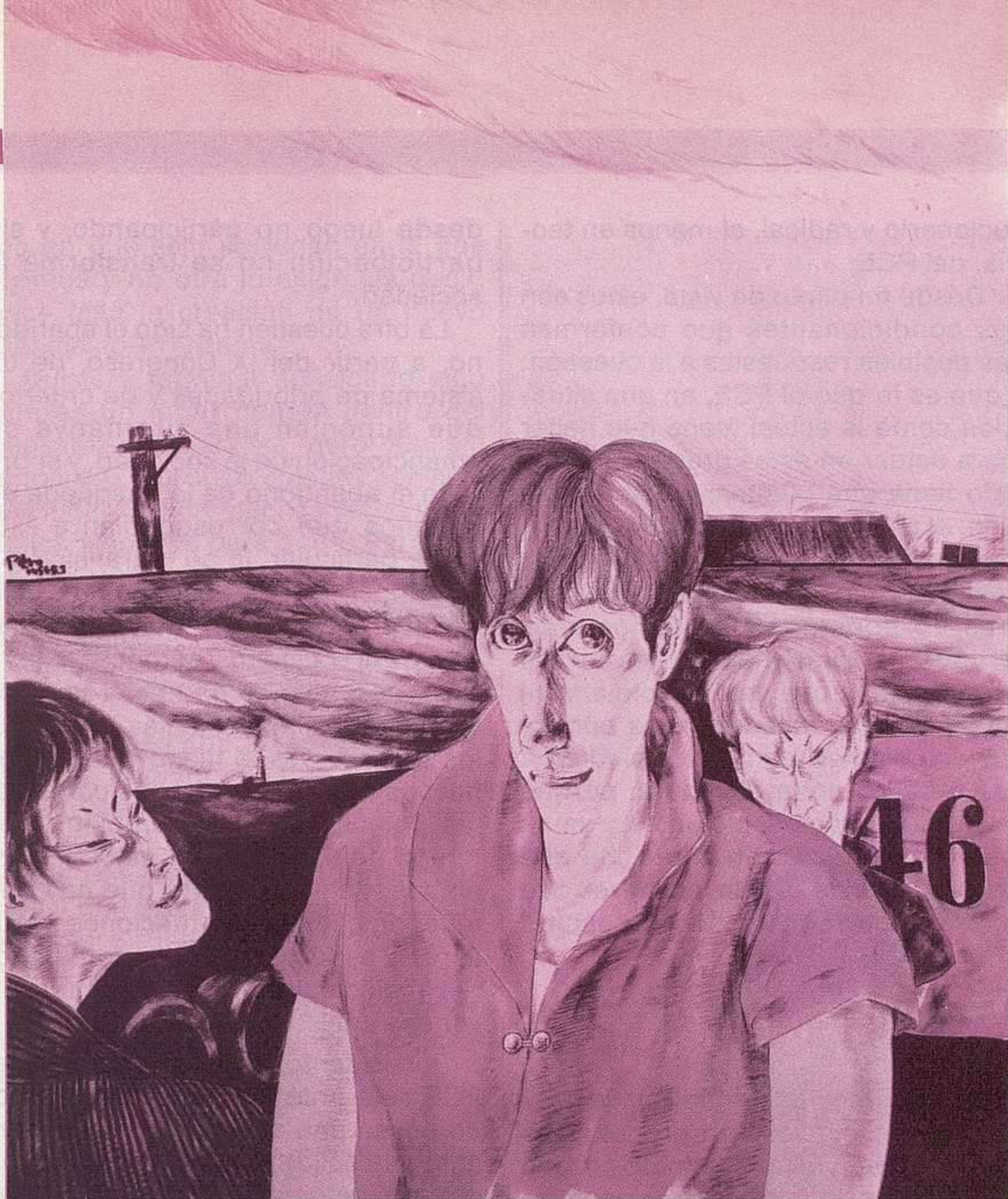
Exactamente lo mismo ocurre en su actuación política. La actuación política del conjunto de los trabajadores intelectuales no es homogénea, desde luego; tampoco la de la clase obrera; pero, sin embargo, mientras que se puede decir que el obrero que vota a Alianza Popular es un traidor a su clase, no se puede decir que el trabajador intelectual que vota a Alianza Popular es un traidor a su clase, porque ni siquiera lo de su clase está claro. Entonces, en esa actitud aparecen mezclas de progresista y de reaccionaria; evidentemente hay algunos que son más progresistas y otros que son más reaccionarios; pero en una gran parte está todo mezclado.

De todos modos hay hechos que aparecen en los estudios sociológicos que se han hecho y que creo son importantes de indicar. En primer lugar, el conjunto de esos trabajadores intelectuales, y sobre todo el conjunto de los titulados universitarios, son los más activos y los que participan más en la política específica de la democracia o, en otros términos, en lo que podríamos llamar la política institucional. Por ejemplo, esto se ve claramente en el caso del PSOE; el PSOE hizo una serie de encuestas sobre votantes, militantes, miembros de la dirección y miembros de la ejecu-

tiva; pues bien, entre los votantes hay más obreros, pero entre los militantes tienen menos porcentaje, aunque es importante; pero cuando se pasa a instancias más restringidas, los que asisten a los Congresos, los órganos de dirección, etcétera, cada vez es mayor el porcentaje de titulados universitarios, y en la ejecutiva confederal no queda casi ningún obrero. (Quede bien claro que no expongo como crítica al PSOE, sino para sentar un hecho; por mi parte, hay elogios a su capacidad de autoanalizarse, algo de lo que deberíamos aprender.) El caso del PCE no es tan claro, y además los estudios no existen; pero parece similar. Es decir, si nos metemos en el terreno de los que trabajan en las instituciones, en los Ayuntamientos, en los Parlamentos, etcétera, la tendencia es cada vez más fuerte a que sean profesionales, no profesionales de la política, sino abogados, arquitectos, profesores y demás.

De cualquier forma, a nivel del país, los trabajadores intelectuales son los que más participan en la democracia, a la vez que son los que más rechazan la política en la calle. Nosotros, como PCE, planteamos una política en las instituciones y una política en la calle; una política de cara al Parlamento y una política de cara a las masas; que mezcle lo que se llama una política de democracia formal representativa, y otra política de democracia directa, participativa, en la que intervenga todo el mundo; una política de representación, que es la de los Parlamentos, Ayuntamientos, etcétera, y una política de participación, que es la de las asociaciones de masas. Bueno, pues los trabajadores intelectuales, como conjunto de grupos sociales, son los que más rechazan esta segunda parte de la política, la que se da en la calle, la que es movilizadora, la que es de participación.

Es decir, para mí los trabajadores intelectuales forman los grupos que tienen una mayor tendencia a apoyar una versión liberal-burguesa del eurocomunismo. Yo parto, en esto, de los análisis del eurocomunismo por Hobsbawm, en donde se plantea la existencia de dos posibilidades: una que lo ve como una adaptación y puesta al día de un programa de liberación en el sentido del socialismo y del comunismo en las sociedades capitalistas avanzadas, teniendo en cuenta las condiciones específicas de esas sociedades avanzadas, los cambios que ha habido en su estructura



de clase, en las expectativas de la sociedad y en los niveles de vida; ésta sería la versión emancipadora del eurocomunismo y la otra la versión demoliberal, aquella que se dirige primaria y casi exclusivamente a la aceptación y utilización de elementos fundamentales, políticos e ideológicos de la democracia liberal, con una cierta puesta al día en determinados aspectos sociales.

Esas son para mí las bases de su actuación política; pero también existen otros elementos que pueden explicar muchas cosas que han ocurrido. En primer lugar su actividad en la política, sus posicionamientos en la política tienen tendencia a no plantear en primer término cuestiones reivindicativas, de calidad de vida, o nivel de vida, de tipo económico, sino más bien a moverse por actitudes éticas. Es decir, básicamente tienen sus necesidades vitales cubiertas y entonces su actividad en la política obedece a una especie de búsqueda de bienestar del conjunto de la población. Yo creo que se autoengañan; pero, sin embargo, esas posturas les hace quedar muy bien. El caso más claro es el de Aranguren, quien viene a proponer que actuar en la política no tiene ningún sentido en cuanto tal, pero que, a fin de cuentas, el sistema de valores que él defiende implica que tiene que comprometerse. Ahora bien, esto les lleva a que se coloquen, en muchos aspectos, por encima del sistema de partidos y por encima del sistema de clases, cuando en realidad en la sociedad existe el sistema de partidos y hay una estructura de clase, y les lleva además a reclamar un protagonismo que a mí, particularmente, me parece desmedido.

Todo esto les conduce a colocarse en una situación que es contradictoria: por un lado, el conjunto de los trabajadores intelectuales tienen tendencia a poner, como elemento clave, la superación de las limitaciones de la democracia burguesa; por eso se da tanto en los intelectuales de élite españoles el no meterse en los partidos y escribir en las tribunas libres de "El País", pongo por ejemplo. Pero, por otro lado, también les lleva a una negación de la democracia en cuanto tal, porque, les guste o no, la democracia pasa, aquí y ahora, por el sistema de partidos, y por el sistema parlamentario, aunque no exclusivamente.

Existe además, y en alto grado, un excesivo elitismo, un considerarse sólo ellos mismos, mezclado a su vez con ese ideal de servicio a la sociedad del que hablaba y que realmente no tienen. De ahí que las situaciones contradictorias que existían en la posición social existan también en su actuación política, lo cual no deja de ser lógico, porque la actuación política no deja de tener un fuerte componente de reflejo superestructural de una posición en la estructura.

Trabajadores intelectuales y PCE

A partir de todo lo anterior se comprende que, cuando consideramos el problema de los trabajadores intelectuales y el PCE, estas situaciones contradictorias se agudizan enormemente. Y por varias razones: la fundamental es que el PCE posee —los partidos comunistas en general— una mayor atracción para todo este conjunto de personas. Yo creo que ello es debido a que el PCE es el único en este país con una auténtica tradición de compromiso en verdaderas transformaciones sociales. Si se repasa la historia del PCE se le podrá echar de menos en algunos momentos y se le podrá criticar incoherencias, limitaciones y ausencias; pero es la única historia de un partido de izquierdas en este país donde esa tradición emancipadora ha existido, y por lo tanto, debido a ello, tiene un mayor atractivo además en los momentos de mayor represión; ese hecho ha surgido de forma mucho más clara, por ejemplo en la época de la dictadura franquista.

Pero, por otro lado, también existe, en estos grupos, una mayor repulsión al PCE en función, en primer lugar, de que el éxito del Partido ha sido motivado por la existencia de una organización fuerte, estructurada, muchas veces excesivamente monolítica; eso le ha permitido el plantearse su existencia con esa voluntad de transformación social. Y ese tipo de organización repugna a los trabajadores intelectuales, los cuales a su vez adoptan una actitud de cara a las transformaciones que tiene una evidente tendencia al reformismo y a ser moderada, incluso en los trabajadores intelectuales de izquierda, que también choca con el carácter revo-

lucionario y radical, al menos en teoría, del PCE.

Desde mi punto de vista, estos son los condicionantes que conforman las posibles respuestas a la cuestión: ¿qué es lo que el PCE, en una situación como la actual, tiene que hacer para actuar en estos grupos? El Partido tiene que plantearse esta cuestión, el problema de los intelectuales, de la política y del PCE a partir de las realidades concretas actuales. Nosotros no podemos inventarnos unos grupos sociales inexistentes de los que digamos que van a proletarizarse, o que son más radicales porque los estudiantes les tiraban piedras a los caballos en la dictadura, porque eran muy pocos estudiantes y ya se ha visto dónde están ahora. Sé que esto es un poco simple, pero creo que expresa perfectamente mi postura.

Quiebra brutal

No podemos decir que los trabajadores intelectuales son progresistas de por sí. Son un conjunto de grupos sociales enormemente contradictorios y por lo tanto el PCE tiene que plantearse esa situación de contradictoriedad. Pero es que, además, el PCE, para llevar a cabo una acción seria de cara a estos grupos, tiene que olvidarse de una vez por todas de pensar que su crisis, evidente y dramática entre ellos, ha obedecido a que en la dirección del Partido estaba Fulanito o Menganito, a que se produjo la territorialización, etcétera; todos esos han sido hechos reales, pero bastante anecdóticos. A mí me parece —y espero que se debata algún día— que son dos los hechos fundamentales que han llevado a la existencia de una quiebra tan brutal como la producida entre los trabajadores intelectuales dentro del PCE.

En primer lugar se ha dado, en la democracia, una profesionalización de la política; en la época final de la dictadura, la política la hacíamos todos en todos los sitios, y desde el momento en que se planteó el sistema de partidos y el sistema parlamentario, la política se hace fundamentalmente en las instituciones y por los que están en ellas, y en el aparato del PCE y por los que están en él; es decir, por los profesionales de la política. Ese es un hecho que ha ocurrido y que o se rompe con él o la gente acabará votando o no votando, pero

desde luego no participando, y sin participación no se transforma la sociedad.

La otra cuestión ha sido el abandono, a partir del IX Congreso, de un sistema de prioridades y de criterios que suponían una alternativa de emancipación de la sociedad, y sobre todo el abandono de la búsqueda de aquellos que correspondían a esta etapa particular, la de la transición a la democracia. Es decir, no ha existido un programa claro de transformación de la sociedad y entonces la gente se desentiende de nosotros, y los trabajadores intelectuales igual que los demás. Desde luego que ambos hechos afectan a todos los comunistas potenciales, pero también lo es que si no se resuelven estos temas, ambos, dejando aparte que hay que tener en cuenta las situaciones peculiares y específicas de los trabajadores intelectuales, nunca se va a resolver esa crisis.

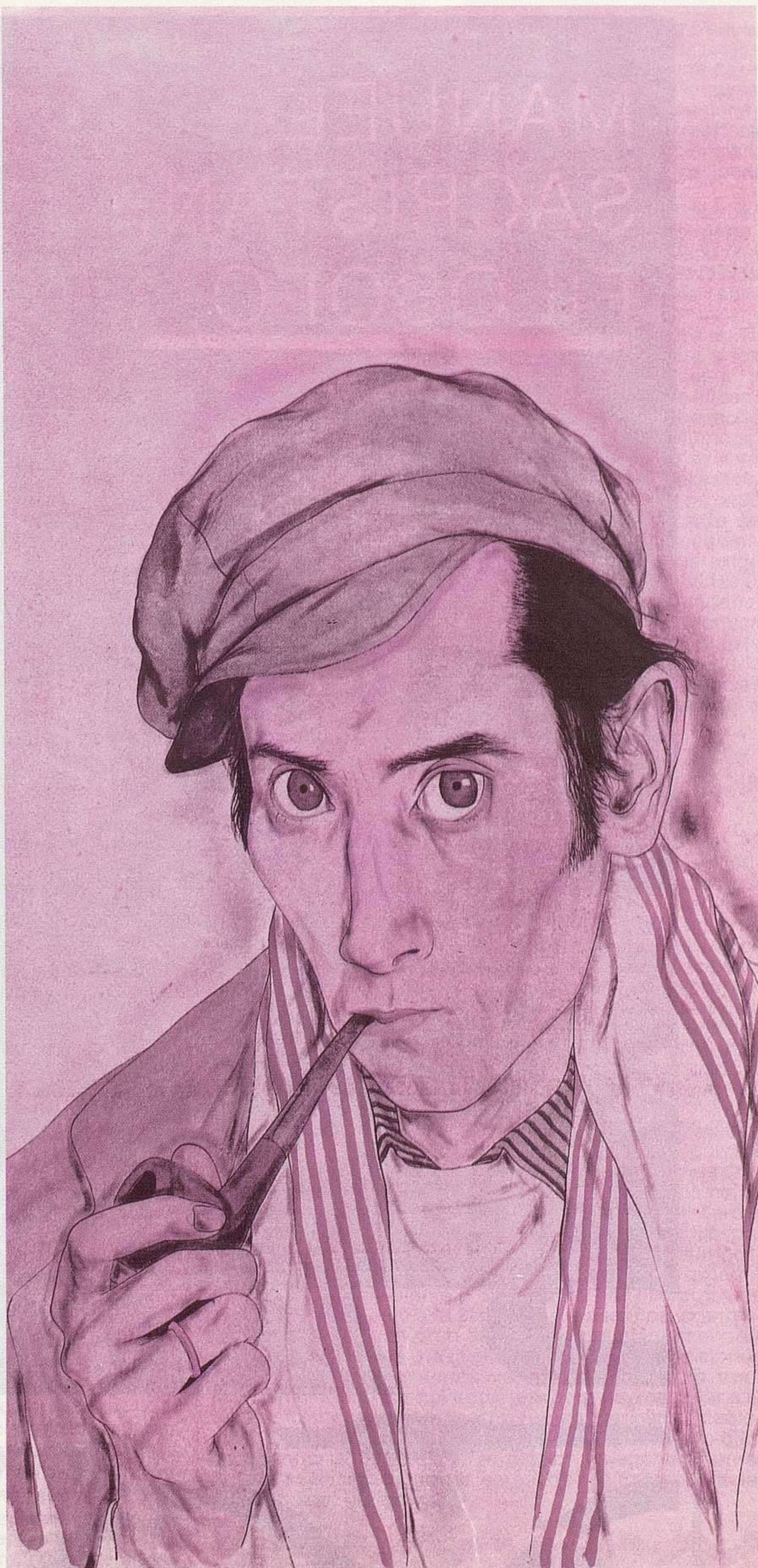
Por lo tanto, en este momento el PCE está ante un problema abierto; no posee una alternativa que le permite una salida, salvo un conjunto de pensamientos muy generales y abstractos. Así, las tesis aprobadas en el XI Congreso tienen solamente un par de párrafos de referencia a los trabajadores intelectuales que no deben ocupar más de ocho líneas, y para colmo no dicen nada en concreto; lo mismo pueden estar en ese programa que en el del PCI, que en el Partido Socialista Sueco, que en el de un Partido de los Trabajadores de Estados Unidos. Es decir, no existe una alternativa política; es una cuestión abierta y hay que resolverla. En mi opinión esa alternativa debe buscarse junto con los trabajadores intelectuales que quieran hacerla con nosotros.

Hay que verlo con claridad; el problema no es que el PCE cree una alternativa política para los trabajadores intelectuales y con ella se vaya a buscarlos, sino que debe crearla junto con ellos, estén o no estén dentro del PCE, y eso implica otras dos cuestiones fundamentales: primero, hace falta buscar formas de organización flexibles que atraigan a esos trabajadores intelectuales que estarían dispuestos a trabajar con nosotros en la búsqueda de esta alternativa política; segundo, hace falta buscar los elementos y los objetivos que van a permitir la transformación social revolucionaria en nuestra época y de la for-

ma en que esta sociedad en la que vivimos y no otra lo exige; es decir, hace falta la creación de un nuevo Manifiesto-Programa.

Quisiera terminar señalando algo que es un lugar común dentro del pensamiento marxista, pero que, sin embargo, y probablemente por eso, sea lugar común muchas veces no se aplica y no vale para nada. Para que exista un verdadero proyecto de transformación social, un proyecto revolucionario de emancipación del género humano hace falta que la clase obrera, el conjunto de lo que se llaman clases populares, y los trabajadores intelectuales se entiendan; más claramente, están obligados a entenderse para poder decir que existe ese proyecto de transformación y que esa transformación puede hacerse; y además si no participan todos (y por todos entiendo una revolución de la mayoría), la transformación de la sociedad en un sentido socialista es aquí y ahora imposible.

La base de este artículo es una conferencia-coloquio dada el 15-III-84 en la Agrupación Bilbao-La Elipa del PCE de Madrid. El carácter coloquial y la ausencia de aparato crítico se han mantenido deliberadamente. De todos modos, estos apuntes tienen una serie de antecedentes: "Sobre los trabajadores intelectuales" (*Materiales*, número 4, Barcelona 1977, originalmente una conferencia en Valladolid como acto electoral del PCE en las primeras elecciones democráticas), "Los intelectuales en la lucha por el socialismo" (en VV. AA.: "Los intelectuales y la sociedad actual", FIM, Madrid, 1980, originalmente una conferencia en el debate organizado por el Club Lauz de Granada en mayo de 1980), "Los trabajadores intelectuales, su situación en la sociedad actual y su participación en la lucha por el socialismo" (ponencia para la I Asamblea de Intelectuales, Profesionales y Artistas del PCE de enero de 1981, recogida en gran parte en la ponencia oficial), "De la pérdida de influencia del Partido Comunista en los grupos de trabajadores intelectuales y otras cuestiones relativas a la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura" (comunicación personal presentada a la Asamblea de Intelectuales, Profesionales y Artistas del PCE de enero de 1981; a pesar de haber sido enviada a los organizadores con tiempo, permanece inédita porque no fue aceptada ni se dio explicaciones de ello), "Trabajadores intelectuales y clases sociales" (en VV. AA.: "La sociología y la acción en los trabajadores intelectuales", FIM, Madrid, 1981, originariamente sus conferencias en la FIM en junio de 1981), "Los intelectuales y el cambio revolucionario" ("Nuestra Bandera", número 111, Madrid, 1982), "Alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura" ("Nuestra Bandera", número 118-119, Madrid, 1983, originariamente una mesa redonda en la FIM en marzo de 1983), "El compromiso del intelectual" (en VV. AA.: "La función social del intelectual", Ayuso-FIM, Madrid, 1983, originariamente una conferencia en la Tribuna Ciudadana de Oviedo en octubre de 1982).



MANUEL SACRISTAN, FILOSOFO

∞

64

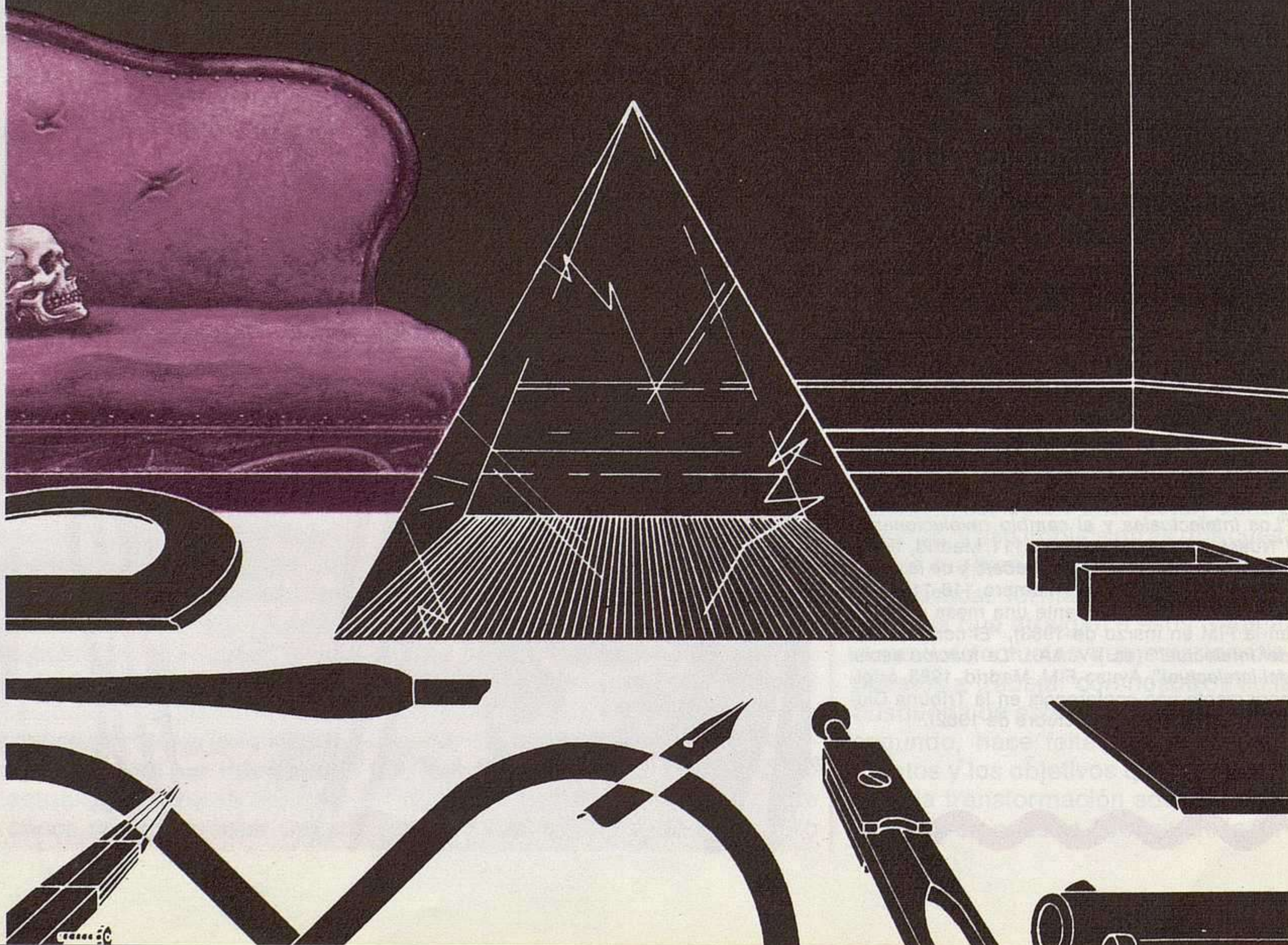


Ilustración: Robert Mason

Francisco José Martínez

APROVECHAMOS la publicación del segundo volumen de los *Panfletos y Materiales* de Sacristán, titulado: *Papeles de filosofía* (Icaria, Barcelona, 1984), para analizar la relación que uno de los más importantes, quizá el más importante, de los marxistas españoles ha mantenido con la filosofía. Es conveniente destacar que Sacristán se ha movido con gran agilidad por los tres paradigmas filosóficos fundamentales de nuestro tiempo: el marxismo, la filosofía de la ciencia y la hermenéutica.

En efecto, su tesis doctoral, publicada en 1958, versaba sobre *Las ideas gnoseológicas de Heidegger*, y Sacristán dedicó varios artículos a la obra del gran pensador alemán, padre, junto con Husserl y Gadamer, de la corriente hermenéutica, dominante en la Europa continental después de la segunda guerra mundial. El tema de la verdad como desvelamiento, frente a la concepción de la verdad como correspondencia o adecuación, típica de la ciencia moderna, ha sido uno de los asuntos analizados por Sacristán. Por otra parte, no podemos olvidar que su *Introducción a la lógica y al análisis formal*, de 1964, ha sido uno de los primeros manuales de lógica simbólica escritos en España y es aún uno de los más completos. Sacristán estudió lógica con Scholz en Munster (RFA) y recibió de este gran lógico y filósofo alemán el interés por los aspectos filosóficos de la lógica, que Sacristán, al contrario de la mayoría de los lógicos puros, no desprecia ni ignora en absoluto. Precisamente dedicó al tema del concepto de lo lógico los apuntes del curso 1962-63, recogidos en el volumen comentado. En estos apuntes toma de Scholz el rechazo que éste tenía respecto al convencionalismo total en lógica, ya que la finalidad y el objeto de los cálculos lógicos les prescriben sus características y les impiden, por lo tanto, ser completamente convencionales. Este intento de relacionar la lógica con el resto de la filosofía y, de manera mediata, con la realidad, se puede ver también en su recuperación del concepto aristotélico de abstracción. Para Sacristán, los formalismos lógicos y matemáticos son contruidos por los hombres, pero no de manera abstracta, sino mediante una intuición que tiene su raíz en la experiencia de las cosas, y que permite construir dichos formalismos a partir de unas ideas rectoras obtenidas por abstracción a partir de los datos empíricos del mundo real.

El marxismo contemporáneo

Otra aportación filosófica de Sacristán como historiador de la filosofía contemporánea se puede ver en los artículos dedicados a dicho tema en los suplementos de las enciclopedias Espasa y Labor, y en el Diccionario de Filosofía de D. Runes, recogidos también en este libro y dentro de los cuales destacan sus estudios sobre el marxismo contemporáneo centrados en las figuras de Bernal, Gramsci, Lukács y Mao. Sacristán distingue entre los marxistas rusos y franceses, muy ortodoxos, y las aportaciones del marxismo de cuño historicista italiano, del marxismo inglés, cientifista, humanista y liberal, e incluso de marxistas polacos como Schaff, húngaros como Lukács y Heller, chinos como Mao, que se movían en terrenos de más amplias perspectivas, según las propias palabras de Sacristán. Los temas fundamentales que se desprenden del concepto marxista de filoso-

fia son, por un lado, la crítica interpretativa de la ciencia y la práctica social y, por otro, la utilización de sus resultados para la formulación teórica de un programa para la fundación de una sociedad y una cultura nuevas (pág. 174). Es decir, por un lado, el marxismo es conciencia crítica y, por otro, es praxis racional, creadora de un mundo nuevo: es relación crítica con las ciencias, tanto naturales como humanas y, la vez, guía racional de la práctica.

Por último, su opúsculo de 1968, editado aquí de nuevo, *sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores*, nos envía a la polémica que Sacristán mantuvo con Gustavo Bueno en torno a dicho tema. Aquí defendía que, dado que la filosofía es un saber adjetivo, es decir, que sólo tiene sentido sobre la base de saberes sustantivos, científicos, se debía suprimir la licenciatura en filosofía, y reservar el estudio de dicha disciplina a los licenciados en otras Facultades que vinieran luego a doctorarse en filosofía en un Instituto General de Filosofía, basado en un trabajo interdisciplinar que aproveche los conocimientos científicos previos de los alumnos; frente a esta postura, el profesor Bueno escribió su obra titulada *El papel de la filosofía en el conjunto del saber*, en la que criticaba las propuestas de Sacristán en base a una noción dualista de la filosofía que, por un lado, se presenta como un saber sustantivo, gremial, académico, una especie de *Geometría de las Ideas*, que exige una especialización como todas las demás disciplinas y, por otro lado, se muestra como una práctica, mundana, dirigida a todos los hombres filósofos o no. La polémica puso de relieve que ambos contendientes compartían la mayor parte de sus ideas, ya que ambos partían de la noción de una filosofía crítica en diálogo con las ciencias además de con su propia tradición, e iluminadora de la práctica social.

Mientras tanto...

Como conclusión diremos que acercarse a los escritos filosóficos de Sacristán, casi siempre marcados por la coyuntura y las exigencias académicas e incluso económicas, nos permite ver la importancia que un gran teórico marxista, dirigente comunista durante largos años, concedía al análisis meticuloso de las principales aportaciones filosóficas contemporáneas, tanto del campo burgués como del campo proletario y marxista y, especialmente, nos denuncia una de las principales carencias del pensamiento marxista español y no sólo español: la confrontación crítica, pero desarrollada a partir de un profundo y amplio conocimiento, de la filosofía de la ciencia contemporánea.

En la actualidad, Sacristán, desde la revista *Mientras tanto*, prosigue este diálogo tenaz e infatigable con los principales desafíos teóricos y políticos actuales: los problemas propuestos por el feminismo, el ecologismo, la lucha por la paz y el desarme, la explotación del Tercer Mundo, etc. Esta es la principal lección que el filósofo Manuel Sacristán nos da: sólo la conciencia de la importancia que hoy tiene la renovación cultural de la izquierda y el esfuerzo consciente y continuado por elaborar una teorización que esté a la altura de los desafíos, completamente inéditos en gran parte, que nos plantea el presente, a partir de lo más válido de todas las tradiciones teóricas contemporáneas vertebradas en torno a un marxismo crítico e innovador, nos permitirá escapar a la trágica trampa de mantenernos en un marxismo ideologizado, dogmático, incapaz de captar la novedad, o bien de abandonar todo esfuerzo teórico y degenerar en el puro practicismo tacticista, sometido a la hegemonía del pensamiento conservador.

PERSPECTIVA MARXISTA DE GOETHE

José María Laso



QUIENES en la adolescencia leímos *Werther*, *Las afinidades electivas*, *Fausto*, etc., quedamos para siempre impactados por la potencia creadora de Goethe. En un sentido distinto, también nos impresionaron dos frases que se le atribuían. Por la primera, proclamaba: *Quien tiene el arte y la ciencia, tiene la religión; quien no tiene el arte y la ciencia, que tenga la religión*. Tal frase, a pesar

del atractivo que tenía para la adolescencia, por sus sugerencias artísticas, no acababa de agradarnos, pues captábamos en ella un trasfondo elitista. Menos nos agradó todavía la preferencia, que a Goethe se le atribuía, del orden sobre la justicia. En tales aforismos goethianos creíamos percibir la anatomía de una naturaleza imbuida de un exacerbado individualismo egoísta que despreciaba olímpicamente a sus semejantes. No obstante, además de literario, había otro Goethe que nos atraía. El que tuvo visión histórica suficiente para discernir en la batalla de Valmy el nacimiento de una nueva época; el que en la entrevista de Erfurt impresiona de tal modo a Napoleón, que éste le caracteriza con el clásico *Voilà un homme* ("He aquí un hombre"). Bien es cierto también que esta entrevista nos deja el regusto amargo de la actitud de Goethe

hacia Napoleón. No admira en él a la espada de la Revolución francesa que destroza los lazos feudales subsistentes en Europa. El general revolucionario se ha proclamado ya Emperador y Goethe le admira como el restaurador del orden en el caos revolucionario. En tal sentido, la actitud de Goethe frente a Napoleón se sitúa en los antípodas de la de Beethoven.

Fortuitamente, muchos años después hemos tenido ocasión de leer las Memorias de Goethe que él subtítulo *Poesía y verdad*. Con ellas nos sumergimos inmediatamente en un mundo fascinante condicionado por los fenómenos del prerromanticismo, la ilustración y los prolegómenos de la Revolución francesa y las guerras napoleónicas. Mediante su propia pluma, no obstante su discutible veracidad, Goethe se nos muestra como una gran personalidad dotada de facetas dialécticamente contradictorias. Tan contradictorias facetas son, precisamente, las que han dado lugar a tal diversidad de interpretaciones sobre la personalidad de Goethe. A su examen, desde una perspectiva marxista, vamos a dedicar este trabajo. Sin embargo, antes de entrar de lleno en la tarea, no nos resistimos a transcribir una cita de las Memorias de Goethe que se contrapone a la imagen que de él nos forjamos en la adolescencia: *Si en el curso de*





nuestra vida vemos que otros han hecho una tarea para la que nos creíamos llamados, pero que hubimos de abandonar como otras muchas, nos domina el bello sentimiento de que sólo la Humanidad es el hombre verdadero y de que el individuo sólo puede sentirse a sí mismo en el todo (1). En esta faceta concreta, Goethe parece anticiparse a Marx y, en general, a una concepción co-

lectivista del humanismo propia del pensamiento de izquierda contemporáneo.

Las interpretaciones de Goethe

Su precoz éxito literario, con la obra *Gotz Berlichingen*, permitió a Goethe adquirir una posición desta-

cada en la literatura alemana y convertirse en el dirigente del movimiento *Sturm und Drang* (Tempestad e Impetu). Tal movimiento, que tomaba su nombre de un drama de Klinger, suponía la iniciación de la corriente prerromántica. No obstante el entusiasmo que suscitó entre la juventud, fue criticada por Federico II el Grande —ídolo del propio Goethe— como *una imitación reprobada*



Ilustración: Brian Grimwood.

ble de las malas comedias francesas. Un año después, Goethe arrolla con su *Werther* adquiriendo dimensión literaria internacional. No sólo la crítica es unánime en la admiración, sino que Goethe trasciende el ámbito literario, imponiendo la moda Werther, tanto en el vestir como en la génesis de una epidemia de suicidios amorosos. Poco después Goethe inicia su etapa cortesana en Weimar. Aunque de 1775 a 1786 escribió diversos poemas líricos y continuó el *Fausto* —magna obra cuya elaboración abarcaría toda su vida—, su obra literaria ya no obtiene tanto éxito y el mundo de las letras lo da por perdido. Esa impresión produce, por su dedicación a las tareas de cortesano, político, jurista, naturalista, etc. Sin embargo, tras dos años de estancia en Italia, se inicia otra etapa de gran creatividad: *Ifigenia en Táuride*, *Egmont*, *Torcuato Tasso*, *Elegías romanas*.

La estancia en Italia, donde estudia devotamente las grandes obras de la antigüedad, le imprime un viraje hacia lo clásico que neutraliza los impulsos de su etapa prerromántica. Incluso en su propia vida, hasta entonces muy desordenada, acaba imponiéndose el ideal griego de la moderación. Desde esta nueva perspectiva, Goethe elabora sucesivamente *Guillermo Meister*, *Hermann y Dorotea*, *Las afinidades electivas*, etcétera. También la parte de sus Memorias que subtitula *Pesía y verdad*. Con la culminación del *Fausto*, Goethe es considerado como la cima de la cultura alemana. Sin embargo, ello no le libra de la crítica. Los escritores Menzel y Kotzebue lo consideran excesivamente valorado. En política se le reprocha su servilismo hacia los príncipes y no haber asumido la causa patriótica en la guerra de liberación contra Napoleón. En los círculos eclesiásticos es considerado como un pagano amoral.

Enzo Orlandi sintetiza muy bien una de tales interpretaciones: *En la época del naturalismo se estima sobre todo el período "Sturm und Drang" de Goethe. La falta de forma, la genialidad espontánea, casi primitiva —aunque arraigada en una profunda cultura—, la exaltación de la Naturaleza, la originalidad del lenguaje, el desenfreno del eros, la pasión. El Goethe de Weimar, apolíneo, clásico, no agrada, no interesa. La obra del joven Goethe es juzgada*

“típicamente germánica”, y, por esa razón, válida; pero la atmósfera de Weimar y el atrayente viaje italiano ha alejado a Goethe de aquellos principios prometedores para conducirlo por los falsos caminos del clasicismo, del cosmopolitismo y de las desviaciones orientales (2).

A partir de 1875 se produce un viraje crítico a favor de Goethe. Primero es Hermann Grimm quien intenta demostrar que Goethe poseía la indescriptible capacidad de vivir simultáneamente en dos mundos, que enlazaban perfectamente y que, al mismo tiempo, mantenía completamente separados. Pero su gran reivindicador es, sobre todo, Nietzsche. Para tal filósofo, Goethe es un elemento formativo indispensable y su encuentro con Napoleón un punto culminante de la historia mundial. A su vez, Gundolf impone la imagen de un Goethe que sería la unidad mayor en la que el espíritu germano se ha encarnado. No obstante tan fuerte respaldo germánico, Goethe corre peligro, al implantarse el régimen nazi, de ser barrido de la cultura alemana. Lo salva el jefe de las juventudes hitlerianas, Baldur von Schirach, al recoger de sus obras los pasajes que podían estimarse como anticipaciones del nazismo. Incluso el hombre fáustico de Spengler, que era el símbolo del hombre occidental, es nacionalizado. Y es que el filósofo nazi Alfred Rosenberg encuentra en *Fausto* el eco de la eterna tendencia alemana al activismo. En ello se apoya Hitler, en sus conversaciones con Rauschnigg, para afirmar: *No me gusta del todo Goethe, pero quiero perdonarle muchas cosas por estas solas palabras suyas: En el principio era la acción.* Sin embargo, tal interpretación nazi de Goethe resulta muy forzada. Difícilmente su humanismo, sus ideales de tolerancia, su apertura hacia un colectivo humano universal —incluso su cosmopolitismo— podían ser compaginables con el exarcebado nacionalismo nazi.

Con las numerosas traducciones de su *Werther*, Goethe comienza a ser conocido y apreciado en Europa. Madame de Stäel, Shelley, Byron y Carlyle exaltan su genialidad. En Rusia, donde conectan con su carácter nacional, tienen gran eco sus poemas sentimentales. El entusiasmo de Pushkin por el *Fausto* le lleva a afirmar: *Esta obra de Goethe permanece-*



cerá como la más grande creación del espíritu poético, la encarnación de la poesía moderna, como la Iliada fue el monumento de la antigüedad clásica. Empero, los representantes literarios del nacionalismo ruso reprochan a Goethe no haber tenido comprensión por la miseria de los desheredados. Tolstoi lo considera un frío olímpico y Dostoyevsky lo condena como profeta de la divinización del hombre. En Italia es más tarde valorado por Francisco de Sanctis y admirado por Mazzini, Gioberti y Benedetto Croce. Gramsci, en sus *Cuadernos de la cárcel*, lo considera nacional, pero no nacionalista. Valora también en Goethe su aforismo de que a la autoconciencia se debe llegar no por la contemplación, sino por la acción. En España, entre otros autores, valoraron a Goethe: Juan Valera (*Goethe no es sólo poeta. Es el escritor por excelencia...*), Menéndez Pelayo, para quien *Goethe es el gran poeta panteísta y realista, el poeta del empirismo intelectual; poeta objetivo por excelencia, que aspira a convertir toda la Naturaleza en arte, toda realidad en ideal.* Para Ortega y Gasset, que pronuncia varias conferencias sobre su bicentenario, *Goethe es el clásico de segunda potencia, el clásico que a su vez había vivido de los clásicos, el prototipo del heredero espiritual, cosa de la que él mismo se dio tan clara cuenta; en suma, representa entre los clásicos el patricio. Además, si todos los clásicos lo son en definitiva para la vida, éste pretende ser el artista de la vida, el clásico de la vida.*

La interpretación marxista

Con el fin de la segunda guerra mundial se reanudan las interpretaciones de Goethe. En 1947, para Karl Jaspers, *Goethe no es un modelo que imitar. Como otros grandes, es un punto de orientación para nosotros..., un paradigma de la condición humana, sin llegar a ser todavía el ejemplo que debemos seguir. Es un ejemplo sin ser un modelo.* Por el contrario, como precisa Manuel Sacristán, desde posiciones ideológicas cambiantes, en su patria, en el destierro, y de vuelta a su patria, Thomas Mann dirige durante decenios exhortaciones goethianas a sus compatriotas para apartarlos del mal que ve venir, y luego para exhortarlos a no caer de nuevo en él. Así, su conferencia *Goethe y la democracia* (1949) es, para Sacristán, sólo el episodio final del largo esfuerzo del artista por presentar a los alemanes la figura de Goethe como el antídoto del nazismo y como fórmula de progresiva fidelidad. En abierto contraste con Tomas Mann, el gran dramaturgo y ensayista marxista Bertolt Brecht, sin menospreciar nunca ni enfrentarse directamente a Goethe, no le exime de crítica. Así, por ejemplo, en el final de su *Santa Juana de los mataderos*, la parodia del lenguaje de Goethe tiene la función precisa de denunciar la vacuidad del ideal humanístico clásico del autor de *Fausto* frente a los problemas que afligen a la nación alemana, agotada después de la primera guerra mundial, expuesta a la

inflación, al hambre y a los desórdenes de las sacudidas revolucionarias y contrarrevolucionarias.

Si nos remontamos a los clásicos del marxismo, podremos observar que su actitud hacia Goethe está condicionada por la complejidad y las contradicciones de la personalidad del autor de *Werther*. Marx lo incluía entre sus tres poetas favoritos, junto a Shakespeare y Esquilo, en una encuesta que sobre sus predilecciones literarias le realizaron sus hijas Jenny y Laura. A su vez, el yerno de Marx, Paul Lafargue, en sus *Recuerdos personales de Karl Marx*, precisa que Marx sabía de memoria a Heine y a Goethe, a quienes corrientemente citaba en su conversación. Trascendiendo lo puramente literario, Marx utilizó también a Shakespeare y Goethe en sus estudios iniciales sobre el dinero. Basándose en personajes de *El mercader de Venecia*, Fausto y Timón de Atenas, Marx plantea el efecto todopoderoso del dinero: *Lo que existe para mí por el dinero, lo que yo puedo pagar, es decir, lo que el dinero puede comprar, eso soy yo, el vínculo de los vínculos. ¿No se puede atar y desatar a todos por el dinero? Esa será mi fuerza. Las virtudes del dinero son mis virtudes y mi potencia la de su poseedor. Lo que yo soy y lo*

que yo puedo no está, pues, en manera alguna, determinado por mi individualidad. Soy feo, pero puedo comprarme la mujer más bella. Entonces ya no soy feo, porque el efecto de la fealdad, su fuerza repulsiva, es anulada por el dinero. Yo soy —mi individuo es— cojo, pero el dinero me procura veinticuatro pies; ya no soy cojo; soy un hombre malo, deshonesto, sin conciencia, sin espíritu, pero el dinero es honrado y también lo es su poseedor. El dinero es el mayor bien, luego su poseedor es bueno; el dinero me libra de la vergüenza de ser deshonesto; se presume que soy honesto; soy desprovisto de espíritu, pero el dinero es el verdadero espíritu de todas las cosas. ¿Cómo podría estar su poseedor desprovisto de espíritu? Y luego puedo comprar gentes espirituales, y lo que tienen las gentes espirituales, ¿no es más espiritual que lo más espiritual? Yo, que gracias al dinero puedo todo aquello a que aspira un corazón humano, ¿no tengo ya en mi poder todas las riquezas humanas? Mi dinero, ¿no transforma todas mis insuficiencias en su contrario? (3).

Por su parte, Engels resalta las contradicciones de Goethe. Así, refiriéndose a las limitaciones de Hegel, precisa en su *Ludwig Feuerbach:*

*Las necesidades interiores del sistema bastan, por consecuencia, para explicar cómo ha podido llegar a una conclusión política tan moderada por medio de un método de pensamiento profundamente revolucionario. La forma específica de esta conclusión proviene, por otra parte, del hecho de que Hegel era alemán, y de que, tanto en él como en su contemporáneo Goethe había un tanto de filisteísmo. Cada uno en su género era un Zeus olímpico, pero ni uno ni otro se despojaron completamente del filisteo alemán. Tales limitaciones de Hegel, Goethe, etcétera, Engels tiende a explicarlas por el efecto negativo que sobre ellos ejercía la asfixiante situación de Alemania a fines del siglo XVIII. Así, en unas cartas publicadas en *The Northern Star* matizaba: La única esperanza de un mejor porvenir aparecía en la literatura del país. Esta época, vergonzosa desde el punto de vista político y social, fue, al mismo tiempo, la gran época de la literatura alemana. Alrededor de 1750 nacieron todos los grandes espíritus de Alemania, los poetas Goethe y Schiller, los filósofos Kant y Fichte y, unos veinte años más tarde, el último gran metafísico alemán, Hegel. Cada obra notable de esta época está penetrada por un espíritu de desafío y de revuelta contra la sociedad alemana tal como era entonces. Goethe escribe Goetz von Berlichingen, homenaje dramático rendido a la memoria de un revolucionario. Schiller, en *Los bandoleros*, celebra a un generoso joven que declara la guerra abierta a toda la sociedad. Pero éstas fueron sus obras de juventud; con la edad perdieron toda esperanza: Goethe se limita a sátiras extremadamente agudas y Schiller hubiera muerto de desesperación si no encuentra refugio en la ciencia y en particular en la gran historia de la Grecia antigua y de Roma. Estos dos hombres pueden ser tomados como ejemplo de los demás. Aun los espíritus más fuertes y mejores de la nación habían perdido toda esperanza en el porvenir del país. Esa dialéctica contradictoria del genio-filisteo, que Engels observa en Goethe, se expresa también en la carta que Engels dirige a Marx el 15 de enero de 1847: A propósito de Grün, voy a retocar el artículo sobre el Goethe de Grün, a reducirlo a una hoja y a tenerlo listo para nuestra publicación, si esto te*

conviene. El libro es por demás característico. Grün celebra todas las ideas de filisteo de Goethe como ideas humanas, hace del Goethe francfortés y funcionario el "verdadero hombre", mientras descuida o ensucia todo lo que hay en él de colosal y de genial. Hasta tal punto, que este libro prueba de una manera brillante que el hombre = pequeño-burgués alemán.

El filósofo marxista Georg Lukács complementa esta caracterización. Además de personalizar al pueblo alemán en las grandes figuras de

Durero, Münzer, Goethe y Marx, atribuye a Goethe una función ideológica progresista: *A esta desmembración política de Alemania corresponde su desmembración ideológica. Los ideólogos progresivos más descollantes de la época, sobre todo un Goethe y un Hegel, no recatan su simpatía por la unificación napoleónica de Alemania, por la liquidación de los vestigios feudales a cargo de Francia y también rechazan los intentos irracionalistas de apropiárselo... Siendo así que además Goethe, sobreponiéndose a un empirismo radical, fue desarrollándose hasta convertirse en un partidario libre de la filosofía clásica alemana, y especialmente de su dialéctica. A lo cual hay que añadir que las reservas de Goethe frente a sus contemporáneos filosóficos respondían, de una parte, a que se inclinaba mucho más que éstos al materialismo filosófico (siendo indiferente, a este respecto, el que denominase hilozoísmo o de otro modo a su materialismo, nunca enteramente consecuente) y, de otra parte, a que jamás se avino a que los resultados de sus propias investigaciones se confinasen dentro de los límites de un sistema idealista (4).* Similar valoración de Goethe realiza la filosofía oficial soviética, incluyendo una apreciación positiva de su *estética realista.*

Manuel Sacristán, en su magnífico prólogo a las Obras de Goethe, profundiza en el problema de la veracidad del gran clásico alemán. Después de demostrar que Goethe fue deliberadamente inveraz, en su enfrentamiento con la teoría de los colores de Newton, y de valorar sus otras aportaciones científicas, trata de localizar las causas de su actitud. Su raíz puede estibar en que Goethe tuvo la paradójica mala suerte de percibir con antelación los límites del pensamiento científico y filosófico de su época. Así, en la antipatía de Goethe por el sistema de D'Holbach hay una clara consciencia crítica de las limitaciones de la visión mecanicista del mundo. De tal limitación —producto a su vez del desequilibrio entre el rápido desarrollo de las ciencias naturales y el mucho más lento de las sociales— se deriva una creciente escisión entre el conocimiento racional de la Naturaleza y del hombre y el mundo social. Goethe postuló una racionalidad que superase la escisión de sujeto y Natu-

raleza así engendrada y consolidada después por el desarrollo del mercado moderno. Como conclusión de nuestro intento de profundización en la personalidad contradictoria de Goethe, nada mejor que indentificarnos con la tesis final del profesor Sacristán: *Goethe es un contemporáneo de Hegel. Estas dos cimas últimas, antes de que empiece a representarse activamente el drama final de la historia opaca, de la prehistoria de la libertad, fueron alcanzadas aun con la veracidad que luego ha perdido para siempre, desde 1871 (año de la "Commune" de París) y aun desde 1917 (con la Revolución soviética. Ambos paréntesis añadidos por el autor de este artículo), la espiritualidad burguesa. Goethe no pudo admitir que un destino digno del hombre sea ser sólo "escritor", "ingeniero" o "profesor de Metafísica". Intentó —utópicamente, sin duda, con fracaso— alcanzar la única autenticidad por la que vale la pena "ser un hombre". La integridad armoniosa de la persona, para expresarse con fórmula suya (5).*

A pesar del tiempo transcurrido desde su fallecimiento, Goethe mantiene permanentemente su actualidad. Buena prueba de ello es que, en el reciente referéndum internacional sobre los mejores autores europeos, haya quedado en cabeza después de Shakespeare. En consecuencia, merece la pena conocer cuál es su perspectiva marxista.

NOTAS

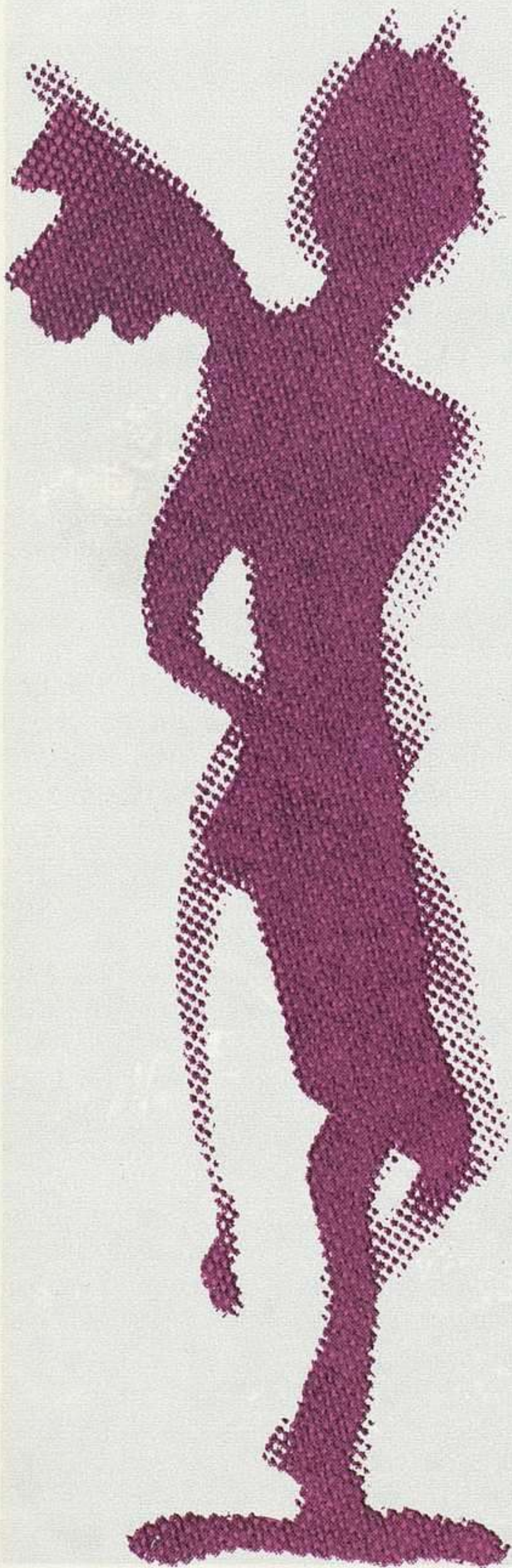
(1) J. W. Goethe, "Memorias de mi vida. Poesía y verdad". Editorial Tebas. Madrid, 1979. Pág. 311.

(2) Enzo Orlandi, "Goethe". Editorial Prensa Española. Madrid, 1971. Pág. 123.

(3) Jean Freville, "Textos escogidos de Marx y Engels sobre arte y literatura". Ediciones Revival. Buenos Aires, 1964. Págs. 104 y 105.

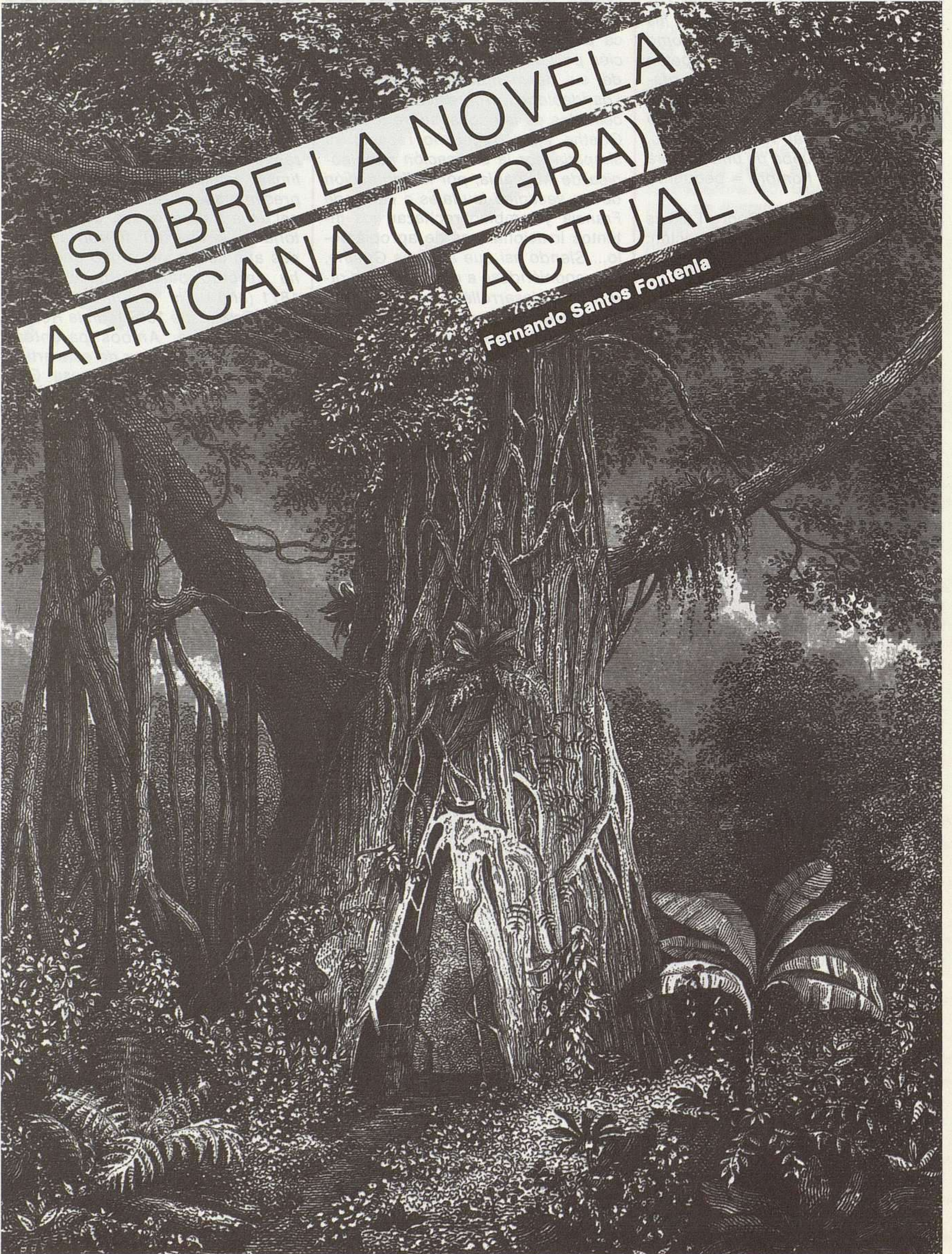
(4) Georg Lukács, "El asalto a la razón" (La trayectoria del irracionalismo desde Schelling a Hitler). Editorial Grijalbo. Barcelona, 1968. Págs. 35 a 101.

(5) Manuel Sacristán, "Lecturas: 1. Goethe. Heine". Editorial Ciencia Nueva. Madrid, 1967. Págs. 14 a 20 y 64.



**SOBRE LA NOVELA
AFRICANA (NEGRA)
ACTUAL (I)**

Fernando Santos Fontenla





Un proverbio bantú dice que la historia del león siempre la ha escrito el hombre, porque es él quien ha cazado al león. Si el cazador hubiera sido el león, entonces éste habría escrito la historia del hombre.

Algo parecido ocurre con la historia y con la literatura de los pueblos oprimidos, y muy especialmente de los africanos. Así, hay gente que al hablar de literatura africana se refiere únicamente a blancos como Isak Dinesen y Alan Paton, muy respetables, sin duda, pero no precisamente

africanos *de nación*. Quizá esa ignorancia guarde relación con el conocido proverbio de que *no hay mejor sordo que quien no quiere oír*. Pero quizá también existan otras razones más condicionantes: para eludir el "fantasma" de la responsabilidad histórica colectiva (y pongo el término entre comillas porque no creo en ese fantasma) no hay mejor cosa que eludir la búsqueda de la realidad —actual o histórica—, con lo cual basta con aceptar pasivamente los clichés recibidos. Así no hace falta la fatigosa labor de pensar por cuenta propia, individual ni colectivamente.

En un momento de gran auge de la narrativa —y también, aunque en menor medida, de la poesía y el teatro— en África negra, grandes sectores del mundo culturalmente "europeo" (valga la generalización) siguen sumidos en el mayor desconocimiento acerca del auge literario en las ex colonias, auge sólo comparable al latinoamericano en cuanto a narrativa se refiere, por compartir una serie de características: estilísticas, vitales, de realismo mágico, de inserción en una tradición local, empleo de técnicas autóctonas de narración, etcétera, sino también de compromiso —en un sentido u otro— con una situación política y social determinada y determinante.

Igual que no todos los novelistas latinoamericanos toman el mismo partido, tampoco lo hacen los novelistas del África negra. Pero en el caso de estos últimos, la visión de la realidad circundante es mucho más obsesiva y generalizada. Después de todo, por abrumador que sea el subdesarrollo latinoamericano, el africano llega a los niveles de la deshumanización más alucinante. El literato, como espejo deformante o deformado de su tiempo y su lugar, no puede sino en cierta medida escapar a ello.

A pesar de todo, algunas de las antiguas —o nuevas— potencias coloniales se hacen eco de lo que en sus —¿ex?— colonias se escribe, lo cual hace todavía más inexplicable esa falta generalizada de difusión a la que aludíamos al principio, tan grave que incluso los interesados desde hace años en el tema, como es mi caso, carecemos de datos completos, y no podemos ir reuniendo libros africanos sino al azar de viajes esporádicos a países de ese continente o a los pocos países occidentales en los que se encuentran con cuentagotas.

Heinemann, Penguin, Fawcett, etcétera, en inglés; Seuil, Livres de Poche, Chastel, Harmattan, Maspero, etcétera, en francés, llevan más de veinte años publicando libros de autores africanos. Y, sin embargo, éstos siguen siendo poco conocidos, salvo entre los especialistas. No digamos en España (y mucho me temo que en América Latina), donde en general la tentativa de darlos a conocer suscita, más que curiosidad, un asombro teñido de incredulidad o incluso risa.

Y, no obstante, ahí está esa pléyade de novelistas, desde Achebe y Beti hasta Laye y Ngugi, desde Ekwensi y Uologuem hasta Usmán y Ruheni, pasando por incontables más; escritores todos ellos dotados de una tremenda fuerza y una gran autenticidad.

La novela africana poscolonial tiene una extraña unidad dentro de su diversidad. Existe, entre otros, un motivo lingüístico: estos autores no escriben en sus idiomas maternos —swahili, ibo, yoruba, bambara, bantú, etcétera—, sino en los dos idiomas de las potencias coloniales: inglés y francés (insisto en que de momento me refiero sólo a la literatura al Sur del Sahara). Esto ya los obliga a proceder a una reflexión diferenciada de la de los autores que utilizan su propio idioma materno, reflexión comparable —pongamos por caso— a la de los autores catalanes cuando se han visto *obligados* a escribir en castellano (una excepción importante es la de Ngugi, quien cada vez escribe con más frecuencia en gikuyu, aunque luego sus obras salgan traducidas al inglés).

En segundo lugar, la independencia política data sólo, en general, de hace un cuarto de siglo, de manera que el trauma colonial está muy reciente en la conciencia de los intelectuales y de sus compatriotas. Hay como una serie de hilos conductores temáticos en estas novelas: la colonia, la independencia, el neocolonialismo, el racismo que de hecho sigue imperando en África, la corrupción de tantos de los nuevos dirigentes...

En tercer lugar, la mayor parte de los novelistas africanos mezclan sin rebozo las técnicas modernas de narración con las tradicionales de sus propios pueblos: las de la narración oral, en la que el cuentista se interrumpe, se dirige a los oyentes, les recuerda o les anuncia algo. Hay ocasiones, sobre todo en las novelas picarescas de ambiente urbano, en las que da la sensación de que el novelista se limita a transcribir literalmente algo que ha oído a un narrador callejero, con toda la frescura y la jugosidad que eso entraña. Nada más lejos de la verdad. Como todo el mundo sabe, la sensación de espontaneidad es la más difícil de dar por escrito.

Hecha esta introducción, y sin ánimo en absoluto de establecer un catálogo de autores y títulos, pasemos a hacer una breve panorámica de algunas de las principales figuras a las que nos referimos.

Diablo crucificado

A mi juicio, muy personal y nada ortodoxo, el keniano Ngugi wa Thiong'o no es sólo uno de los autores más prolíficos, sino también más importantes: novelas, cuentos, ensayos, obras de teatro. Ngugi nació en 1938 en Limuru y se educó en la *alma mater* de tantos africanos orientales, la Universidad de Makerere, antes de proseguir estudios en Inglaterra y en los Estados Unidos. Ha sido jefe del Departamento de Literatura de la Universidad de Nairobi, de cuyo cargo se le expulsó hace ya años por motivos políticos (resultaba demasiado "rojo" para la oligarquía neocolonial que gobierna el país ininterrumpidamente desde que Kenyatta subió al poder y se inició la liquidación del movimiento patriótico del Mau-Mau). Además, hostigado por las fuerzas del poder, ha sido detenido varias veces, la última de las cuales tuvo por resultado su brillante ensayo *Detained*

(1981). Las circunstancias no le han impedido seguir escribiendo. Su última novela, *Devil on the Cross* ("El Diablo crucificado", 1982), mezcla una vez más ritmos africanos tradicionales con técnicas narrativas modernas internacionales, y es una denuncia a través de símbolos del mal de la corrupción reinante en el país por conducto de una fiesta diabólica en Ilmorog (el microcosmos recurrente en la obra de Ngugi, una especie de condado de Yoknapatawpha keniano). Desde el principio, con *Weep Not Child* ("No llores, hijo", 1964), ha sido un autor comprometido, y cuyo compromiso ha ido evolucionando hacia formas —tanto literarias como políticas— cada vez más radicales. Si en *Weep* había una interrelación entre los colonos blancos de la época de la lucha por la independencia y los aparceros negros, y en *The River Between* ("El río de en medio", 1965) el protagonista, Waiyaki, negro de cultura blanca, se veía atacado por negros y blancos al tratar de combinar lo mejor de ambas culturas, en *Petals of Blood* ("Pétalos de sangre", 1977), Ngugi ya coloca al cuarteto protagonista, Munira, Wanja, Karaga y Abdulla, en un contexto puramente africano, en el que los blancos sólo se ven como intrusos dominantes y explotadores, distantes, que sólo intervienen por conducto de sus marionetas locales, sin mancharse las manos. Se trata de una constante *búsqueda de pertinencia*, como dice el mismo Ngugi en *Writers in Politics* ("Los escritores en la política", 1981), de *no asumir una estabilidad estática... de la vida y la sociedad (ibíd.)*, de *reconocer el carácter global del imperialismo y el carácter y la dimensión globales de las fuerzas que luchan contra él para edificar un mundo nuevo (ibíd.)* Todo ello está plenamente asumido por Ngugi, cuya obra —que yo sepa— no está traducida al castellano hasta ahora más que en Cuba, lo cual también es significativo.

Otras obras de Ngugi: *Secret Lives* ("Vidas secretas", 1975, cuentos), *A Grain of Wheat* ("Un grano de trigo", 1967, novela), *The Black Hermit* ("El ermitaño negro", 1968, teatro), *The Trial of Dedan Kimathi* ("El juicio de D. K.", en colaboración con Micere Githae Mugo, 1976, obra de teatro sobre el asesinato "legal" del gran líder independentista que da su nombre a la obra), *I Will Marry When I Choose* ("Me casaré cuando yo quiera", en colaboración con Ngugi wa Miriri, 1977, obra de teatro), *Homecoming* ("Vuelta a casa", 1972, ensayos).

Este tiempo africano

Otro autor importantísimo, al otro extremo del continente africano, Nigeria, es Chinua Achebe, que quizá sea el más famoso de los novelistas africanos en inglés. Su producción, extrañamente reducida, alcanza especial altura en la captación de los diálogos. Se trata de un autor de gran economía de medios, que utiliza con ironía unas descripciones aparentemente *objetivas* para trazar unas imágenes punzantes, a veces mordaces, de su tiempo africano y de los inmediatamente anteriores. Su primera novela, *Things Fall Apart* ("Todo se derrumba", 1958), parte de un cuadro aparentemente idílico de una comunidad africana rural a fines del siglo pasado o principios de éste, que se ve repentinamente invadida por un grupo de misioneros blancos. Y, claro, detrás de la cruz llega como siempre la espada. El mundo de

Okonkwo, el personaje central, literalmente se derrumba. Pero antes se ha derrumbado la inocencia aparente. Achebe, como africano, no se cree obligado a mitificar al "buen salvaje", como tantas veces han hecho los europeos "bienintencionados", y ha ido revelando una serie de fallas y de lacras en el clan de Umuofia, que es el personajes colectivo del libro. Lo que sí destaca Achebe es que esas lacras y esas fallas son las *propias*, las características de los africanos en su *propio continente*, *mientras que las traídas y las impuestas por los blancos son ajenas*. Más tarde Achebe publica *Arrow of God* ("La flecha de Dios"), *A Man of the People* ("Un hombre del pueblo") y *No Longer at Ease* ("Se acabó la tranquilidad"), que si se leen en sucesión constituyen con la primera novela una tetralogía casi histórica: la serie de pasos desde la sociedad precolonial hasta la corrupción y la hipocresía neocoloniales. Achebe va trazando implacablemente la historia de los que Ngugi califica de *mensajeros*, primos hermanos sociológicos de los "ladinos" de Centroamérica y Sudamérica, que al mismo tiempo que se enriquecen a costa de sus pueblos no son sino meros intermediarios del gran capital extranjero. Pero Achebe es hombre de largos silencios, quizá comparable en ese sentido a Juan Rulfo. Hecha su tetralogía, en la segunda parte de la cual describe magistralmente otro de los temas constantes de la novela africana: la urbanización acelerada informe y caótica, con sus fenómenos de aculturación y transculturación masivos, se dedica cada vez más a tareas académicas, lo cual no le impide comprometerse activamente en la guerra de Biafra, en relación con la cual escribió: *Para mí es evidente que un escritor africano de creación que trate de eludir las grandes cuestiones sociales y políticas del Africa contemporánea acabará por no valer para nada, como aquel hombre absurdo del proverbio que deja que su casa arda por perseguir a una rata que huye de las llamas* (Achebe, *The African Writer and the Biafran Cause* ("El escritor africano y la causa de Biafra"), 1975).

En ese compromiso, Achebe, el decano de la moderna novela africana, se vio secundado por otros autores como Gabriel Okara y Cyprian Ekwensi. Este último, autor entre otras cosas de *Jagua Nana* (1961), *Restless City* ("La ciudad inquieta") y *People of the City* ("Gente de la ciudad", 1969) es otro de los escritores que tratan insistentemente del fenómeno enajenante de la urbanización acelerada en Africa, de la lumpenización de los trabajadores y la corrupción de las clases autóctonas dirigentes. Su novela *Survive the Peace* ("Sobrevivir a la paz", 1976) se centra precisamente en lo que ocurre tras la guerra de Biafra, cuando aparentemente han callado los fusiles, pero la destrucción, de otra forma, continúa incesante.

(Por motivos puramente técnicos, y sin que ello implique una minusvaloración, adrede se deja fuera de estas notas la novela africana al Norte del Sahara, sea escrita en árabe o en francés o inglés, y las notas se limitan a la novela escrita al Sur del Sahara, en inglés o francés, o incluso en swahili.)

Nuestra Bandera

LA IZQUIERDA

es parte de la historia de las ideas
y de la lucha de los comunistas.
SUSCRIBETE a la revista teórica
y política del Partido Comunista de España

SUSCRIPCION POR OCHO NUMEROS

España	1.650 ptas.
Europa y Norte de Africa ..	2.450 ptas.
América y Africa	2.750 ptas.
Asia y Oceanía	3.000 ptas.

Nombre

.....

Dirección: Calle

..... n.º D. P.

Población

Provincia

Deseo suscribirme a ocho números
de NUESTRA BANDERA,
empezando por el número

El importe de la suscripción lo haré efectivo:

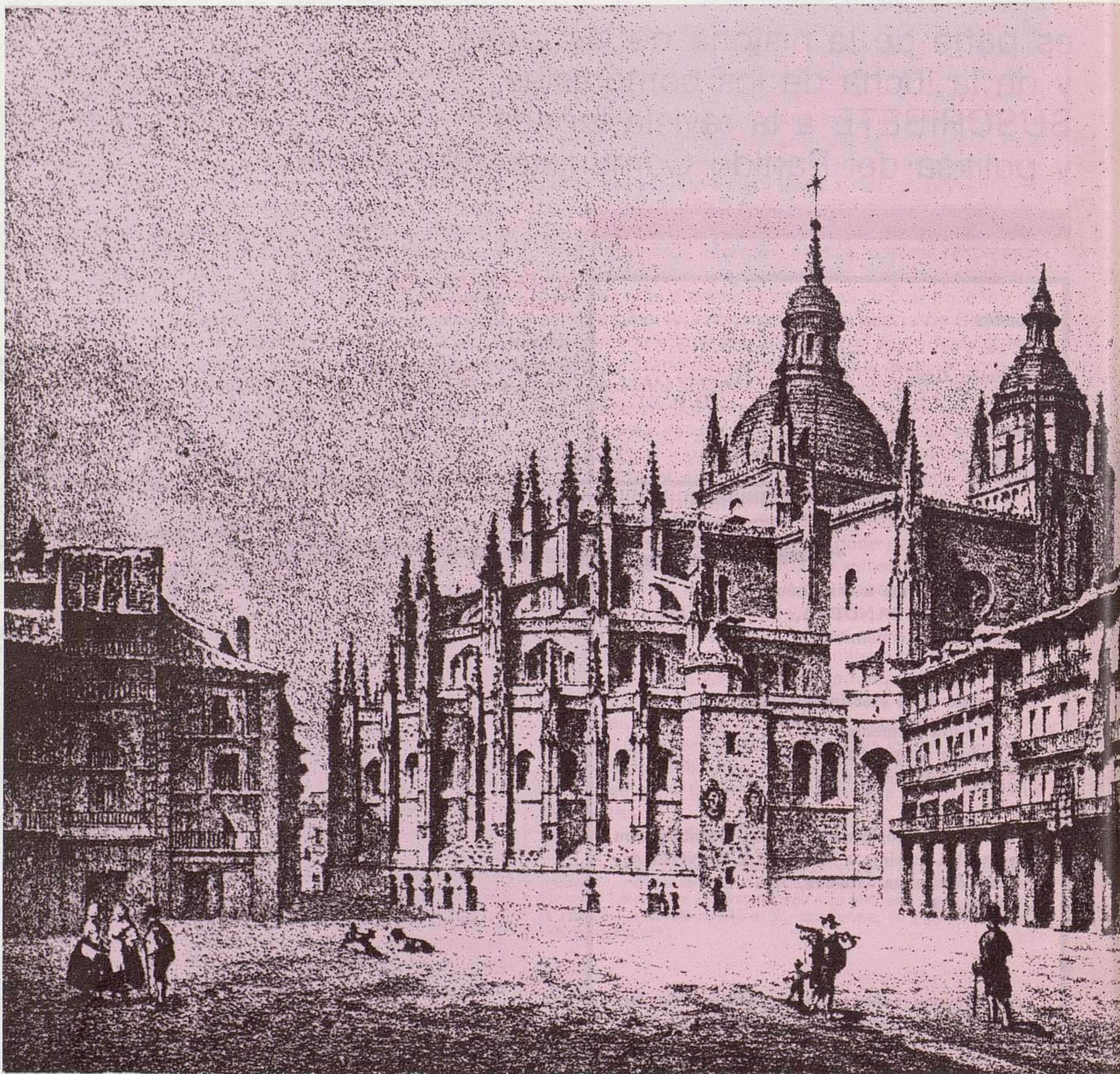
- Contra reembolso.
- Envío cheque bancario.
- Por giro postal n.º

Recórtese o cópiese este cupón. Escribase con
mayúsculas. Envíese a NUESTRA BANDERA.
Calle Santísima Trinidad, 5.
Madrid-10.

Los suscriptores recibirán como obsequio la edición fac-
simil que recoge los números 1 y 2 de NUESTRA BAN-
DERA (1937).



PATRIMONIO HISTORICO E INTERESES COLECTIVOS



El capital no hace ciudad

Hace ya diecisiete años el Consejo de Europa inició una campaña sobre protección del patrimonio arquitectónico, positivamente acogida por todos los Gobiernos. El triple proceso de expulsión de habitantes —inseparable del de terciarización del centro—, degradación ambiental y deterioro o demolición, y los progresivos desequilibrios y desaparición de usos y actividades históricas han venido a demostrar la incapacidad del capital europeo para hacer ciudad.

Obviamente, la situación española ha sido peor aún dada nuestra no pertenencia a dicho Consejo y dado el carácter brutal de nuestro capitalismo cebado en el serrallo dictatorial. La cultura oficial, análoga a la del monumentalismo grandilocuente mussoliniano, se caracterizó, en síntesis, por los siguientes hechos:

- Desprecio de la estructura social, lo que generó la expulsión de los vecinos.
- Desprecio de la estructura funcional, lo que generó cambio de usos.
- Desprecio de la estructura geográfica, lo que generó la agresión "quirúrgica" sobre tejido, trama, morfología, alineaciones...
- Desprecio de la forma ambiental y de la memoria visual colectiva, lo que "liberó" los monumentos de su medio por destrucción de las *obras menores* adheridas o próximas, inventando así antigüedades, falsificando murallas, restaurando, que no conservando, las piezas más aprovechables para el gesto ostentoso e imperial.

En resumen, se destruyó con toda crueldad el organismo urbano medieval o barroco en todos sus tejidos, a sabiendas de que dichos modelos históricos, desde el punto de vista del ciudadano, son difícilmente superables.

La situación en los últimos años ha variado por diferentes motivos, entre los que cabe destacar los siguientes:

- Crisis energética y económica, que da lugar a un replanteamiento de los costos de la demolición, a la vez que al intento de sustitución de los modelos socialdemócratas, en cuanto a gestión inteligente del capital, por los más feroces neoliberalis-

LOS centros históricos, en el más amplio sentido de la expresión, deben ser considerados, con toda justicia, como los más ricos e importantes en complejidad y trascendencia de todos los ecosistemas. El supremo artificio, la ciudad, al igual que se ha dicho de la costumbre, es una segunda Naturaleza...

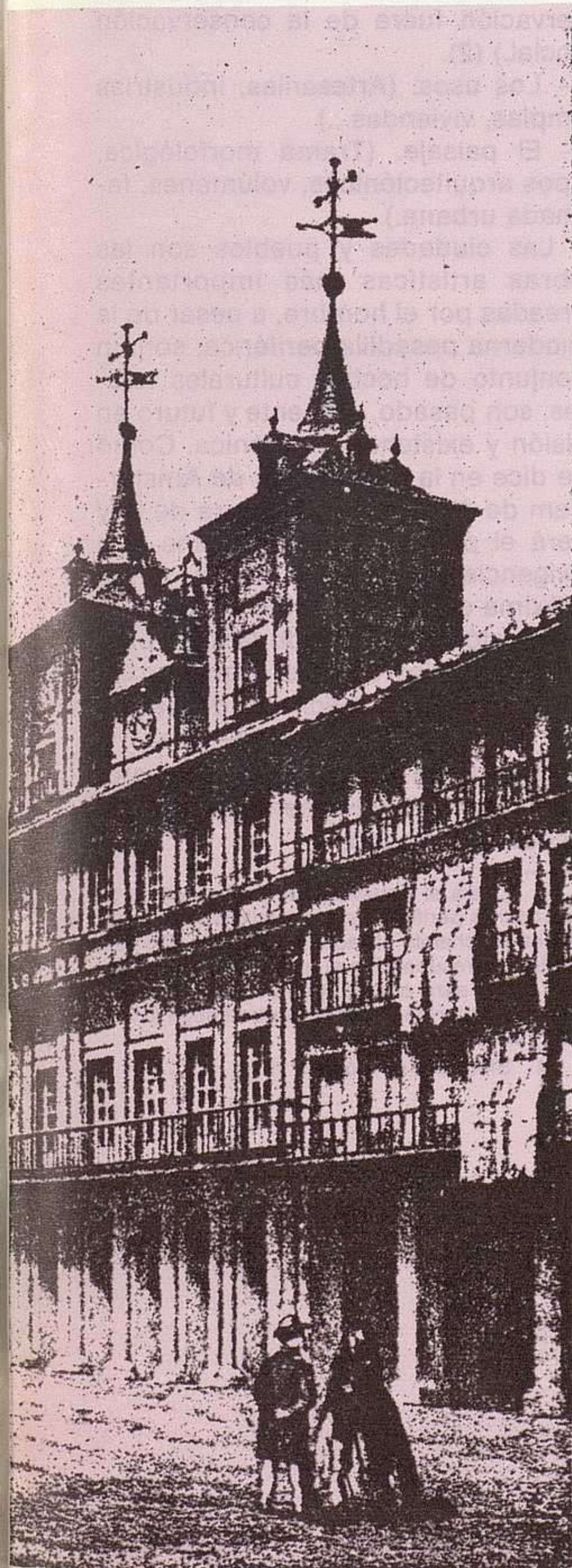
Cuando Oscar Wilde escribe que *la Naturaleza imita al arte* parece anticiparse a nuestra visión urbana medioambiental. Si bien habitualmente los movimientos y reivindicaciones ecológicas han estado chatamente dirigidos a los tradicionales *aguas, aires, bichos y plantas* bajo un prisma biologista, paisajista y romántico, parece que cada vez más, afortunadamente, van recuperando sus orígenes antropológicos y etimológicos: el zoom politikon y su casa, su nido, su oikos, su ciudad. El hilo conductor entre economía-ecología-casa-polis-política se va convirtiendo en la cadena que nunca debiera haberse roto.

Ese ecosistema de escala humana, esa Naturaleza humanizada, sin olvidar nunca sus aspectos sociales, debiera ser, cuanto antes, el alfa y omega de todo programa mediamiental que quiera trascender sobre la cursilería arcádica y la defensa de la ballena por la ballena misma. Así pues, no basta con una visión ecológica de la ciudad como agregación de seres humanos, ni tan siquiera de la urbe como organismo vivo a su vez objeto de un cariño biologista; debemos exigir una concepción recíproca: una concepción urbana; es decir, política, de cualquier tentativa ecológica; en resumen, una civilización (*civitas*) del medioambientalismo montaraz, "emiliano", salvaje.

La pertinencia, pues, del tema *patrimonio monumental*, como parte del ecosistema no sólo es inteligente y oportuna, sino que, por lo antedicho, también se convierte en imprescindible.

El patrimonio arquitectónico urbano, y no por afán de darle mayor protagonismo, se convierte en el eje de cualquier actuación dirigida a la ciudad como ecosistema habitacional, como biorrecurso económico, como medio y fin, método y objetivo hacia la obtención de una sociedad más feliz.

Antonio Miranda



mos que en nombre de un "calvinismo progresista" desembocan en lo que Buchanan llama acertadamente *anarquismo de derechas*.

- Inacabable crisis del movimiento moderno, cuyos dogmas de higiene personal y social hacían declarar a García Mercadal en los años 30 que era necesario, dada su imposible salvación, destruir los centros urbanos, para introducir el esquema desafortunado de grandes vías rápidas y bloque abierto.

- Las secuelas del fracaso del mayo del sesenta y ocho, que en larga degeneración van llevando al desencanto, romanticismo abandonado, antiprogresismo y defensa del crecimiento cero, milenarismo temeroso y nostalgia (la única justificable) del modelo —digo sólo modelo— de la ciudad del pasado.

Las actuales debilidades estructurales e institucionales de nuestro sistema, con tan pocos años de andadura democrática, se manifiestan tanto en las contradicciones del libre mercado como en la falta de legislación moderna y coordinación científica. En primera aproximación nacería la dualidad *liberalismo-vanguardia-contraste* frente a *intervencionismo-pastiche-mimesis*, de difícil solución en el plano de la política económica, pero creo que no tanto en el terreno medioambiental, urbanístico, arquitectónico de los centros históricos que ahora vamos a intentar definir como patrimonio monumental.

La citada solución sintética de contradicciones puede empezar por analizar los cuatro enfoques aislados que a continuación se expresan en torno al tema del centro urbano:

- Enfoque funcionalista: tecnocrático, acultural, pragmático, apolítico.
- Enfoque sociologista: cientifista, humanista, crítico, antiarquitectónico.
- Enfoque formalista: monumentalista, fachadista, taxidermista, escenográfico.
- Enfoque ecologista: idílico, idealista, fisiocrático, ludista, apolítico, ajeno a las luchas de clase.

No se puede dudar de que la síntesis de los objetivos de los cuatro enfoques anteriores es inviable sin profundas transformaciones socioeconómicas, del mismo modo que será difícil y necesario hacer compatibles las apetencias que sobre la ciudad puedan tener intereses tan dis-

parecidos como los del economista, el sociólogo, el arqueólogo, el constructor, el alcalde, el arquitecto, el niño, el turista, el habitante... Tendríamos que empezar por ver qué entendemos por patrimonio monumental.

El patrimonio histórico

Patrimonio arquitectónico, patrimonio histórico, urbanístico, es en principio toda la ciudad con excepción de las piezas que por su nulo valor y estado claramente ruinoso la ley exige demoler. En cuanto a la dudosa calificación de "histórico" no hay motivo para considerar más histórico lo más antiguo; sólo una rancia interpretación de linajes y abuelos puede llevarnos a la aberración de considerar una obra vulgar añeja superior a otra moderna de objetiva calidad. Como contrapunto de la cita aludida de Mercadal, podemos acoger la propuesta de Benévolo sobre *el interés que tendría la destrucción de las periferias nacidas al amor del desarrollismo de los años sesenta*. Ambas propuestas esconden una actitud vergonzante respecto al pasado histórico que, con un patriotismo mal entendido, se pretende escamotear, ocultar y hacer desaparecer de la mala conciencia colectiva y su memoria aneja.

Aunque sólo fuera por el valor del testimonio de la historia real —al margen del despilfarro que representa la demolición indiscriminada— merecería la pena la conservación masiva. Bien es cierto que la periferia ha sido la causa de la destrucción de centros históricos a la vez que del suelo agrícola periférico —inseparable asimismo del concepto de patrimonio—, pero los errores no se destruyen, se asumen y se disuelven y resuelven en una dialéctica sensata que transforme las consecuencias de dichos errores pasados en aciertos futuros.

Así pues, debemos aceptar y respetar como patrimonio la ciudad en su totalidad, impidiendo simultáneamente su extensión periférica en beneficio de un territorio circundante que habrá de ser considerado como el medio ecológico de ese ser vivo que es la ciudad (1).

Hasta ahora, y especialmente en

los últimos años en los que se ha destruido artificialmente cien veces más de lo que la propia ciudad fue sustituyendo naturalmente a lo largo de toda su historia, la ciudad ha tenido que someterse a nuevos usos y artefactos para los que no había sido concebida. Ahora, que parece llegamos a los techos de ocupación poblacional, puede ser el momento de empezar a pensar en usos y funciones que se sometan a la ciudad existente.

El patrimonio es la ciudad en su totalidad, lo cual implica, cuando menos, los siguientes bienes:

- Los habitantes. (No existe conservación fuera de la conservación social.) (2).
- Los usos. (Artesanías, industrias limpias, viviendas...)
- El paisaje. (Trama morfológica, tipos arquitectónicos, volúmenes, fachada urbana.)

Las ciudades y pueblos son las obras artísticas más importantes creadas por el hombre, a pesar de la moderna pesadilla periférica; son un conjunto de hechos culturales totales; son pasado, presente y futuro en visión y existencia sincrónica. Como se dice en la declaración de Amsterdam de 1975, la arquitectura de hoy será el patrimonio del mañana y la exigencia de calidad ha de ser la máxima cuando se actúe en los centros históricos, evitando tanto el pastiche mimético como el "vanguardismo" rompedor, difícil filo de navaja por el que tendremos que pasar si no queremos que la arquitectura moderna sea definitivamente expulsada del centro urbano.

(1) Quizá el sistema peor y más dañino de extender la periferia es por medio de urbanizaciones de chalets aislados en parcela. De este modo es irreparable el tejido, tanto para ciudad como para campo, generándose con ello una masa híbrida suburbana que ahoga la ciudad y aleja al campo.

(2) Simposio de Bolonia 1974.



LIBROS DE LA F.I.M.

60 AÑOS DE LA HISTORIA DEL P.C.E.

M. Tuñón de Lara, A. del Rosal, M. Reberioux, A. Elorza y otros **400 ptas.**

VIAS DEMOCRATICAS AL SOCIALISMO

C. Buci-Glucksmann, P. Ingrao, N. Sartorius, A. Schaff y otros **300 ptas.**

LOS INTELLECTUALES Y LA SOCIEDAD ACTUAL

M. Vázquez Montalbán, N. Sartorius y otros. **50 ptas.**

SOBRE LA DROGA

Varios autores **125 ptas.**

EL ABORTO, UN TEMA PARA DEBATE

A. Sopena, J. L. Barbero, G. Labate y otros. **250 ptas.**

LA BIOLOGIA EVOLUCIONISTA Y LA DIALECTICA

F. Cordón **150 ptas.**

LA FUNCION SOCIAL DEL INTELLECTUAL

J. L. Aranguren, A. de Miguel, I. Fernández de Castro, C. París y otros. **250 ptas.**

LA PSICOLOGIA COMO CIENCIA

Varios autores. **300 ptas.**

EL MARXISMO EN ESPAÑA

J. Fontana, G. M. Bravo, C. Forcadell, S. Juliá, R. Pastor de Toguero, A. Schmidt y otros. **300 ptas.**

LA TEORIA ECONOMICA MARXISTA Y EL CAPITALISMO CONTEMPORANEO

P. Boccara, J. M. Vidal Villa, C. Berzosa y otros. **225 ptas.**

EL PENSAMIENTO POLITICO DE DIMITROV

A. Agosti, L. Marcou, D. Sirkov, P. Petkov, A. Elorza, y otros. **1.000 ptas.**

MUJER, DESARME Y MILITARISMO

E. Braunw, I. Perrar, y otras (en preparación).

TEORIA E INTERVENCION EN LA CIUDAD

G. Campos Venutti, F. Terán, J. Borja, D. Quero, E. Preteceille (en preparación).

EL ORIGEN DE LA FAMILIA, CIEN AÑOS...

J. Trías y otros (en preparación).

Pedidos a la Fundación de Investigaciones Marxistas, calle de la Alameda, 5, 28014. MADRID, o en las organizaciones del PCE.

LA HISTORIA



CASTELLÓ

CUANDO ENTRARON EN COMBATE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES

Santiago Alvarez

ESTA es, también, una cuestión histórica, importante y que, como hemos visto en el programa reciente de Televisión "España, historia inmediata", no está clara. Porque una cosa son las centurias o los grupos iniciales y otra distinta, en cantidad y calidad, son las Brigadas.

A propósito de los combates de los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre y del hecho de que Madrid no fuese tomada entonces por las tropas del general Franco, se han hecho muchas especulaciones. Una de ellas es la de que quienes salvaron Madrid fueron las Brigadas Internacionales. Por ello conviene precisar los siguientes hechos históricos.

1.º La XI Brigada Internacional, llegada de Albacete a Madrid, tres días después de recibir la orden de traslado, que fue el día 5 de noviembre, desfiló el día 8 por Vallecas y, posteriormente, por la Gran Vía. Su entrada en línea se produjo durante la noche del 8 al 9 de noviembre, realizando su primera acción, es decir, contraatacando a las fuerzas franquistas, el día 9.

2.º Si se tiene en cuenta que el ataque principal de las tropas dirigidas por el general Varela, con el objetivo de tomar Madrid, se produjo durante los días 6, 7 y 8 de noviembre, y que, en esta última fecha el ataque general fue rechazado, queda históricamente claro que la defensa de la capital, en aquellos días cruciales de noviembre, la realizaron el pueblo de Madrid y las fuerzas militares españolas, aunque su organización fuese aún incipiente.

3.º Esta afirmación no niega el hecho trascendental de que la llegada de la mencionada unidad internacional (la XI Brigada) al sector de la Casa de Campo y de la Ciudad Universitaria, revistió, moral y militarmente, gran importancia.

"Fue en el preciso momento —escribe Andre Marty— en que retumbaba la batalla en las primeras casas de la ciudad, cuando el 8 por la mañana, llegó a Vallecas, la primera Brigada Internacional (XI Brigada) con sus tres batallones: *Edgar André*, *Comuna de París* y *Dombrowski*. La mandaba el general Kleber

(húngaro); su comisario era el italiano Nicoletti y su jefe de Estado Mayor, el coronel Vicente, ex oficial del Ejército francés.

El 9 de noviembre, el batallón *Comuna de París* (franceses, belgas, españoles, comandante Dumont, francés; comisario Rebiere, francés;) y el *Dombrowski* (polacos, húngaros, comandante Bolek) cortan el camino de la Ciudad Universitaria al enemigo. El batallón *Edgar André* (alemanes, austriacos, escandinavos, balcánicos, comandante Hans) contraataca en el Puente de los Franceses, librándose un combate encarnizado".

"Así, pues —dice Luigi Longo—, la primera Brigada Internacional sale para el frente 21 días después de la llegada de los primeros voluntarios a Albacete. El 8 de noviembre está ya en Vallecas, en Madrid. Desfila por las calles solemnemente, impecable, con paso marcial. Los hombres forman un todo compacto, disciplinado, que da una impresión de voluntad y de fuerza admirables. A la vista de ellos, la muchedumbre estalla en aplausos, saluda con el puño cerrado, grita su admiración y su entusiasmo. Es la primera vez que Madrid ve desfilar, rígidamente encuadrada, una unidad del nuevo Ejército Popular; siente que la nueva organización, la nueva disciplina, de las que tiene ante sus ojos un ejemplo admirable, harán invencibles a las decenas de millares de combatientes y de héroes que ya ocupan sus trincheras..."

La XI Brigada Internacional acude a tomar posiciones allí donde el peligro parece mayor, donde las tropas enemigas, en un ataque por sorpresa, han logrado atravesar el Manzanares. El 9 de noviembre, los batallones *Comuna de París* y *Dombrowski* toman posiciones en la carretera que conduce a la Ciudad Universitaria y cierran el paso a los fascistas. El Estado Mayor de la Brigada se instala en la Facultad de Filosofía. A medianoche, el batallón *Edgar André* contraataca en el Puente de los Franceses. Después de combates encarnizados, los voluntarios internacionales se apoderan del Parque del Oeste, consiguen reconquistar el Puente de los Franceses, arrojar al enemigo más allá del Manzanares y fortificarse en la Casa de Campo.

"No debemos permitir —dice Pie-

¡Proletarios de todos los países, uníos!

Resistencia

ORGANO CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA (S.E.C.)

En la grave situación actual tenemos que ir muy de prisa, pero

TODOS JUNTOS UNIDAD ACTIVA ¡PRODUCIR!

COMO LOS OBREROS DE SAGURO

¡Resistencia! En el momento actual, cuando la guerra civil española se prolonga ya en su tercer año, cuando el ejército franquista ha conseguido ya ocupar la mayor parte del territorio de España, cuando el pueblo español sufre una situación de extrema gravedad, cuando el hambre y la muerte acechan a millones de españoles, cuando el mundo entero observa con creciente interés el desarrollo de la guerra de España, cuando el pueblo español sufre una situación de extrema gravedad, cuando el hambre y la muerte acechan a millones de españoles, cuando el mundo entero observa con creciente interés el desarrollo de la guerra de España...

GENERE, BOMBARDEADO POR LOS ALEMANES

Los aviones fueron puestos en fuga por los cañones antiaéreos

¡ESTAMOS ANTE UNA SITUACION GRAVE, HERISTRO FORBERER ESTA AMENAZADO—DICE EL MARSHAL RETAIN

BONNET DICE QUE PROTESTARA ENERGICAMENTE

Paris, 27—El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bonnet, ha dicho que protestará energicamente contra la agresión italiana.

MARIANA PINEDA, heroína de la independencia de España



En la noche del 26 de mayo de 1808, Mariana Pineda fue fusilada en la plaza de San Felipe, en Madrid, por haber participado en la resistencia a la invasión francesa.

Resistiremos

A PESAR DE LA "NO INTERVENCION"

LA SIGUA MANDADA DEL GOBIERNO ESPAÑOL...

¡Resistencia! En el momento actual, cuando la guerra civil española se prolonga ya en su tercer año, cuando el ejército franquista ha conseguido ya ocupar la mayor parte del territorio de España, cuando el pueblo español sufre una situación de extrema gravedad, cuando el hambre y la muerte acechan a millones de españoles, cuando el mundo entero observa con creciente interés el desarrollo de la guerra de España...

CAMPESINAS LA VEGA DE TIELMES



Las campesinas de Tiernes trabajan en sus campos...

Los evadidos del fuerte de San Cristóbal disponen de más de 900 fusiles

Los evadidos del fuerte de San Cristóbal disponen de más de 900 fusiles...

LOS ASESINOS EXTRANJEROS

Los asesinos extranjeros...

HEROES DE CERRO GORDO

Los héroes de Cerro Gordo...

UNA LUCHA QUE CORRESPONDE A TODO EL PUEBLO

Una lucha que corresponde a todo el pueblo...

MOVILIZACION GENERAL

Movilización general...

sivo, ni en la detención del ataque inicial ni en la resolución de la batalla". (General Vicente Rojo en *Así fue la defensa de Madrid*.)

Lo mismo opinaba el general Kleber y Willy Bredel (*Del Ebro al Volga*) y el checoslovaco Arthur London, autor del libro *España España*.

La presencia de la XII Brigada Internacional en el sector del Cerro de los Angeles a partir del día 13 de noviembre fue también importante, aunque los propósitos tácticos de llevar a cabo una contraofensiva en ese flanco no se realizaron y, por tanto, su presencia tuviese menos relieve que la de la XI en el Puente de los Franceses y en la Casa de Campo.

Mi conclusión es que la presencia de las Brigadas Internacionales en los frentes de la capital durante las difíciles jornadas de noviembre de 1936 facilitó la defensa de nuestras posiciones y, además, representó una extraordinaria aportación moral, tanto para el Ejército Popular como para la población de Madrid. Pero esa realidad no modificó el hecho histórico que dejamos expuesto.

Frentes en el que actuaron las Brigadas Internacionales

Ello no oscurece el papel que dichas Brigadas desempeñaron tanto en ese momento como en su actuación posterior en los frentes más importantes de la guerra civil incluido el frente de Madrid. Me refiero concretamente a las batallas de Pozuelo y Majadahonda, noviembre y diciembre de 1936, XI y XII Brigadas; Jarama, febrero de 1937, XI, XII, XIV y XV; Guadalajara, marzo de 1937, XI y XII; Brunete, julio de 1937, XI, XII, XII y XIV; Belchite, agosto de 1937, XI, XII y XIV; Teruel, enero de 1938, XI y XV; Alcañiz-Gandesa (hundimiento del frente de Aragón), marzo de 1938, XI, XII, XII, XIV y XV; Ebro, julio, agosto, septiembre de 1938, XI, XII, XII, XIV, y XV.

Además de esas grandes batallas, unas u otras de las Brigadas partici-

tro Nenni en *La guerre d'Espagne*—que se acredite la leyenda de que las Brigadas Internacionales salvaron Madrid. Las Brigadas Internacionales fueron uno de los pilares de Madrid y esperaban ser uno de los pivotes de la contraofensiva. Pero fue el pueblo español quien salvó Madrid".

"La verdad es que las masas de Madrid habrían luchado amarga y sangrientamente, aunque la columna internacional no hubiera llegado" (Geoffrey Co. X. "Defensa de Madrid").

"Es evidente que las Brigadas Internacionales contribuyeron a la defensa de Madrid; pero también es cierto que no jugaron un papel deci-

paron también en otros 19 combates u otros frentes. Esto es también válido para la 129 Brigada que, separada de las otras por la llegada de las tropas de Franco al Mediterráneo, tomó parte en los combates de lo que hoy llamamos País Valenciano. Pero también lo es para las que lucharon en Andalucía: Lopera, Mirabueno, Motril o Pozoblanco; Balsain o Huesca, en Aragón, etcétera.

Para calibrar la aportación de las Brigadas Internacionales a la lucha del pueblo español hay que tener en cuenta que en agosto de 1938 el Ejército Popular contaba con 776 batallones (192 brigadas, 73 divisiones, 22 Cuerpos de Ejército y 6 Ejércitos), mientras que las Brigadas Internacionales eran 25 batallones, integrados en seis brigadas con el 75 por 100 de sus componentes ya españoles.

Sin embargo, a pesar de representar una ínfima minoría, en relación con el conjunto del Ejército Popular los *voluntarios de la libertad*, desde Madrid hasta el Ebro, formaron parte del Ejército de maniobra o de choque de la República.

Y es que el hecho histórico de Brigadas Internacionales tuvo entre el pueblo, en un primer tiempo en las filas del incipiente Ejército Popular, una repercusión mayor de lo que dichas unidades representaban como fuerza militar. Su presencia era una expresión desinteresada y heroica de la solidaridad internacional; mostraban a todos un modelo de organización militar y de disciplina y, por tanto, un ejemplo a imitar. La imagen de las Brigadas Internacionales inspiraba confianza y su comportamiento irradiaba las unidades del Ejército Popular y al pueblo entero.

LOS FRENTES EN QUE ACTUARON LAS BRIGADAS

1	<i>Ciudad Universitaria</i>	XI-XII	Noviem.-dic. 1936
2	<i>Cerro Rojo</i>	XII	Noviembre 1936
3	Pozuelo	XI-XII	Noviem.-dic. 1936
4	Majadahonda	XI-XII	Diciembre 1936
5	<i>Teruel</i>	XIII	Diciem. 36-enero 1937
6	<i>Lopera</i>	XIV	Diciem. 36-enero 1937
7	Mirabueno	XII	Enero 1937
8	<i>Motril</i>	XIII	Febrero 1937
9	Pitres	XIII	Febrero 1937
10	<i>Jarama</i>	XI-XII-XIV-XV	Febrero 1937
11	<i>Guadalajara</i>	XI-XII	Marzo 1937
12	<i>Pozoblanco</i>	XIII	Abril 1937
13	Piyarón	XII	Abril 1937
14	Garabitas	XII	Mayo 1937
15	Utande	XI	Mayo 1937
16	Balsain	XIV	Mayo-junio 1937
17	<i>Huesca</i>	XII	Junio 1937
18	<i>Brunete</i>	XI-XII-XIII-XV	Julio 1937
19	<i>Belchite</i>	XI-XIII-XV	Agosto 1937
20	Villamayor	XII-XIII	Agosto 1937
21	<i>Fuentes del Ebro</i>	XII-XIII-XV	Agosto 1937
22	Cuesta de la Reina	XIV	Octubre 1937
23	<i>Teruel</i>	XI-XV	Enero 1938
24	Segura de los Baños	XI-XV	Febrero 1938
25	Zalamea	XII-XIII-129	Febrero 1938
26	<i>Alcañiz</i>	XI-XIII-XV	Marzo 1938
27	<i>Caspe</i>	XII-XIV	Marzo 1938
28	Maella	XII-XIV	Marzo 1938
29	Montoyo	XII	Marzo 1938
30	Batea	XI-XIII-XV	Marzo 1938
31	Gandesa	XI-XII-XIII-XIV-XV	Marzo 1938
32	<i>Lérida</i>	XIII	Marzo-abril 1938
33	Aliaga	129	Abril 1938
34	Castellón	129	Julio 1938
35	<i>Amposta (Ebro)</i>	XIV	Julio 1938
36	<i>Ascó (Ebro)</i>	XI-XIII-XV	Julio 1938
37	<i>Corbera (Ebro)</i>	XI-XIII-XV	Julio 1938
38	<i>Sierra Cabals (Ebro)</i>	XI-XIII-XV	Agosto-sept. 1938
39	Vértice Gaeta (Ebro)	XI-XII-XIII-XIV-XV	Agosto-sept. 1938

En cuanto a los grupos de artillería, estuvieron en todas partes.

El Poder

